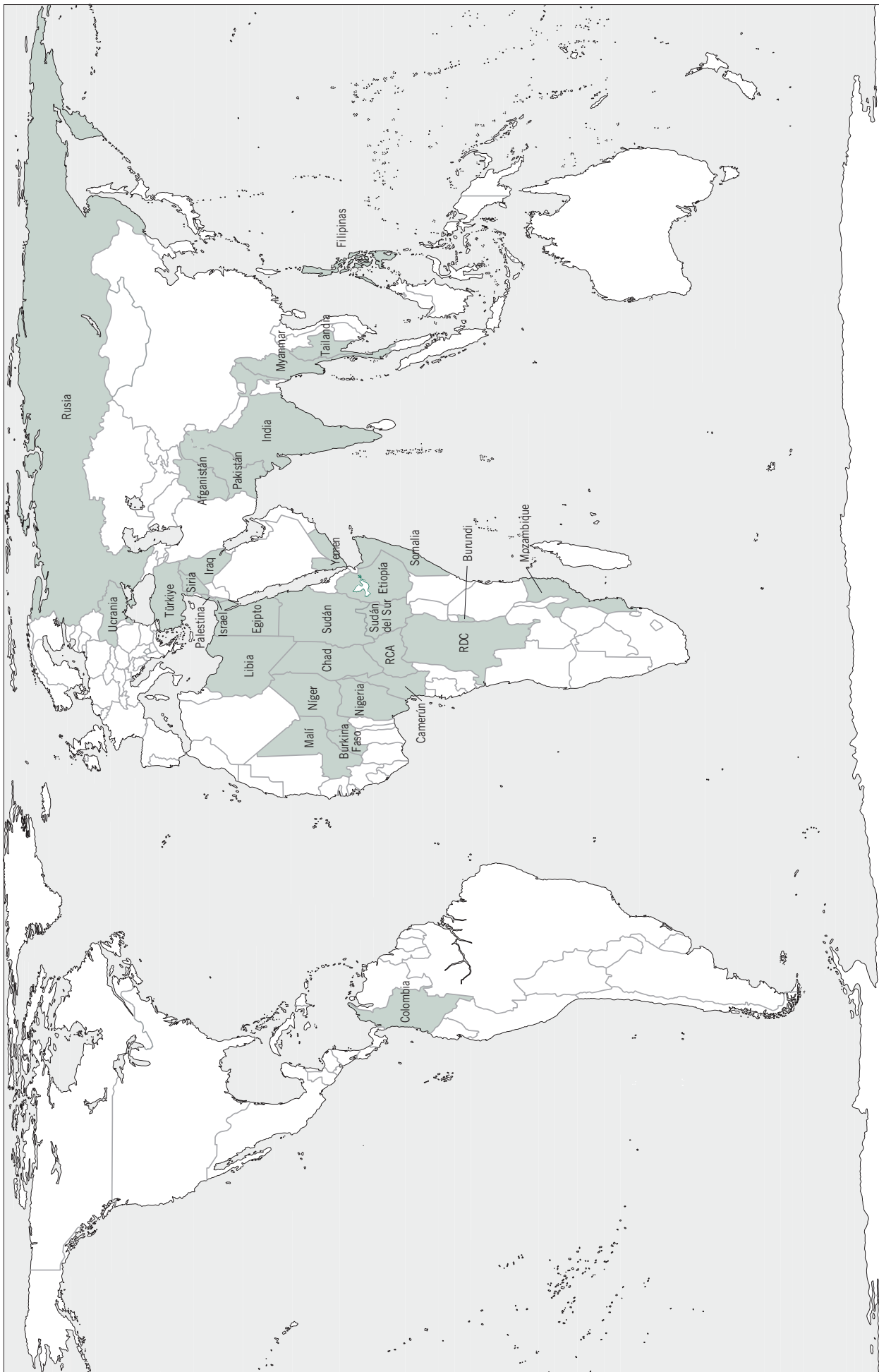


Mapa 1.1 Conflictos armados



1. Conflictos armados

- Durante 2023 se registraron 36 conflictos armados, un balance relativamente superior que el año anterior (33 casos) y la cifra más alta desde 2014.
- La mayoría de conflictos armados se concentró en África (18) –la mitad del total– mientras que el resto se distribuyó entre Asia y el Pacífico (nueve), Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).
- En el 42% de los conflictos armados se registró un deterioro asociado a mayores niveles de violencia e inestabilidad en 2023, un porcentaje significativamente superior al 30% de casos que había empeorado el año anterior.
- Se reactivó la guerra en el norte de Malí entre el Gobierno y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo de paz de Argel de 2015 organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente.
- Las fuerzas especiales amhara y las milicias Fano rechazaron su disolución e integración en la Policía y en el Ejército de Etiopía y se enfrentaron al Gobierno Federal, provocando una grave escalada de los enfrentamientos.
- La escalada de la violencia del M23 en el este de RDC provocó una de las principales crisis humanitarias y de desplazamiento a nivel mundial y amenazó con desencadenar un conflicto directo entre Rwanda y RDC.
- En Sudán, el conflicto armado iniciado el 15 de abril entre el Ejército y el grupo paramilitar Rapid Support Forces generó el desplazamiento forzoso de más de 7,5 millones de personas y la muerte de más 13.000 tras ocho meses de enfrentamientos.
- La violencia en Colombia se mantuvo en niveles elevados, aunque se redujeron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos ELN y EMC gracias a los acuerdos de alto el fuego alcanzados.
- En Myanmar se produjo la mayor ofensiva contra las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado de 2021, protagonizada por los grupos armados que conforman la Alianza de los Tres Hermanos.
- La invasión y guerra en Ucrania causó graves daños en su segundo año, con 3,7 millones de personas desplazadas internas, seis millones refugiadas en Europa y cerca de medio millón fuera de Europa.
- La campaña israelí contra Gaza en represalia por el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre fue denunciada como un castigo colectivo y genocidio, en un contexto de efectos desestabilizadores para toda la región.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2023. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2023, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2023.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2023

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/ Noroeste y Suroeste) -2018-	Interno Internacionalizado	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores	2
	Autogobierno, Identidad		=
Etiopía (Amhara) -2023-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Amhara, milicia amhárica Fano	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Oromiya) -2022-	Interno	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army (OLA), milicia amhárica Fano	3
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Etiopía (Tigré) -2020- ⁶	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, cuerpos de seguridad y milicias del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF), cuerpos de seguridad de las regiones de Amhara y de Afar, milicia amhárica Fano	1
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		Fin
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli, Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) con sede en Tobruk, grupos armados de diverso signo –incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) (también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia o ALAF), ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner–, Türkiye	1
	Gobierno, Recursos, Sistema		=

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2023 con la del 2022, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2023 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
- La situación en la región etíope de Tigré dejó de ser considerada conflicto armado a principios de 2023 por la evolución positiva de los acontecimientos en lo concerniente a la reducción significativa de la violencia y de sus impactos, así como en lo relativo a la implementación positiva del acuerdo de 2022. Véase Escuela de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2024.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, Marco Estratégico Permanente (CSP) -reúne a los grupos armados afiliados a CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA) y la Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción)- Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, MINUSMA, Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Mozambique (Norte) -2017-	Interno internacionalizado	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Estado Islámico Provincia de Mozambique (ISMP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”	1
	Sistema, Identidad		↓
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), coalición armada opositora Siriri, milicia étnica AAKG, milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Rusia, Grupo Wagner	2
	Gobierno, Recursos		=
RDC (este) -1998-	Internacional	RDC, Burundi, Angola, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur), SAMIDRC (Fuerza regional de la SADC, compuesta por Sudáfrica, Malawi y Tanzania), milicias progubernamentales Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP, conocidos como Wazalendo, compuestos por decenas de antiguas milicias Mai Mai y otros grupos armados de Kivu Norte y Kivu Sur, como APCLS, PARECO-FF, Nyatura, Raia Mutomboki), FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), empresas militares privadas (Agemira RDC y Congo Protection); Movimiento 23 de Marzo (M23), Twirwaneho, Rwanda; otros grupos armados no adscritos en Wazalendo, grupos armados burundeses; grupo armado de origen ugandés LRA; grupos y milicias comunitarias de Ituri (entre otros, CODECO/URDPC, FPIC, FRPI, MAPI, Zaïre)	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		=
RDC (oeste) -2023-	Interno	RDC, milicias comunitarias teke, milicias comunitarias yaka (entre otros, el grupo armado Mobondo) y otras milicias de comunidades aliadas	2
	Identidad, Recursos, Territorio		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Mali, Níger, Costa de Marfil, Togo, Benín, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Mali, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Mali, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Türkiye, ATMIS, EUNAVFOR Somalia (Operación Atalanta), Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		↑
Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) -2023-	Interno	República de Somalilandia, administración SSC-Khatumo (estado de Khatumo), estado de Puntlandia, al-Shabaab	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Sudán -2023- ⁷	Interno internacionalizado	Gobierno (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA, Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, Beja National Congress, Beja Armed Congress, milicias comunitarias, Grupo Wagner	3
	Gobierno, Autogobierno, Recursos, Identidad		↑

7. En años anteriores en Sudán se identificaban dos conflictos armados diferenciados: Sudán (Darfur) -2003- y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2012. Ambos conflictos, caracterizados como internos-internacionalizados y motivados por Autogobierno, Recursos e Identidad, se analizan en la presente edición conjuntamente dentro del conflicto armado Sudán -2023. Este hecho se debe a que las dinámicas del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), afectan a una gran parte del país y, de forma particular, a las regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Además, los actores armados irregulares de estas regiones también participan activamente en las hostilidades, tomando parte activa en la contienda.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwan disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony ("Agwalek"), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) -que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↓
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, grupos narcoparamilitares	2
	Sistema		=
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Frente Nacional de Resistencia (NRF), ISIS-KP, Afghanistan Freedom Front (AFF)	2
	Sistema		↓
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraike, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		=
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF	3
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ISIS-KP	3
	Sistema		↑
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, BLA, BNA, BLF y BLT; LeJ, TTP, ISIS-KP	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
EUROPA			
Türkiye (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia – Ucrania -2022- ⁸	Internacional	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania	3
	Gobierno, Territorio		=
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)	1
	Sistema		↓
Irak -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Türkiye	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		↓

8. Entre 2014 y 2021 la guerra en el este de Ucrania era analizada como un conflicto interno internacionalizado, dentro del caso de análisis "Ucrania (este)". Véase ediciones anteriores a 2022 de este informe.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
Israel – Hezbollah ⁹ -2023-	Internacional	Israel, Hezbollah	1
	Sistema, Territorio, Recursos		↑
Israel – Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar alSham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Türkiye, Hezbollah, Irán, Rusia, Grupo Wagner, Israel.	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), Security Belt Forces, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), EEUU y coalición militar internacional Guardián de la Prosperidad	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2023

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2023,

incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

En línea con la tendencia ya observada el año anterior, **en 2023 aumentó el número de conflictos armados a nivel mundial**. En total se contabilizaron 36 contextos de conflicto, frente a los 33 de 2022 y 32 de 2021. En años previos, entre 2018 y 2020, se habían registrado 34 casos. **El total de conflictos armados de 2023 es la cifra más alta desde 2014. Las dinámicas de violencia motivaron que cinco nuevos escenarios pasaran a ser considerados como conflictos armados en 2023.** Cuatro de ellos se ubican en África. En Etiopía, en la región de Amhara, la decisión del Gobierno Federal de desarmar y disolver a las milicias paramilitares Fano para integrarlas en el Ejército y la Policía derivaron en serios enfrentamientos entre integrantes de estas milicias y miembros de las fuerzas gubernamentales.

9. Este conflicto armado involucra e impacta de maneras diversas a otros actores regionales. En anteriores ediciones del informe las dinámicas de esta disputa eran analizadas en el capítulo de Tensiones bajo la denominación "Israel – Siria – Líbano" y los análisis de los últimos años destacaban la creciente implicación también de Irán en esta contienda.

En el Cuerno de África, las hostilidades entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia –región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa– y milicias de la región de Khatumo –que pretende convertirse en un nuevo estado en el seno de Somalia, aunque forma parte de Somalilandia– escalaron de manera significativa desde principios de 2023 y continuaron activas durante todo el año. Mientras, en la zona oeste de RDC, el conflicto entre las comunidades teke y yaka en torno a disputas por la propiedad de la tierra que se había iniciado el año anterior en la provincia de Mai-Ndombe se agravó y la violencia se extendió a varias provincias vecinas en 2023. En Sudán también se identificó el estallido de un nuevo conflicto armado que involucró principalmente a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) con el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF). Las dinámicas de violencia que escalaron a partir del mes de abril acabaron afectando a gran parte del país y de manera especial a la región de Darfur y a las de Kordofán y Nilo Azul, donde los actores armados de esas áreas se implicaron activamente en las hostilidades. Por ello, los conflictos armados en estas regiones sudanesas, que previamente en este informe se analizaban por separado, en esta edición se analizan conjuntamente como parte del conflicto más amplio en Sudán. El último nuevo escenario de conflicto se ubicó en Oriente Medio, donde la intensificación de tensiones en toda la región derivadas de la crisis en Gaza abrió un frente de especial relevancia en el área fronteriza entre Israel y Líbano. El incremento en la magnitud, frecuencia y alcance de las hostilidades entre las fuerzas israelíes y Hezbollah y los impactos de esta violencia motivaron que el caso pasara a ser considerado conflicto armado a finales de 2023.¹⁰ **En comparación con 2022, también hubo un conflicto armado que finalizó durante 2023:** la significativa reducción de la violencia, el repliegue de grupos armados locales y fuerzas extranjeras y el desarme efectivo de combatientes tras la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2022 entre el Gobierno Federal de Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré motivaron que este caso dejara de ser considerado como conflicto armado en 2023.¹¹

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, durante 2023 se mantuvo la tendencia observada en períodos previos y la gran mayoría de casos continuaron concentrándose en África (18) y Asia y el Pacífico (nueve), seguido de Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno). **El continente africano, por tanto, concentró la mitad de los casos de conflicto armado (50%) a nivel global.**

África concentró la mitad de los conflictos armados en 2023, con un total de 18 casos (50%), seguida de Asia y el Pacífico (nueve casos), Oriente Medio (cinco), Europa (dos) y América (uno)

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2023



Respecto a la relación de los actores implicados en el conflicto y el escenario de las hostilidades, se identificaron conflictos armados de carácter interno, internos internacionalizados e internacionales. Aunque los conflictos armados internos internacionalizados continuaron siendo la mayoría, siguiendo la tendencia de años previos, en 2023 se incrementó el número de casos tanto de conflictos internos como de internacionales. Los conflictos armados considerados eminentemente internos representaron un 17% de los casos en 2023 y su número creció en términos comparativos con el año anterior. Si en 2022 eran cuatro los casos de este tipo, en 2023 se contabilizaron seis casos. A Etiopía (Oromiya), Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur) se sumaron en 2023 los casos de RDC (oeste) y Somalia (Somalilandia-SSC Kathumo). De esta manera, si la tendencia hasta entonces era que la mayor parte de los conflictos armados internos se concentraba en Asia, en 2023 este tipo de casos se repartieron equitativamente entre el continente asiático y el africano. Otros cinco casos de conflicto armado fueron de carácter internacional, una cifra que también aumentó respecto a períodos precedentes, pasando de tres casos en 2022 a cinco en 2023. Al conflicto armado que transcurre en la región africana de Sahel Occidental, la disputa palestino-israelí en Oriente Medio y la guerra Rusia-Ucrania se sumaron en 2023 los casos de Israel-Hezbollah, vinculado a la crisis de Gaza, y el de RDC (este). Respecto al conflicto armado entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah, cabe destacar que el caso venía siendo analizado en ediciones previas del informe como una tensión de carácter internacional bajo la denominación “Israel-Siria-Líbano”. Aunque Israel y Hezbollah son los protagonistas del conflicto armado, la disputa involucra de manera indirecta e impacta de diversas maneras en otros actores regionales. Esto incluye también a Irán, crecientemente implicado en la

10. Ibid.

11. Para más información, véase el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

contienda en los últimos años por su estrecha relación con Hezbollah, lazos que se han intensificado en el marco de la guerra en Siria. En cuanto a RDC (este), este conflicto armado que data de finales de los noventa del siglo XX venía siendo analizado como un caso interno internacionalizado, pero en la presente edición es considerado como internacional por la constatación de la presencia y participación directa de Rwanda en las hostilidades, información ratificada por el Grupo de Expertos de la ONU.

El resto de casos, equivalentes al 69% –25 de 36– fueron de carácter interno internacionalizado, un porcentaje que evidencia una reducción relevante respecto a años previos –en 2022 representaron el 79% y en 2021 el 81% de los casos. Estos conflictos armados se caracterizan porque, aunque parte de las dinámicas sean internas, alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados, grupos armados de acción transfronteriza y empresas internacionales de seguridad privada, entre otros.

Aunque los conflictos armados internos internacionalizados continuaron siendo mayoría, se incrementó el número de casos internos e internacionales

Siguiendo la tendencia de años anteriores, en 2023 continuaron teniendo un papel las misiones internacionales de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en especial en el marco de conflictos armados en el continente africano. Durante 2023, la ONU continuó operando en contextos como RCA (MINUSCA), Sudán del Sur (UNSMISS), Malí (MINUSMA) y RDC (MONUSCO), aunque en un escenario de numerosas dificultades en varios de ellos que derivaron en el inicio de la retirada o en la salida total de la misión en estos últimos dos contextos.

El caso más destacado fue el de la MINUSMA, la misión de la ONU que dejó Malí a finales de 2023 después de una década y tras haberse convertido en la segunda misión con más muertes en la historia de la ONU. El anuncio del Gobierno maliense sobre el cierre de la misión motivó los primeros enfrentamientos armados en el país entre los signatarios del acuerdo de paz de 2015, en especial en el norte del país, donde también se produjeron disputas por el control de las bases de la MINUSMA. Estos acontecimientos tuvieron como trasfondo el deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus hasta entonces aliados, tras el acercamiento del Gobierno militar a Rusia y a la empresa de seguridad privada rusa Grupo Wagner en 2022. En el caso de la RDC, tras la petición del Gobierno, a principios de 2024 también se inició la retirada de la MONUSCO –2.000 cascos

azules abandonaron el país en esta primera fase–, en un contexto de críticas y protestas contra la misión, acusada de inacción ante la escalada de la violencia. En una línea similar, en el caso de Sudán, la severa crisis de seguridad en el país en 2023 motivó que en diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera poner fin al mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS) –aunque de carácter político, no militar– y dispusiera el cierre de sus operaciones para el primer trimestre de 2024.

Cabe destacar que en los últimos años se ha ido gestando un cambio de tendencia que ha culminado en 2023 con el cierre o anuncio de cierre de diversas operaciones bilaterales y multilaterales en el continente africano. Además de la retirada de tres importantes misiones de la ONU en África Subsahariana –dos de ellas con mandatos de mantenimiento de la paz (Malí y RDC) y otra misión de asistencia política (Sudán)–, las misiones de la UE y de Francia en el Sahel Occidental también han iniciado o culminado su retirada. Además, también se ha iniciado el cierre programado de la misión de la UA en Somalia, ATMIS, y la disolución de la coalición regional antiyihadista G-5 Sahel después de que Burkina Faso y Níger anunciaran en diciembre de 2023 su retirada de la alianza, siguiendo los pasos que anteriormente había realizado Malí. Los dos miembros restantes, Mauritania y Chad, reconocieron que la salida de tres de los cinco miembros fundadores representaba la disolución de facto de la alianza creada en 2014. Esta dinámica responde a un a diversos factores. Por un lado, las tensiones geopolíticas entre Occidente y Rusia derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Por otra parte, existe un componente de apropiación, en respuesta a los cambios en la jefatura de algunos Estados de África Occidental mediante golpes de Estado en los últimos años, donde las presiones y dobles raseros de las organizaciones regionales e internacionales comportaron el rechazo a la presencia de la comunidad internacional y en especial de Francia como gendarme regional postcolonial en el marco de la Françafrique. En otros casos ha pesado la percepción (más o menos cuestionable) por parte de la ciudadanía del fracaso de estas misiones a la hora de llevar a cabo sus mandatos después de años de presencia ininterrumpida en el continente. Países como RCA o Chad tampoco son ajenos a esta tendencia, que ha motivado movilizaciones de rechazo a la presencia de Occidente, más o menos instrumentalizadas políticamente o incluso instigadas desde países extranjeros.

Organizaciones regionales continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Europea (UE) –EUNAVFOR en Somalia o la misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) en Mozambique. Esta última misión, SAMIM, en

colaboración con tropas ruandesas, amplió sus acciones en 2022 a Cabo Delgado y en 2023 tuvo un papel relevante en la reducción de los hechos de violencia de la insurgencia que reivindica agendas yihadistas¹² en esta región mozambiqueña. Cabe añadir también la creación de la misión de la organización SADC en RDC (SAMIDRC, compuesta por tropas de Sudáfrica, Malawi y Tanzania) en 2023 sustituyendo a la misión de la EAC en RDC, criticada por su inoperancia durante todo el año y que se retiró del país a petición del Gobierno en diciembre. **Durante 2023 también siguieron activas diversas misiones de carácter híbrido**, que involucran tanto a organizaciones regionales como a Estados. Entre ellas cabe mencionar por ejemplo la operación militar marítima en el Cuerno de África y Océano Índico, la Combined Task Force 151, que actúa en Somalia y que está liderada por EEUU en colaboración con la misión europea EUNAVFOR. Otro actor similar es la coalición internacional contra el grupo armado Estado Islámico (ISIS) -Global Coalition Against Daesh-, establecida en 2014, liderada por EEUU e integrada por múltiples actores (87 en total), incluyendo la UE y la Liga Árabe. Aunque inicialmente su foco estuvo en Iraq y Siria, esta coalición opera ahora también en África Occidental ante el incremento de la actividad de grupos con agendas yihadistas en esta zona.

En cuanto a la **participación de terceros países**, esta dimensión continuó presente en múltiples conflictos internos internacionalizados y añadió complejidad en numerosos casos. En Yemen, por ejemplo, ante el incremento de las acciones armadas de los al-houthistas en el Mar Rojo y los ataques a Israel en represalia por la ofensiva militar israelí en Gaza, EEUU se involucró militarmente. Así, en diciembre 2023, Washington anunció el establecimiento de una operación militar internacional en la zona, clave para el comercio marítimo mundial, con la intención declarada de frenar las acciones de los al-houthistas. La Operación Guardián de la Prosperidad, está integrada también por Reino Unido, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Sri Lanka. Esta dinámica de confrontación añadía incertidumbre a las perspectivas de una salida negociada en Yemen, en un año de intensificación del diálogo entre Arabia Saudita y los al-houthistas.¹³ Irán continuó siendo un actor activamente implicado en conflictos armados en Oriente Medio, a través de su apoyo al régimen de Bashar al-Assad en Siria, a través de milicias afines en Iraq y de apoyo político, logístico y/o militar a otros actores de la región, como los propios al-houthistas o el grupo palestino Hamas. **Evidenciando la internacionalización e interrelación de diversos conflictos armados de la región, la crisis en Gaza también**

intensificó los ataques contra objetivos estadounidenses en Iraq y Siria, así como las acciones armadas de Israel y EEUU en estos dos países contra actores de la órbita iraní autodenominados como “eje de la resistencia”. Paralelamente, y en línea con la dinámica observada en años previos, Türkiye continuó con su campaña militar contra el PKK a través de ataques transfronterizos contra posiciones del grupo armado kurdo en el norte de Iraq. Adicionalmente, numerosos grupos armados no estatales desplegaron ofensivas transfronterizas –como el ya mencionado grupo armado yemení al-houthistas y sus acciones armadas contra Israel y con destino a Israel en el Mar Rojo. Asimismo, en 2023 las diferentes facciones de Boko Haram continuaron operando en la cuenca del Lago Chad –que involucra territorios de Nigeria, Camerún, Níger y Chad– y se intensificaron los enfrentamientos por la supremacía en la región entre este grupo e ISWAP, filial de ISIS en el África Occidental que también actúa en varios países de la zona.

Respecto al papel de empresas de seguridad privadas, cabe destacar el papel relevante del ruso Grupo Wagner, que se desempeñó como actor en al menos siete conflictos armados en varios continentes, principalmente en África. En 2023 la organización estuvo presente en Libia, Malí, Burkina Faso, Níger, RCA, Sudán, Rusia-Ucrania y Siria. En este último país, por ejemplo, protagonizó enfrentamientos con miembros de ISIS en apoyo a las fuerzas gubernamentales sirias. En Malí también actuó de la mano del Gobierno y las fuerzas de seguridad locales en su disputa con varios grupos armados árabe-tuaregs. En el conflicto entre Ucrania y Rusia, el grupo Wagner tuvo un papel especialmente significativo en torno a Bajmut (región de Donetsk), uno de los frentes de guerra más activos de 2023 y donde la organización reconoció haber sufrido unas 20.000 bajas. Cabe destacar que en junio de 2023, y tras meses de tensiones y desencuentros con las autoridades rusas, el Grupo Wagner protagonizó un alzamiento militar contra Moscú. La acción fue desmantelada y el líder la organización, Yevgueni Prigozhin, murió dos meses después al caer el avión en que viajaba, en una acción atribuida a Moscú. **La rebelión de Wagner y sus consecuencias acabó teniendo impactos en las operaciones de las milicias del grupo.** Así, por ejemplo, la situación motivó la retirada de centenares de mercenarios de la organización que estaban desplegados en RCA.

En lo que respecta a las **causas de los conflictos armados**, en 2023 se confirmó la naturaleza multicausal de los conflictos armados contemporáneos. Siguiendo también la tendencia de años previos, **la mayor parte de los conflictos –26 de los 36, equivalentes a un 72%–**

12. El concepto de yihad tiene y ha tenido históricamente múltiples connotaciones. El término entraña la idea de “esfuerzo” y muchos musulmanes y estudiosos del Islam rechazan su uso para calificar a grupos armados por considerar que utilizan un concepto religioso para justificar una violencia ilegítima. Teniendo en cuenta estos debates y, al mismo tiempo, el extendido uso del término en el ámbito de las relaciones internacionales y estudios de paz y seguridad, en este informe se alude a “grupos con agendas yihadistas” cuando son las propias organizaciones armadas las que en sus narrativas y declaración de intenciones apelan a su particular interpretación de los preceptos islámicos.

13. Para más información, véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

tuvo entre sus principales causas el cuestionamiento del sistema político, económico, social o ideológico del Estado y/o las disputas en torno a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos. Durante 2023, y en consonancia con la tendencia observada en los últimos años, tuvo relevancia el factor causal vinculado a las disputas en torno al sistema, presente en 19 de los 36 casos (53%) y relacionado en la mayoría de ellos a la presencia de actores armados con agendas políticas que reivindican una presunta inspiración yihadista a partir de su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos se encuentran por ejemplo Boko Haram en la Región del Lago Chad, las milicias talibán pakistaníes de TTP o los distintos grupos que se han reivindicado como filiales y/o “provincias” de ISIS más allá de su área de origen en Iraq y Siria, en contextos como en la región del Lago Chad, Somalia, Libia, Egipto (Sinaí), Afganistán, Pakistán, Pakistán (Baluchistán), Filipinas (Mindanao), o Yemen. En algunos de estos casos –como Libia, Egipto (Sinaí) o Filipinas (Mindanao)– estos grupos han reducido notoriamente sus actividades respecto a años previos. En otros tres casos –Colombia, Filipinas (NPA), India (CPI-M)– la dimensión de disputa de sistema estaba asociada a otra tipología de insurgencias, con una línea ideológica vinculada al comunismo y al maoísmo. Los conflictos armados con motivaciones relacionadas a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos, que derivan en luchas por erosionar o acceder al poder, estuvieron presentes en 14 de los 36 casos (39%). Entre ellos, cabe mencionar contextos como el de Libia -donde la disputa continuó protagonizada por pugnas de poder entre gobiernos rivales-, y otros como el de RCA, Somalia, Sudán, Siria o Yemen.

En un 42% de los conflictos armados se observó un deterioro y un incremento en los niveles de violencia en 2023

Otro importante elemento a destacar entre las causas principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y/o de autogobierno, presentes en 21 de los 36 conflictos armados en 2023, es decir, en un 58% de los casos. En línea con años previos, de estas dos motivaciones tuvo mayor peso el factor asociado a demandas identitarias, identificadas en 22 casos (61% del total de casos), frente a 14 casos (39%) en los que fueron relevantes las cuestiones de autogobierno. Las aspiraciones identitarias estuvieron presentes en los nuevos casos de conflictos armados en África en 2023, por ejemplo vinculados a las reivindicaciones del nacionalismo amhara en Etiopía, al interés de la administración de SSC-Khatumo de convertirse en un nuevo estado de Somalia –en el marco de la disputa histórica por regiones fronterizas entre Somalilandia y Puntlandia–, o a los enfrentamientos y luchas de poder entre las comunidades teke y yaka en RDC (oeste). Otros casos con conflictos en torno a cuestiones de autogobierno y/o identidad fueron Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste), Etiopía (Oromiya), Etiopía (Tigré), Malí, Mozambique (norte), la región del Sahel Occidental, RDC (este), Sudán,

Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Pakistán (Baluchistán), Tailandia (sur), Türkiye (sudeste), Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

Finalmente, respecto a los factores de causalidad, cabe mencionar que numerosos conflictos armados tuvieron entre sus motivaciones principales el control de territorio y/o de recursos. En 15 de los 36 casos (42%) se identificaron este tipo de factores. En este binomio destacó especialmente el peso de las disputas en torno a recursos, presentes en un tercio (33%) de los conflictos armados en 2023. En línea con años anteriores, **los contextos que involucraron disputas por recursos se concentraron principalmente en África, aunque también estuvo presente de manera indirecta en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.** A lo largo de 2023, las disputas en torno a estas cuestiones fueron relevantes en el conflicto de la región del Lago Chad –escenificados en enfrentamientos entre Boko Haram y la filial de ISIS, ISWAP–, Libia –con disputas por el control de recursos y territorio entre los múltiples grupos armados que operan en el país norteafricano– o en RCA –donde las milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF) recibieron derechos de explotación minera a cambio de combatir a grupos armados. RDC (este) siguió siendo un caso emblemático de los conflictos armados con un importante trasfondo vinculado al control de los recursos. En 2023, la violencia generalizada en este contexto incrementó la explotación ilegal de recursos naturales, colapsaron los procedimientos de control en diversos yacimientos mineros y repercutió en un aumento del contrabando hacia Rwanda. Zonas de actividad minera también suelen ser escenario de hechos de violencia en Pakistán (Baluchistán), otro conflicto armado en el que pesa la disputa por recursos como una de sus causas, y también en la India, en el marco del conflicto con la insurgencia naxalita. Las cuestiones vinculadas al control del territorio, en tanto, estuvieron presentes en cinco casos (14% del total) y fueron especialmente significativas en el caso de Palestina-Israel. La ofensiva militaría israelí en Gaza y las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques de colonos judíos en Cisjordania, que derivaron en masivos desplazamientos forzados y expulsiones de población, fueron señalados como actos que pretendían una limpieza étnica de población palestina para consolidar el control territorial israelí. Estas políticas fueron acompañadas, además, de una multiplicación de autorizaciones para nuevos asentamientos en Cisjordania. La cuestión territorial también fue un elemento clave en el trasfondo de la disputa entre Israel y Hezbollah, con hostilidades que se concentraron en la frontera de facto entre Israel y Líbano.

En cuanto a la **evolución de los conflictos armados en 2023**, el análisis indica un **importante incremento en los casos que evolucionaron hacia mayores niveles de violencia e inestabilidad. En un 42% de los conflictos**

armados se observó un deterioro de la situación, un porcentaje significativamente superior al 30% de casos que habían empeorado el año anterior. **Los casos que presentaron esta tendencia se concentraron en África** –Burundi, Etiopía (Amhara), Malí, la región de Sahel Occidental, RDC (este), RDC (oeste), Somalia, Somalia (Somalilandia – SCC Kathumo), Sudán–, **en Asia** –Myanmar, Pakistán y Pakistán (Baluchistán)– **y en Oriente Medio** –Israel-Palestina, Israel-Hezbollah y Siria. En algunos de estos contextos, como por ejemplo en Malí o en Pakistán, la escalada de violencia puso fin a acuerdos de cese el fuego que habían estado vigentes –durante años en el primer caso, durante unos meses en el segundo. El resto de conflictos armados se distribuyeron de manera prácticamente similar entre aquellos que presentaron unos niveles de hostilidades y violencia similares a los del año anterior (10 casos, equivalentes a 28%) y los que presentaron niveles comparativamente más bajos (11 contextos, que representan el 30%). Entre los que evolucionaron hacia una disminución de los enfrentamientos cabe destacar que, en algunos contextos, esta tendencia estuvo vinculada al aparente debilitamiento y reducción de actividad por parte de algunos de los actores armados en disputa como resultado de las propias dinámicas de las hostilidades. Fue por ejemplo el caso de Mozambique (norte) –donde se produjo una notoria reducción en las cifras de letalidad asociadas al conflicto y en el número de episodios violentos dirigidos contra la población civil–, pero también el de otros como Filipinas (Mindanao) o Egipto (Sinaí). En otros escenarios la disminución estuvo vinculada al impacto de procesos de negociación y acuerdos de paz o de alto el fuego, como en Etiopía (Tigré) –que dejó de ser considerado como conflicto armado 2023 debido a la evolución de los acontecimientos tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2022– o en Yemen –donde se mantuvo de facto el acuerdo de alto el fuego suscrito en 2022 y se mantuvieron activos canales de negociación entre los principales actores involucrados en las hostilidades.¹⁴

Cabe destacar también que en muchos de estos contextos la relativa desescalada en los enfrentamientos y/o reducción de los hechos de violencia respecto al año anterior se dio en paralelo a la persistencia de crisis humanitarias y de desplazamiento forzado asociadas al conflicto y de otras graves vulneraciones a los derechos humanos, como bien ilustran los casos de Sudán del Sur o Afganistán, siendo especialmente grave en este último caso las violaciones a los derechos de las mujeres. Los casos de Egipto (Sinaí) y Tailandia (sur) siguieron siendo considerados como conflictos armados a pesar de que el número de muertes disminuyó y se situó por debajo del umbral de 100 víctimas mortales en un año debido a que la reducción relativa de la violencia en 2023 parecía estar más relacionada

En 2023, prácticamente la mitad (47%) de los casos a nivel mundial fueron conflictos armados de alta intensidad

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2023

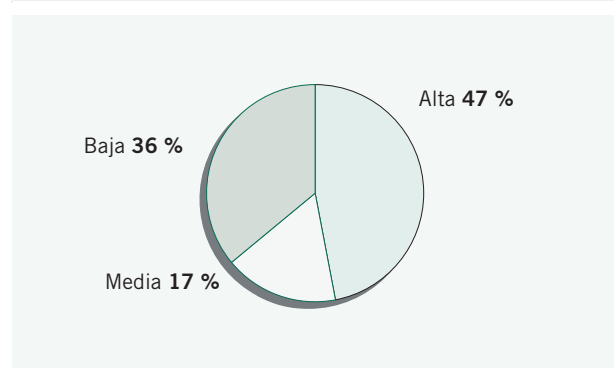


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones

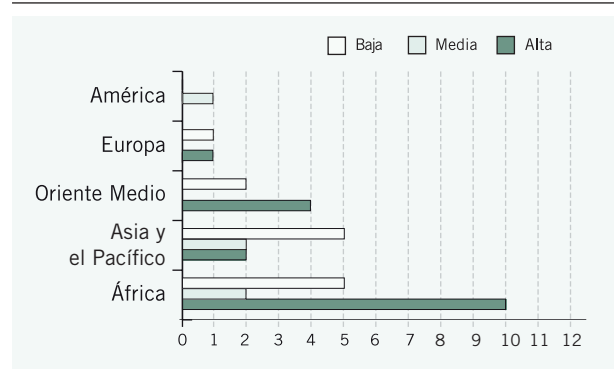
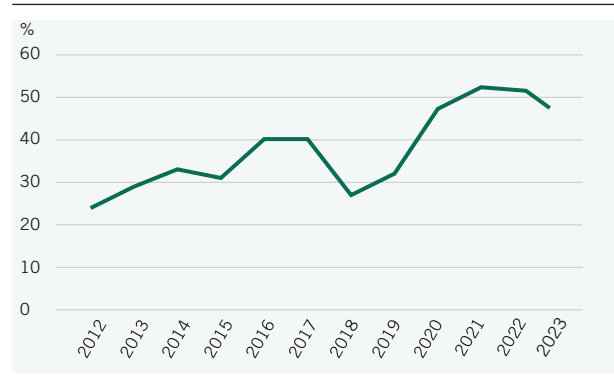


Gráfico 1.4. Proporción de conflictos armados graves en la última década



con cuestiones circunstanciales, en el caso de Tailandia (sur), y a los indicios de repliegue (que no desaparición) de los actores armados vinculados a ISIS en el caso de Egipto (Sinaí). En este último caso, además, la crisis en Gaza añadía incertidumbre sobre la situación de seguridad futura en el Sinaí.

Respecto a la **intensidad de los conflictos armados**, en 2023 los casos graves continuaron representando la mayor parte (47%) del total. **Se mantuvo así la tendencia observada**

14. Para más información, véase el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

en los últimos años y que apunta a un aumento en el porcentaje de conflictos armados de alta intensidad, caracterizados por elevados niveles de letalidad –por encima del millar de víctimas mortales anuales–, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Si consideramos los datos desde 2011 (véase gráfico 1.4), los conflictos armados de alta intensidad solían representar menos de un tercio del total de casos a nivel global –a excepción de los años 2016 y 2017 en los que se situaron en 40%. Desde 2020 el porcentaje de casos de este tipo se ha incrementado, situándose en torno a la mitad del total de conflictos armados a nivel global: 47% en 2020, 53% en 2021, 52% en 2022 y 47% en 2023. El porcentaje de 2023 representa, por tanto, una ligera reducción respecto al año anterior, pero en términos generales mantiene la tendencia. En línea con lo observado en años previos, el mayor porcentaje de casos de este tipo se concentró en África, que albergó 10 de los 17 conflictos armados de alta intensidad, es decir, el 59% del total de contextos graves que se registraron a nivel mundial. Se trata de una proporción menor respecto al año anterior, en el que los casos africanos representaron 70% del total de conflictos armados de alta intensidad. Respecto al número total de casos de conflicto armado en África, 10 de sus 18 conflictos armados eran de alta intensidad (55%), un porcentaje significativamente menor que el observado en los dos años previos –75% en 2022, 80% en 2021. La segunda región que albergó un mayor número de conflictos armados de alta intensidad fue Oriente Medio, con cuatro casos, que representan 23% del total mundial –y que equivalen a dos tercios (67%) de los casos en la región, cuatro de seis casos. En Asia aumentó de uno a dos el número de conflictos armados graves respecto al año anterior, mientras que en Europa se mantuvo en uno (50% de los casos en la región) y en América no se contabilizaron este tipo de casos. **Los 17 conflictos armados de alta intensidad en 2023 fueron:** Etiopía (Amhara), Etiopía (Oromiya), Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia-Ucrania, Iraq, Israel-Palestina, Siria y Yemen.

Como en años previos, **algunos de los conflictos armados de alta intensidad presentaron un patrón de hostilidades y dinámicas de violencia que provocaron niveles de letalidad muy superiores al umbral del millar de víctimas mortales anuales**, además de otros graves impactos en términos de seguridad humana y repercusiones en infraestructuras y en el territorio. Así, por ejemplo, en **RDC**, la escalada de la violencia en las cinco provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika) costó la vida a casi 3.500 personas. La reactivación de la guerra en el norte de **Malí** contribuyó a un incremento en los hechos de violencia en el país que causaron más de 4.000 muertes. En **Somalia**, la intensificación de las acciones

armadas de grupos con agendas yihadistas contribuyó a un balance anual de casi 8.000 víctimas mortales. En **Sudán**, el estallido en abril de un nuevo conflicto armado protagonizado por las Fuerzas Armadas Sudanesas y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) y en el que se implicaron otros actores armados provocaron más de 13.000 fallecidos en 2023 en todo el país, en especial en la capital y en los estados de Darfur. Una cifra similar de personas fallecidas causaron los episodios violentos en la **región del Sahel Occidental**, en el área conocida como la “triple frontera” (Malí, Burkina Faso y Níger) donde murieron unas 13.500 personas en 2023. Una cifra incluso mayor de víctimas mortales se registró en **Myanmar**, donde más de 15.000 personas perdieron la vida en 2023, especialmente a partir de octubre con la escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad birmanas y diferentes grupos armados étnicos. En el caso de **Rusia-Ucrania**, algunos balances apuntaban a cerca de 2.000 civiles fallecidos por la violencia del conflicto –reconociendo que las cifras podrían ser más elevadas–, mientras que algunos balances del conjunto de víctimas mortales señalaban más de 30.000 fallecidos, civiles y combatientes durante el año.

En Oriente Medio, los conflictos armados continuaron caracterizándose por los elevados niveles de letalidad: más de 6.000 muertes en 2023 en el caso de **Siria** y más de 3.000 en el conflicto armado en **Yemen**. Se trata de cifras altas, pero comparativamente muy inferiores a las registradas en los peores años de estos conflictos armados –más de 50.000 en 2016 y 2015 y más de 70.000 en 2014 en el caso de Siria y en torno a las 20.000 muertes anuales entre 2019 y 2021 en el caso de Yemen. Mención especial amerita el caso de **Israel-Palestina** tras la acusada escalada de violencia a partir del último trimestre de 2023. El ataque sin precedentes de Hamas y otros grupos palestinos el 7 de octubre y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza derivó en la muerte de más de 34.000 personas en tan solo tres meses: cerca de 1.200 en Israel –entre israelíes y extranjeras– y 33.000 en Gaza –25.000 fallecidas y otras 8.000 sepultadas bajo los escombros–, además de más de otras 500 muertes palestinas en Cisjordania a lo largo del año. El caso destaca no solo por los gravísimos impactos en la población civil –la operación militar israelí en la Franja se convirtió en un castigo colectivo y fue crecientemente señalado como un genocidio (véase el próximo apartado)– sino por la extraordinaria magnitud de la violencia y la destrucción en un período acotado de tiempo. Israel estaba utilizando en Gaza un armamento con enorme potencial destructivo, causando estragos en un territorio de tan solo 365 kilómetros cuadrados y que se encuentra entre los más densamente poblados a nivel mundial. **Al finalizar el año, análisis advertían que la tasa de mortalidad diaria en Gaza a causa de la ofensiva israelí era más alta que la de cualquier otro conflicto armado en el mundo en el siglo XXI.**

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siguiendo la tendencia de años previos, África albergó el mayor número de conflictos armados a nivel global con 18 casos, que representan el 50% del total. • Disminuyó de manera relevante el número de conflictos armados de alta intensidad en el continente –10 de 18 casos–, que pasaron de representar el 75% en 2022 a 55% en 2023. • La mitad de los conflictos armados de la región, nueve de 18, registraron un deterioro respecto al año anterior; mientras que en otros seis contextos la situación evolucionó de manera similar. En tres casos se observó una significativa disminución en los niveles de violencia, entre ellos el de Etiopía (Tigré) que dejó de ser considerado conflicto armado en 2023. • La inmensa mayoría de los conflictos armados en el continente fueron de carácter interno internacionalizado –13 de los 18 contextos o 72%–, mientras que otros dos fueron internacionales –los conflictos en la región del Sahel Occidental y en RDC (este). Otros tres presentaban un carácter eminentemente interno: Etiopía (Oromiya), Etiopía (Amhara) y RDC (oeste), estos dos últimos nuevos conflictos armados en 2023.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. • En 2023 el conflicto armado en Colombia se mantuvo en una intensidad media, con niveles de violencia relativamente elevados a pesar de los acuerdos de alto el fuego que el Gobierno ha alcanzado con varios grupos armados activos y de las negociaciones con el ELN y el EMC. • Aunque en América solo se contabilizó un conflicto armado, la región continuó registrando elevadísimos niveles de violencia producto de otras dinámicas de tensión y criminalidad y destacó por sus altas tasas de homicidios.¹⁵
<p>ASIA Y EL PACÍFICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asia se situó en segundo lugar después de África en cuanto a número de conflictos armados, con nueve en total (25%). • En 2023 el continente albergó dos conflictos armados de alta intensidad –Myanmar y Pakistán– y otros dos de intensidad media –Afganistán y Pakistán (Baluchistán)–, mientras que la mayoría de casos –cinco de los nueve– fueron conflictos armados de baja intensidad. Entre estos últimos, algunos casos que datan de décadas, como el de Filipinas (NPA) o el de India (CPI-M). • En términos de evolución, la mayor parte de los conflictos armados en Asia presentaron una disminución o niveles similares de violencia en comparación con el año anterior –cuatro y dos casos, respectivamente. En un tercio de los contextos se observó un deterioro, que se produjo en los dos casos de alta intensidad –Myanmar y Pakistán– y también en Pakistán (Baluchistán). • Asia continuó destacando por la presencia de conflictos armados de carácter interno. En el continente asiático un tercio –tres de los nueve casos– eran de este tipo: Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur).
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de dos conflictos armados –Rusia-Ucrania y Türkiye (sudeste)–, que representan el 5% del total de casos a nivel global. • En términos de evolución, el conflicto armado derivado de la invasión de Rusia a Ucrania presentó altos niveles de violencia similares a los del año anterior. En Türkiye (sudeste) se observó una disminución en los niveles de letalidad asociados a las hostilidades entre fuerzas gubernamentales y el PKK dentro del país, en parte vinculada al cese de hostilidades unilateral del grupo armado en respuesta al grave terremoto que afectó la región.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la región se registraron seis conflictos armados, uno más que el año anterior, debido a la escalada de violencia entre Israel y Hezbollah vinculada a la crisis de Gaza. Los casos de Oriente Medio representaron un 17% del total mundial. • Después de África, Oriente Medio fue la región que albergó un mayor número de conflictos armados de alta intensidad y, proporcionalmente, fue la zona más afectada del mundo por este tipo de conflictos. Cuatro de los seis conflictos de la región (67%) fueron de intensidad elevada en 2023. • Respecto a la evolución de los conflictos en la región, en la mitad de casos se observó un descenso de los niveles de violencia en comparación con años previos, y en el resto una escalada, que fue especialmente significativa en el caso de Israel-Palestina.

1.2.2. Impactos de los conflictos armados en la población civil

En línea con lo observado en años previos, y tal como vienen denunciando de manera insistente tanto Naciones Unidas como otras organizaciones internacionales y locales, la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados en 2023. Estos impactos se interrelacionaron además con otras crisis, como la emergencia climática, la inseguridad alimentaria o la desigualdad, agravando las vulneraciones de derechos y la situación general de seguridad humana en estos contextos. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en mayo de 2023 y que analiza los hechos de 2022, dibujó un

panorama que confirma las consecuencias en civiles en términos de muertes, heridas, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y desplazamiento forzado. También subrayó que la destrucción de infraestructura esencial –de salud, de electricidad, sanitaria y de agua– privó a miles y miles de personas de acceso a servicios esenciales para sobrevivir.

El informe también alertó del **impacto del uso de armas explosivas en áreas pobladas, con efectos devastadores en la población civil**. Así, en 2022, se identificó que el mayor número de víctimas civiles por este tipo de prácticas se había producido en Ucrania, seguido de Afganistán, Somalia y Siria. Paralelamente, se documentó la utilización de minas antipersonales en contextos como RCA, Colombia, RDC, Myanmar, Ucrania

15. Véase el apartado sobre América en el capítulo 2 (Tensiones).

y Yemen, así como bombas de racimo en Ucrania. A finales de 2022 se constataba una amplia contaminación por remanentes de explosivos en países como Siria e Iraq. En este último país, de hecho, se estimaba que este tipo de artefactos era responsable de un tercio de las bajas civiles. El análisis de los conflictos armados en 2023 en esta edición del informe *Alerta!* ilustran la persistencia y agravamiento de esta problemática en numerosos contextos. En Colombia, el uso de las minas antipersonales continuó provocando víctimas mortales. En Ucrania, las armas explosivas de amplio alcance fueron responsables del 84% de las víctimas mortales civiles y de 95% de los civiles heridos. **Uno de los casos más notorios y emblemáticos en 2023 fue el de Gaza, debido al uso de armamento con un enorme potencial destructivo en un área densamente poblada y sin opciones de salida para la población.** Durante los primeros meses de la campaña israelí el Ejército israelí lanzó sobre la Franja 25.000 toneladas de explosivos –equivalentes a dos bombas nucleares– sobre diversos objetivos, muchos de los cuales fueron identificados a través de sistemas de inteligencia artificial. También se alertó sobre el uso de armas prohibidas en zonas pobladas, como el fósforo blanco. Como resultado de estos ataques indiscriminados y deliberados y de otras medidas como la intensificación del bloqueo y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria –se denunció el uso del hambre como arma de guerra– y la destrucción sistemática de infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, más de 33.000 personas habían muerto en Gaza al finalizar el año, el 70% de las cuales eran mujeres y menores de edad. Los ataques israelíes también provocaron la muerte de más de un centenar de periodistas y trabajadores humanitarios. Ante un panorama de continuas y sistemáticas vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), **diversas voces alertaron sobre la erosión del sistema internacional de protección de la población civil y sobre los dobles raseros a la hora de aplicar algunas medidas de sanción contra los responsables de este tipo de vulneraciones.**¹⁶ Cabe destacar que estos graves impactos de la violencia armada en las poblaciones civiles en numerosos contextos se produjeron además en un **escenario de creciente militarización y aumento del gasto militar a nivel mundial.** El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), referente en este ámbito, constató que en 2023 el gasto militar había aumentado –por noveno año consecutivo– hasta alcanzar los 2,44 billones de dólares.¹⁷

Los conflictos armados también provocaron y/o empeoraron situaciones de crisis humanitaria y continuaron siendo uno de los principales factores tras las crisis de hambre en el mundo, debido a la destrucción de cultivos, maquinaria agrícola o contaminación de territorios con explosivos. El alza en los precios de los alimentos, de los combustibles y fertilizantes –muy influido por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania–,

además de los efectos del cambio climático, agravaron las necesidades de la población civil en numerosos contextos. En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, la explosión de la presa de Kajovka en Jersón (en el sur de Ucrania, en una zona ocupada por Rusia) causó una catástrofe ecológica y humanitaria, al provocar la inundación de amplios territorios, contaminar el agua, desplazar minas explosivas y extensos daños en áreas agrícolas. **Cabe destacar también las interrelaciones de los conflictos armados con fenómenos como el cambio climático provocado por la actividad humana y desastres naturales, que contribuyeron a un deterioro de la situación que afrontan poblaciones civiles en numerosos contextos** e impactaron especialmente en las condiciones de vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad. En 2023, por ejemplo, en Somalia el agravamiento de las dinámicas de violencia se produjo en paralelo a la peor sequía en décadas en el territorio, seguida de las mayores inundaciones en varias generaciones. Esta conjunción de elementos motivó un deterioro de la situación humanitaria y un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria. En Libia, las lluvias torrenciales causadas por una tormenta (Daniel) y vinculadas al cambio climático derivaron en la destrucción de una presa y en la muerte y desaparición de miles de personas en Derna (este), en un contexto marcado por los impactos del conflicto armado, la persistente fractura institucional y serios problemas de gobernanza. En Colombia, la situación humanitaria causada por el prolongado conflicto armado en el país también se vio agravada por los efectos del cambio climático en 2023, debido a las sequías e inundaciones que afectaron diferentes zonas del territorio. Una situación similar se observó en Myanmar, considerado como uno de los países con mayor riesgo de padecer eventos climáticos extremos. En el caso de Siria, la interrelación entre conflicto armado y desastres naturales fue evidente en los impactos del terremoto que sacudió la región –y también a Türkiye– en febrero. El sismo afectó especialmente la zona noroeste del país, un área controlada por la oposición y que alberga a cientos de miles de personas desplazadas internamente a causa del conflicto armado. El régimen sirio intentó controlar e instrumentalizar la ayuda humanitaria a la región, ampliamente denunciada como insuficiente por múltiples actores.

Los conflictos armados también continuaron teniendo **impactos específicos en algunos grupos de población.** En sus informes periódicos sobre las consecuencias de los conflictos en la población civil, el secretario general de la ONU viene alertando sobre los **efectos desproporcionados que padecen las personas de mayor edad, que muchas veces no pueden abandonar las zonas afectadas por las hostilidades** y se ven obligadas a afrontar un mayor riesgo de morir, resultar heridas o no tener acceso a servicios básicos o redes de apoyo. En cuanto a los impactos de los conflictos armados en los niños y las niñas, el informe periódico del secretario

16. Véase “Gaza, la erosión del derecho internacional humanitario y el futuro de orden global”, en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo).

17. SIPRI, “El gasto militar mundial aumenta en medio de guerras, tensiones crecientes e inseguridad”, comunicado de prensa, 22 de abril de 2024.

general publicado a mediados de 2023, y que abarca hechos acontecidos en 2022, constató un aumento en el número de vulneraciones graves contra menores.¹⁸ Si en 2021 se habían confirmado 23.982, en el año 2022 se documentaron 27.180 vulneraciones graves, de las cuales 24.300 fueron cometidas a lo largo de 2022 y 2.880 fueron perpetradas con anterioridad, pero verificadas en 2022. Estos hechos afectaron a casi 19.000 menores, de los cuales la mayoría eran niños, en 24 contextos. El informe subraya que la información proporcionada no refleja la totalidad de violaciones cometidas contra niños y niñas en escenarios de conflicto armado a nivel global, pero sí recoge las tendencias de las vulneraciones más graves. Se identificó así que **las acciones más graves cometidas contra niños y niñas fueron las matanzas, las mutilaciones, el reclutamiento, el secuestro y la detención de menores por su vinculación real o presunta con grupos armados. Las normas de género condicionaron la exposición de menores a estos impactos.** Así, los niños continuaron viéndose más afectados por el reclutamiento, las mutilaciones y los secuestros, mientras que las niñas se vieron desproporcionadamente afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos armados. El informe alertó sobre el particular impacto en niños y niñas en 2022 en contextos como Myanmar –donde las hostilidades contribuyeron a que las violaciones graves se incrementaran en un 140%–, en Sudán de Sur –donde las dinámicas de violencia repercutieron en un aumento del 135% en las vulneraciones graves a menores– o el Sahel Occidental –donde las violaciones graves se incrementaron en un 85%. Otros conflictos armados en los que se identificó un aumento de las vulneraciones contra menores en 2022 fueron Colombia, Israel-Palestina, Libia, Malí, Nigeria, Siria y Sudán. En cambio, en Yemen, la tregua alcanzada en 2022 a instancias de la ONU contribuyó a una disminución del 40% de las violaciones, subrayando la importancia del trabajo por la paz para garantizar la seguridad de los menores. También en clave positiva, en 2022 casi 12.500 menores vinculados previamente a fuerzas o grupos armados recibieron protección o apoyo para su reintegración.

La evolución de los conflictos armados en 2023 indica una persistencia de los abusos y vulneraciones de derechos de los menores en múltiples contextos. Niños y niñas se vieron directamente afectados por ataques en contextos como Burundi, Myanmar, Ucrania o Siria, entre otros. En el caso sirio, por ejemplo, en 2023 murieron 307 menores en diversos hechos de violencia, elevando así a 24.000 el total de niños y niñas que han perdido la vida desde el inicio del conflicto armado en 2011. En el caso de Gaza, al finalizar 2023 –y en un período de tan solo tres meses– cerca de 10.000 niñas y niños

palestinos habían muerto a causa de la ofensiva israelí, una cifra que superaba a todos los menores fallecidos en contextos de conflicto armado en el mundo desde 2019. Otros miles de menores resultaron heridos y/o se vieron afectados por operaciones sin anestesia –incluidas amputaciones– y afrontaban graves consecuencias en su salud mental a causa de los persistentes ataques, la continua inseguridad, la pérdida de sus padres y otros familiares y la severa crisis humanitaria. Varios menores israelíes se cuentan también entre las personas que fueron tomadas como rehenes por Hamas en los hechos del 7 de octubre y menores palestinos también estaban

En Gaza, en tan solo tres meses, cerca de 10.000 niñas y niños palestinos murieron a causa de la ofensiva israelí, cifra que supera la de todos los menores fallecidos en conflictos armados en el mundo desde 2019

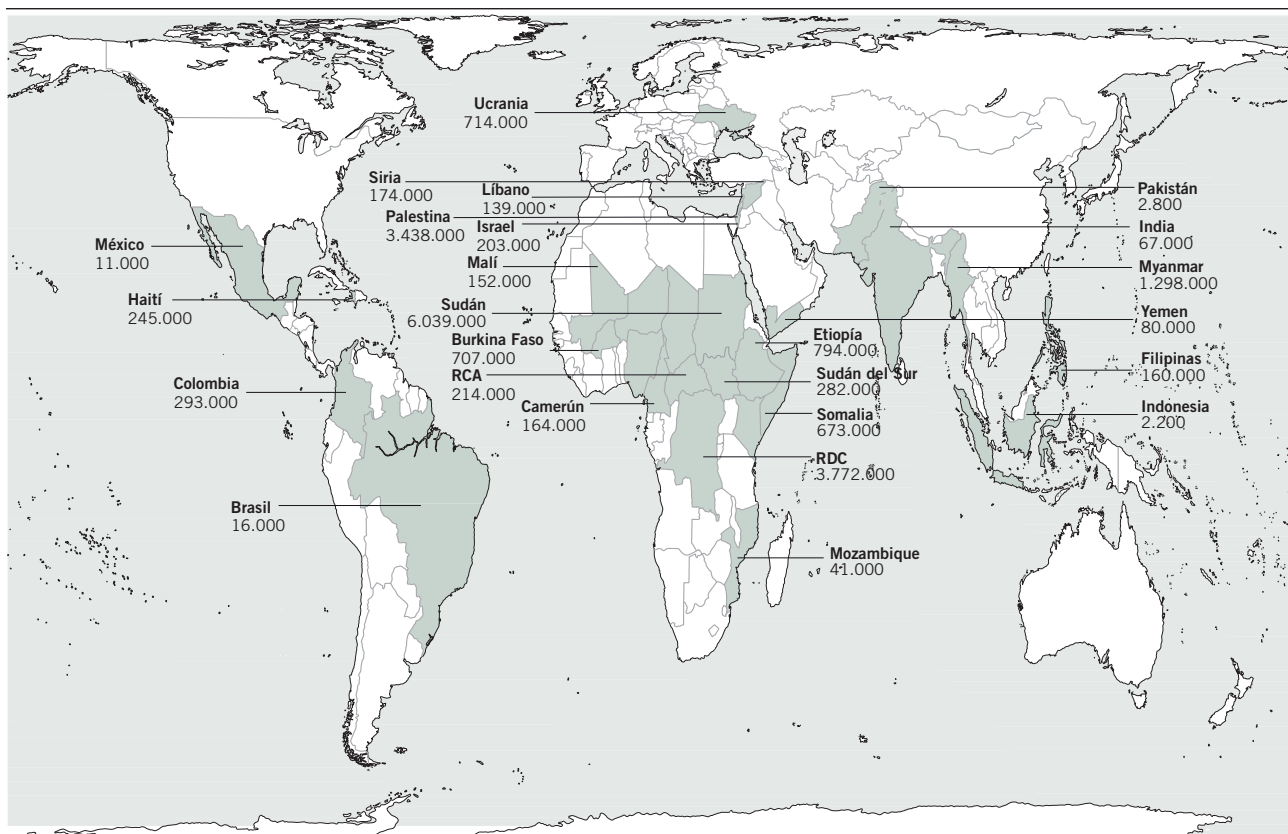
privados de libertad bajo la polémica figura de detención administrativa. En varios contextos se identificó un aumento del reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de los grupos armados. En Colombia, por ejemplo, 251 menores se vieron afectados en 2023, un 93% más que en 2022. En 2023 también se alertó sobre un aumento en el reclutamiento de menores en Yemen por parte de los al-houthistas y se denunció la utilización de niños por parte de las milicias tribales que apoyan a las fuerzas gubernamentales egipcias en su lucha contra ISIS en el Sinaí. En el noreste de Siria, en tanto, más de 51.000 personas, en su mayoría mujeres y menores de 12 años permanecían retenidas en los campamentos de al-Howl y Roj por su vinculación con ISIS.

Al igual que en años previos, en numerosos conflictos armados continuó perpetrándose **violencia sexual**. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en conflictos armados publicado en 2023, que documenta y analiza hechos ocurridos en 2022, alertó sobre algunas tendencias especialmente preocupantes y advirtió sobre **graves afectaciones relacionadas con la utilización de la violencia sexual en países como Ucrania, Afganistán, Malí, Myanmar, Sudán, RDC, Etiopía, Haití y Sudán del Sur.**¹⁹ El informe identificó 43 actores como perpetradores de violencia sexual en distintos escenarios de conflicto, la mayor parte de ellos grupos armados no estatales, aunque también se registraron casos de implicación de Fuerzas Armadas y de seguridad. El informe enfatiza que el 70% de estos actores son considerados como perpetradores persistentes, al aparecer en la lista durante cinco años o más y no adoptar medidas correctivas o de reparación. La violencia sexual se utilizó como parte de la violencia política y represiva en diferentes contextos de conflicto armado y tensiones sociopolíticas y fue una de las causas del desplazamiento forzado de población, afectando también a la población previamente desplazada dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las mujeres que deben abandonar de manera forzada sus lugares de origen.

18. Secretario general de la ONU, *Informe anual sobre los niños y los conflictos armados*, A/77/895-S/2023/363, 5 de junio de 2023.

19. Secretario general de la ONU, *Informe anual sobre violencia sexual en conflictos armados*, S/2023/413, 22 de junio de 2023.

Mapa 1.2. Países con las mayores cifras de desplazamiento interno por conflictos y violencia en 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), *Global Report on Internal Displacement 2024*, 14 de mayo de 2024.

En 2023, año en que se cumplió el 15° aniversario de la resolución 1820 de Naciones Unidas (que inició una serie de resoluciones centradas específicamente en la violencia sexual en el marco de la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad) las informaciones disponibles apuntaban a una persistencia de esta problemática en numerosos contextos. Así, por ejemplo, en Somalia, las tasas de violencia sexual continuaron incrementándose, siguiendo una tendencia de deterioro que se ha acentuado desde 2020. La violencia sexual también continuó presente en los diversos conflictos armados que tienen lugar en RDC, donde actores armados como las ADF persistieron en la explotación sistemática de niñas y mujeres secuestradas, sometidas a esclavitud sexual. En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, durante 2023 diversos actores continuaron denunciando y documentando el uso de la violencia sexual, perpetrada mayoritariamente por las fuerzas rusas. En 2023 también se alertó sobre la violencia sexual en contextos como Sudán del Sur o Yemen. A nivel general, cabe destacar también que Naciones Unidas constató que entre el 70% y el 90% de los episodios de violencia sexual en contextos de conflicto

La peor crisis de desplazamiento forzado en 2023 se produjo en Sudán, donde la intensificación de la violencia desde abril obligó a más de 7,5 millones de personas a abandonar sus hogares

armado se producen con el uso de armas ligeras, una evidencia que refuerza la necesidad de abordar los impactos de este tipo de armamento.²⁰

Los **desplazamientos forzados de población** continuaron siendo uno de los efectos más flagrantes y dramáticos de los conflictos armados, comprometiendo las vidas de millones de personas a nivel global. Según los datos recopilados por la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas, ACNUR, este fenómeno continuó agravándose en 2023, batiendo nuevamente las cifras récord registradas en años previos. El balance global del primer semestre de 2023²¹ ascendía ya a 110 millones de personas, incluyendo personas desplazadas forzosamente dentro y fuera de las fronteras de sus países como resultado de conflictos, violencia, persecución y vulneraciones a los derechos humanos. De este total, 36,4 millones de personas eran refugiadas, 62,5 millones eran desplazadas internas, 6,1 millones se contabilizaban como solicitantes de asilo y otras 5,3 se encontraban en la categoría de personas necesitadas de protección internacional.²² Respecto a la **población refugiada** y en necesidad de

20. Ibid.

21. Al cierre de esta edición solo estaban disponibles los datos globales relativos al primer semestre de 2023.

22. ACNUR, *Mid-Year Trends 2023*, 25 de octubre de 2023.

protección internacional, a mediados de 2023 más de la mitad (52%) procedía de tan solo tres países afectados por conflictos armados: Siria (6,5 millones de personas), Afganistán (6,1 millones) y Ucrania (5,9 millones). Si se consideran tanto la población refugiada como la desplazada internamente, Siria continuaba ocupando el primer lugar –como lo ha sido durante una década– con un total de 13,3 millones de personas. Del total de población desplazada forzosamente a nivel mundial se estimaba que el 88% vivía en países de ingresos medios y bajos.

Teniendo en cuenta la evolución de los acontecimientos en diversos escenarios durante el segundo semestre, se anticipaba que las cifras acumuladas de desplazamiento forzado global hasta finalizar 2023 fueran aún mayores. Los balances anuales en varios contextos de conflicto armado así lo indicaban. Así, por ejemplo, los datos de la propia ACNUR apuntaban a más de 3,1 millones de personas desplazadas forzosamente a causa de la violencia en Lago Chad. En Sudán, desde que se intensificó la violencia en abril y hasta finales de 2023 se contabilizaban más de 7,5 millones de personas desplazadas a causa del conflicto, en la que se perfilaba como la peor crisis de desplazamiento de 2023. La situación en RDC, afectada por diversos conflictos armados, también ha sido considerada como una de las peores crisis humanitarias y de desplazamiento de 2023 según la OIM, alcanzando los 7 millones de personas desplazadas como consecuencia de la violencia.

El balance parcial de ACNUR también se elaboró antes de la crisis en Gaza, donde la ofensiva militar israelí había motivado el desplazamiento forzado de 1,7 millones de personas hasta finales de 2023. Aunque esta cifra es inferior a la de otros contextos, cabe destacar que representa más del 75% del total de población de la Franja (2,3 millones de personas) y que los desplazamientos forzados –hacia áreas cada vez más pequeñas y en medio de incesantes bombardeos– se produjeron en tan solo tres meses. En el último trimestre del año las hostilidades entre Israel y Hezbollah derivadas de la crisis en Gaza también llevaron al desplazamiento forzado de 100.000 israelíes –evacuados a partir de octubre por las autoridades de las zonas adyacentes a Líbano por un tiempo indefinido– y de otras 50.000 personas en Líbano.

Según el informe anual de IDMC, que se focaliza en la situación de la población desplazada internamente, hasta finales de 2023 un total de 68 millones de personas había dejado sus hogares por conflictos y violencia, una cifra que se ha incrementado en un 49% en los últimos cinco años. Conflictos y violencia habrían motivado movimientos internos de población de más de 20 millones de personas en 45 países y territorios en 2023. Sudán, RDC y Palestina representan casi dos tercios de este total (véase mapa 1.2).

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2017
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Estado Islámico Provincia de África Central (ISCAP) o Provincia de Mozambique del Estado Islámico (ISMP) —anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)—, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG), Tanzania, Rwanda, Sudáfrica, Misión en Mozambique de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SAMIM), milicias locales “Naparama”
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22% de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones, generando el despliegue, a mediados de 2021, de fuerzas internacionales en el país para ayudar al Gobierno mozambiqueño a combatir la insurgencia –Rwanda y la Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC).

La violencia en la provincia de Cabo Delgado disminuyó significativamente durante el año, registrándose un 71% menos de acciones armadas en relación con el año anterior, y un 80% de reducción de episodios violentos dirigidos directamente contra la población civil.

Durante el año, según datos de ACLED, se reportaron un total de 170 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que ocasionaron 271 muertes contabilizadas en Cabo Delgado. Estas cifras representan un importante contraste con las recogidas en el año 2022, cuando se registraron 905 muertes, o las reportadas en 2021, que ascendieron a 1.067 muertes en la provincia.²³ El Africa Center for Strategic Studies (ACSS) destacó una caída del 80% de la violencia dirigida directamente contra la población civil, con 61 muertes registradas, frente a las 437 contabilizadas en 2022 –año que había supuesto un incremento del 57% con relación al año 2021.²⁴ La reducción de la violencia se debió a los efectos combinados

La violencia en la provincia de Cabo Delgado en Mozambique se redujo en cerca de un 70% en 2023 con respecto al año anterior

de la intervención en Cabo Delgado de la Misión de la Fuerza de Reserva en Mozambique (SAMIM) de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) y de las fuerzas rwandesas que fueron desplegadas en julio de 2021 para ayudar al Ejército de Mozambique a combatir a la insurgencia yihadista –Estado Islámico en la Provincia de África Central (ISCAP) o “Wilayah de Mozambique” (Provincia de Mozambique del Estado Islámico (ISMP)). La intervención conjunta de las fuerzas nacionales e internacionales contribuyó a recuperar el control del 90% del territorio que estaba en manos de la insurgencia. Este hecho permitió, entre otros aspectos, que el 11 de septiembre se reabriese la frontera con Tanzania mediante el cruce fronterizo de Namoto entre Cabo Delgado y la provincia tanzana de Mtwara después de dos años de cierre debido a la inseguridad. Al finalizar el año el principal foco de inestabilidad en la provincia se mantenía en las zonas rurales en la parte nororiental del distrito de Macomia. Desde el inicio de la violencia en la región a finales de 2017, se estima que el conflicto se ha cobrado la vida de unas 5.000 personas y mantenía desplazadas internamente a finales de 2023 a alrededor de 850.000 personas en las cuatro provincias norteñas de Cabo Delgado, Niassa, Nampula y Zambézia.

Entre los eventos más significativos registrados durante el año, el 1 de enero el Gobierno de Mozambique, conjuntamente con la SAMIM, puso en marcha una nueva operación contrainsurgente en Cabo Delgado, la operación “Vulcão IV”, en un intento por controlar la cuenca del río Messalo en el distrito de Muidumbe y los bosques cercanos del distrito norte y oeste de Macomia. En febrero, la insurgencia del ISMP inició una campaña de acercamiento a comunidades para

solicitarles apoyo. Este cambio de estrategia fue interpretado como un intento de obtener el apoyo de la población y asegurar líneas de suministro para compensar las pérdidas de territorio producidas desde el despliegue de las tropas de la SAMIM y Rwanda. En abril, el Gobierno de Mozambique aprobó un decreto que otorgó autoridad legal y reguló el funcionamiento de las Fuerzas Locales en Cabo Delgado –milicias comunitarias conocidas como “Naparama” surgidas en 2022 para combatir a la insurgencia. Con este decreto concluyó el proceso de legalización de estas milicias después de que el Parlamento aprobara a finales de 2022 una ley que reconoció a la milicia como fuerza vinculada al Gobierno. A mediados de año, tras una relativa calma entre marzo y abril debido a la temporada de lluvias y al Ramadán, se registró una intensificación de las acciones del ISMP, principalmente en los distritos costeros, lo que provocó que el Ejército mozambiqueño y las fuerzas internacionales redoblaran sus acciones a lo largo de la costa de Macomia.

En este contexto, la SADC, el 11 de julio renovó el mandato de SAMIM por un año más. Posteriormente, en agosto, el Ejército anunció la muerte de tres altos mandos del ISMP, incluido Ibn Omar, presunto líder de la organización, en una operación desarrollada en los bosques de Macomia. A finales de año se registraron avances de la insurgencia hacia los distritos del sur de la provincia de Cabo Delgado –Meluco y Quissanga– lo que llevó al Ejército a fortificar posiciones contra un posible ataque a la capital provincial, Pemba. A finales de noviembre, el presidente del Consejo Islámico de Mozambique anunció la creación de una comisión internacional para promover conversaciones de paz entre el Gobierno y los insurgentes en Cabo Delgado.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/Noroeste y Suroeste)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, Gobierno de Nigeria, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, aliado del IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF), múltiples milicias y grupos armados menores
Intensidad:	2
Evolución:	=

23. ACLED, *Dashboard* [consultado el 12 de febrero de 2024].

24. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de Noroeste y Suroeste) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

El conflicto armado entre los cuerpos de seguridad del Estado y los movimientos político-militares secesionistas en las dos provincias anglófonas del suroeste de Camerún continuó activo durante todo el año. De acuerdo con datos de International Crisis Group y de ACLED, el conflicto ha causado la muerte de unas 6.000 personas desde 2018. Según ACLED, en 2023 se produjeron 429 víctimas mortales en un total de 262 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), lo que supone una ligera reducción respecto a las cifras de 2022, cuando se produjeron 525 víctimas mortales en 343 eventos violentos. Los cuerpos de seguridad no consiguieron hacer remitir las acciones de los grupos armados, a pesar de algunas deserciones de líderes insurgentes, como David Dibo y Ekpe Jerome. A finales de 2023 seguían desplazadas dentro del país como consecuencia de la violencia en ambas regiones un total de 621.591 personas, y alrededor de 90.000 personas se encontraban refugiadas en la vecina Nigeria, según datos de ACNUR. Además, la violencia se ha extendido en los últimos años a las provincias aledañas de Litoral, Centro y Oeste, debido al objetivo por parte de los movimientos político-militares de ampliar el conflicto más allá de las dos regiones secesionistas. Cabe señalar que diferentes

grupos político-militares se reunieron en Canadá para unificar su estrategia negociadora, en paralelo a los contactos exploratorios facilitados por Canadá con representantes gubernamentales de Camerún.²⁵ Por otra parte, los líderes del grupo insurgente de Ambazonia AgovC, Ayaba Cho Lucas, y del grupo nigeriano IPOB, Simon Ekpa, alcanzaron un acuerdo de cooperación militar en Helsinki entre sus respectivas insurgencias.

Del balance del año, aumentaron las explosiones y el uso de artefactos explosivos (IED) al nivel más alto desde noviembre de 2021. Cabe destacar especialmente el incremento de la tensión y la violencia en diversas fechas destacadas, como en vísperas de las elecciones al Senado del 12 de marzo, boicoteadas por los grupos armados –la insurgencia llevó a cabo ataques contra civiles que habían violado el boicot electoral en las provincias anglófonas–; el 20 de mayo –Día Nacional, considerado un aniversario clave que marca el inicio del conflicto cuando el referéndum constitucional derogó los estados federales de Camerún Occidental (anglófono) y Camerún Oriental (francófono) en 1972–; el inicio del año escolar en septiembre –forzando el cierre de escuelas–; así como el 1 de octubre –aniversario de la autoproclamada República Federal de Ambazonia. En paralelo, miles de personas se manifestaron en todo el país pidiendo la paz y reconciliación durante los días previos a las celebraciones del Día Nacional. Caravanas de paz encabezadas por cantantes, activistas, clérigos y gobernantes tradicionales pidieron el fin del discurso de odio y del conflicto armado. En la capital, Yaoundé, miles de cristianos de las iglesias católica, presbiteriana y bautista de Camerún se unieron a la protesta el 18 de mayo.²⁶ Coincidiendo con el Día Nacional, la insurgencia separatista secuestró a una treintena de mujeres que se manifestaban contra la extorsión a la que les sometían los grupos armados. El 29 de julio, el movimiento separatista exigió la suspensión de todas las actividades en Bamenda –lo que se conoce como declarar la “ciudad muerta”– para intentar entorpecer el funeral del líder opositor camerunés Ni John Fru Ndi por su apuesta por un Camerún unido.

OCHA señaló que 255 organizaciones humanitarias dieron asistencia a 2,7 millones de personas vulnerables de un total de 4,7 millones de personas necesitadas de este apoyo. Nueve de las diez regiones de Camerún siguieron viéndose afectadas por tres crisis humanitarias complejas: el conflicto de la cuenca del lago Chad (que afecta a la región del Extremo Norte), la crisis del Noroeste y Sudoeste y el impacto de la afluencia de inmigrantes de la RCA refugiados en las provincias de Este, Adamawa y regiones del Norte. En julio, Amnistía Internacional denunció que los cuerpos de seguridad, los grupos separatistas y las milicias de autodefensa de carácter étnico –promovidas o toleradas por el Ejército, que habría instigado a la comunidad fulani mbororo contra los rebeldes anglófonos– habían cometido

25. Véase el resumen de Camerún en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

26. Moki Edwin Kindzeka, 'Cameroon Calls for Peace, Reconciliation Ahead of Country's National Day', *Voice of America*, 18 de mayo de 2023.

atrocidades en la región de Noroeste, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones desde 2020.²⁷ Por último, ante la oleada de golpes de Estado en África Central y Occidental y tras la destitución forzada del presidente de Gabón Ali Bongo Ondimba a finales de agosto, el presidente de Camerún, Paul Biya, llevó a cabo una sustitución de diversos coroneles en el seno del Ejército. En el ámbito político, cabe destacar que el partido de Biya arrasó en las elecciones al Senado en marzo, en las que el presidente utilizó todo el poder del Estado en beneficio de su partido y limitó la libertad de expresión, pasando a controlar el 95% del Senado, mientras continuaban las especulaciones en torno a la salud y la sucesión del nonagenario.

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Marco Estratégico Permanente (CSP) –reúne a los grupos armados afiliados a CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA) y a la Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción)– Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, MINUSMA, Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuaregs designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el

país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendido sus dinámicas a la región central del país.

Durante el año la situación de seguridad en Malí siguió deteriorándose debido a la reactivación de la guerra en el norte del país entre el Gobierno maliense -apoyado por la empresa de seguridad privada rusa Grupo Wagner- y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo de paz de Argel de 2015, organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés). Según datos del centro de investigación ACLED, durante el año 2023 se registraron 1.544 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) en todo el país, concentrados en las regiones norte y centro, que dejaron un balance de 4.288 personas fallecidas, de las cuales 1.848 se produjeron en las regiones del norte del país (Gao, Menaka, Tombuctú y Kidal).²⁸ Estos datos muestran una continuidad con las dinámicas de violencia registradas el año anterior (1.340 eventos violentos y 4.842 personas fallecidas). Si bien se observó un cierto descenso de la letalidad, se incrementó el número de episodios violentos en el país debido al reinicio de la guerra en el norte a mediados de agosto entre los grupos armados signatarios del acuerdo de paz organizados en la CSP –que reúne a la CMA y a la Plataforma– y el Gobierno maliense, abriendo un nuevo frente de inestabilidad. El deterioro de la situación de seguridad en el norte del país fue aprovechado por las coaliciones yihadistas activas en la región –Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS o ISWAP)– quienes aumentaron la violencia en la zona norte y la mantuvieron también en la región central (Mopti y Ségou). El aumento de la inestabilidad y la inseguridad mantuvo la tendencia en el **desplazamiento forzado de personas y la crisis humanitaria**. Según datos de ACNUR sobre la situación de desplazamiento forzado en el país, a mediados de 2023 el número de personas refugiadas se situó en 233.188, en comparación con los 200.471 registrados a mediados de 2022.²⁹ En materia de desplazamiento forzado interno, según datos de la OIM, durante el primer trimestre del año la cifra de personas desplazadas internas ascendía a 391.961, concentrándose en las regiones de Mopti (23%), Tombuctú (16%), Bandiagara (14%), Menaka (12%), Gao (9%) y Ségou (9%).³⁰ Todos estos datos son anteriores al reinicio de las hostilidades en el norte del país, por lo que, previsiblemente, a finales de año las cifras serán mucho mayores. Por otro lado, la violencia y la inestabilidad generó que 7,1 millones de personas (el 32% de la población) necesiten asistencia y protección humanitaria, principalmente en el norte y

27. Amnistía Internacional, *Cameroon: With or against us: People of the North-West region of Cameroon caught between the army, armed separatists and militias*, 4 de julio de 2023.

28. ACLED, *Dashboard* [consultado el 19 de febrero de 2024].

29. UNHCR, “Refugee data Finder”, [consultado el 20 de febrero de 2024].

30. IOM, “Mali Crisis Response Plan 2023 – 2024” [consultado el 20 de febrero de 2024].

el centro. En 2023, los datos de la OCHA mostraron cómo únicamente se había conseguido alrededor del 30% de los 750 millones de dólares que se necesitaban para atender a la población del país.³¹

En materia de inestabilidad, el mayor deterioro se registró en el norte del país. En la región, las tensiones entre las autoridades de transición y los movimientos armados árabe-tuareg habían comenzado desde la llegada al poder de la Junta Militar tras el golpe de Estado de mayo de 2021, y se habían intensificado a finales de 2022 con el anuncio de la suspensión por parte del CSP de su participación en la implementación del Acuerdo de Argel debido al bloqueo del mismo por parte de la Junta. El 1 de febrero de 2023, la coalición CSP se reunió con el mecanismo de mediación internacional del acuerdo de paz (liderado por Argelia) y advirtió que tomarían medidas si el Gobierno continuaba bloqueando la implementación del acuerdo de paz. En marzo las tensiones aumentaron debido a la movilización de unos 400 vehículos pertenecientes a grupos armados signatarios cerca de la ciudad de Anefis, en la región de Kidal –justificado por parte de la CSP para operaciones contra el ISGS. Posteriormente, tras la mediación de Argelia, se produjo una distensión entre las partes, provocando que el 12 de mayo el ministro de Reconciliación Nacional de Malí se reuniera con representantes de la CMA y la Plataforma en Kidal, reiterando el compromiso del Gobierno con el Acuerdo. Sin embargo, la reorganización del gabinete de Gobierno llevada a cabo por el presidente Goïta el 1 de julio –que provocó que los grupos signatarios perdieran dos de los cuatro ministerios que tenían asignados en el acuerdo de paz–, así como el anuncio del Gobierno de revocar el consentimiento y cerrar la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA), acabaron por provocar los primeros enfrentamientos armados desde la firma del acuerdo de paz en 2015. Estos estallaron a principios de agosto entre la CMA y el Ejército maliense, ayudado por miembros del Grupo Wagner, en varias regiones del norte como Tombuctú, Kidal y Gao. Más tarde, el 11 de septiembre, la CMA comunicó que se consideraba “en guerra” con Bamako. La retirada de la MINUSMA generó disputas por el control de las bases que hasta la fecha utilizaba la misión de la ONU, produciendo diferentes enfrentamientos armados entre las partes. Los más destacados se produjeron por el control de la ciudad de Anefis (Kidal) y de las bases de la MINUSMA en Ber (Tombuctú), Aguelhok, Tessalit y Kidal (Kidal). En noviembre, el Ejército anunció la toma de la ciudad estratégica de Kidal, base del CSP, que denunció que la presencia del Ejército en la región representaba una vulneración del acuerdo de paz que les otorgaba el control de esta zona. Posteriormente, la

Se reactivó la guerra en el norte de Malí entre el Gobierno y los grupos armados árabe-tuareg signatarios del Acuerdo de paz de Argel de 2015, organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente

CSP anunció el bloqueo de las carreteras que conducen a las principales ciudades del norte de Menaka, Kidal, Gao, Tombuctú y Taoudeni en un esfuerzo por aumentar la presión sobre las fuerzas gubernamentales. También la coalición yihadista JNIM restableció el bloqueo a la ciudad de Tombuctú que había levantado en el mes de noviembre. A finales de año, la MINUSMA completó la retirada de tropas con la entrega de la base de Sévaré (región de Mopti) y el campamento de Tombuctú. El estallido de la violencia provocó divisiones dentro del CSP. El Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA), a finales de septiembre anunció su salida de la coalición debido a la postura belicosa del CMA, denunciando que el conflicto sólo beneficiaba a los yihadistas. Otros miembros del CSP también expresaron su compromiso con la paz.

Por otro lado, **en la región central** (Mopti y Ségou) se mantuvieron durante el año las dinámicas de violencia. Entre los episodios más destacados, en mayo, la ONU publicó el informe sobre la masacre de Moura (Mopti) producida en marzo de 2022, concluyendo que el Ejército maliense y “elementos extranjeros” no especificados mataron a unos 500 civiles, señalando que podrían constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Por otro lado, el 6 de septiembre, JNIM anunció la muerte de una docena de miembros del

Grupo Wagner en una emboscada cerca de la ciudad de Pogo, en la región de Ségou.

Un año más, la crisis de seguridad fue de la mano del **deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Junta Militar maliense y sus ex aliados occidentales.** Estas desavenencias –que llevan años impactando en el complejo de seguridad internacional, traducándose, por ejemplo, en la finalización de la misión antiterrorista Barkhane liderada por Francia, o de la operación europea Takouba en el país en el 2022– se saldaron con la finalización y retirada en 2023 de la MINUSMA después de diez años de operación, convirtiéndose en la segunda misión en la historia de la ONU con más muertes registradas (311), solo por detrás de la UNFIL (333).³² Asimismo, también derivaron en el fortalecimiento de las alianzas de la Junta Militar maliense con nuevos actores. En febrero la Junta reforzó sus relaciones con Rusia –recibiendo la visita del Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov– y con los países vecinos liderados por Juntas militares (Burkina Faso y Níger) y firmó diferentes acuerdos de cooperación bilateral con Moscú en materia de seguridad. Posteriormente, el 16 de septiembre, Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron la creación de la Alianza de Estados del Sahel, y el 1 de diciembre la formación de una confederación de tres Estados y el establecimiento de un fondo de estabilización, un banco de inversión y, finalmente, una moneda común.

31. OCHA, “Mali” [consultado el 20 de febrero de 2024].

32. Naciones Unidas, Mantenimiento de la paz, “Víctimas mortales” [consultado el 11 de marzo de 2024]

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta de inspiración yihadista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se amplió a la cuenca del Lago Chad, afectando también a territorios fronterizos de los países vecinos con la región nigeriana: la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS), facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012, Islamic State West Africa Province (ISWAP), escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

Durante el año continuaron las actividades de las diferentes facciones de Boko Haram (BH) en la región de la cuenca del Lago Chad, que comprende el noreste de Nigeria (principalmente los estados de Borno, y en menor medida Yobe y Adamawa), la región de Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac en Chad, a pesar de las operaciones contrainsurgentes. La violencia provocó nuevos desplazamientos de población y violaciones de los derechos humanos por parte de todos los actores armados implicados, tal y como señalaron diferentes organismos de defensa de los

derechos humanos. El conflicto ha causado alrededor de 40.000 víctimas mortales desde sus inicios en 2011. De acuerdo con el centro de investigación ACLED, en 2023 se registraron 3.828 víctimas mortales en la región de la cuenca del Lago Chad (los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa; la región de Extrême Nord en Camerún; Diffa en Níger; y la provincia de Lac en Chad), cifra similar a la de 2022 (3.782), y ligeramente inferior a las víctimas de 2021 (4.163). Durante 2023 se produjeron 1.310 eventos violentos, cifra ligeramente superior a los 1.002 de 2022 y a los 982 de 2021.³³

El estado nigeriano de Bauchi, fronterizo con el epicentro del conflicto, en el noreste de Nigeria, también se vio afectado por la expansión geográfica del clima de inseguridad y violencia a partir de septiembre. La inseguridad se había reducido en los últimos años, pero el incremento de ataques por parte de los grupos armados que huían de las operaciones militares en los estados vecinos provocó un nuevo aumento de la violencia. En cambio, durante el año 2023 se redujeron las acciones de Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) en otros estados del centro-norte (Kano, Kogi, Níger y Taraba) en comparación con el año 2022.³⁴

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)³⁵ señaló que durante 2023 aumentaron los eventos violentos de los grupos yihadistas en una cuarta parte durante el año (a 1.208 acciones armadas), alcanzando las 3.769 víctimas mortales, y revirtiendo la disminución de la violencia que la región había experimentado desde 2020. Entre 2020 y 2021 se había producido una reducción de la violencia de alrededor del 32%. Sin embargo, la zona de la cuenca del lago Chad siguió siendo el tercer conflicto más mortífero del continente y concentraba el 16% de todas las muertes relacionadas con militantes islamistas en el continente africano, tras la región del Sahel Occidental y Somalia, según ACSS. Boko Haram y ISWAP estuvieron implicados en casi todos los eventos extremistas violentos en la región, mientras que Ansaru, ubicada en la parte noroeste de Nigeria, estuvo prácticamente ausente. Los acontecimientos violentos vinculados a Boko Haram e ISWAP se distribuyen uniformemente, aunque varían según el tipo. ISWAP está vinculada a más batallas y violencia remota contra los cuerpos de seguridad, mientras que Boko Haram es responsable del 59% de los ataques contra civiles. Esto corrobora informes anteriores de que Boko Haram es el más violento de los dos grupos contra la población civil. En un esfuerzo por controlar el territorio, los recursos y los combatientes, Boko Haram e ISWAP estuvieron luchando entre sí y también contra los Ejércitos en la región del Lago Chad. En este sentido, **durante el año aumentaron los enfrentamientos entre Boko Haram**

33. ACLED, [Dashboard](#) [consultado el 31 de enero de 2024].

34. Véase resumen de región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2023.

35. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.

y ISWAP, en el marco de la lucha por la supremacía en la zona, escalada que se inició con la muerte del líder de Boko Haram en 2021, tras ataques en su feudo del bosque de Sambisa. En agosto se produjo la confrontación más mortífera hasta la fecha, en la que murieron alrededor de 100 combatientes de ambos bandos cerca de la localidad de Marte. Además, según constató ICG, también se produjo una escalada de la violencia en el seno de los respectivos grupos, como fue el caso de los enfrentamientos interétnicos entre combatientes de Boko Haram en agosto que causaron 82 víctimas mortales en el área de Kukawa. Por otra parte, ISWAP recibió suministros de armas y combatientes procedentes de sus aliados yihadistas del grupo Estado Islámico en el Sahel Occidental.

En el caso concreto de Nigeria, esta situación se suma a la violencia y criminalidad generalizadas experimentadas principalmente en el noroeste del país, donde 3.600 personas fueron secuestradas y muchas asesinadas en 2023. Cabe destacar que en marzo se rindieron 1.506 combatientes y sus familias, y en mayo otros 511, tras combates con el Ejército, según fuentes militares. En el noreste de Nigeria, la zona más afectada por las actividades de las facciones de BH, se estima que había 2,3 millones de personas desplazadas por la violencia, cifra que ACNUR amplía para el conjunto de la región de la cuenca del Lago Chad a prácticamente 3,1 millones de personas desplazadas y alrededor de 285.000 personas refugiadas y demandantes de asilo.³⁶

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Togo, Benín, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia, EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) –también conocido como Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)–, Katiba Macina, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias, Rusia, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La región occidental del Sahel (norte y centro de Malí, norte de Burkina Faso y suroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un

origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011. A todo esto, se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

La situación de inseguridad en la región de la triple frontera (Malí, Burkina Faso y Níger) continuó siendo crítica, persistiendo los episodios de violencia así como la crisis de gobernanza en la región tras el golpe de Estado en Níger en julio de 2023. Según datos recopilados por ACLED, durante el año se registró un nuevo aumento de la violencia en la región de la triple frontera de Liptako-Gourma (que incluye Malí, Burkina Faso y el suroeste de Níger, regiones de Tillabéri, Dosso y Tahoua), contabilizándose 3.504 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados) que causaron la muerte a 13.634 personas (frente a las 9.702 registradas en 2022 o las 5.279 de 2021).³⁷ Por país, si bien Burkina Faso y Malí presentaron una cifra de eventos violentos similares (1.699 y 1.544, respectivamente), en Burkina Faso la letalidad de estos hechos siguió siendo muy superior (8.486 muertes frente a las 4.288 registradas en Malí), concentrando el 62% de todas las muertes producidas por el conflicto en la región. Ello representa el doble de personas fallecidas por la violencia en el país que las registradas el año anterior (4.214) –que también había duplicado las registradas en el año 2021 (2.290 víctimas mortales). En Malí la violencia siguió concentrándose en las regiones del norte y centro del país y, si bien se observó un descenso de la letalidad (4.288 muertes frente a las 4.842 de 2022) la inestabilidad aumentó debido al reinicio de la guerra en el norte a mediados de agosto entre los grupos armados

36. ACNUR, *Operational Data Portal*, enero de 2024.

37. ACLED, *Dashboard* [consultado el 19 de febrero de 2024].

signatarios del acuerdo de paz de 2015 organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés) y el Gobierno maliense.³⁸ Finalmente, en lo concerniente al impacto de la violencia en el suroeste de Níger (Tillabéri –principal zona afectada por la violencia–, Dosso y Tahoua), el número de eventos violentos se mantuvo similar al año anterior (261 frente a los 289 de 2022), pero la letalidad creció, registrándose 860 muertes frente a las 649 de 2022, representado el 6% de todas las muertes de la región.

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)³⁹ reportó que las muertes relacionadas con la violencia producida por parte de actores con agendas yihadistas en todo el continente africano⁴⁰ aumentó un 20%, pasando de las 19.412 en 2022⁴¹ a las 23.322 en 2023, duplicando las registradas en 2021. De todas ellas, la región del Sahel Occidental concentró el 50% (11.643 muertes). Estos datos representan un aumento del 43% con relación al año anterior en la región saheliana, y de casi el triple con respecto a los niveles observados en 2020, cuando se produjo el primer golpe militar en la región. La violencia dirigida específicamente contra población civil representó el 35% de todos los eventos relacionados con actores yihadistas en el Sahel, siendo la más alta que cualquier otra región de África. Un año más, detrás de este incremento de la violencia se encuentran principalmente los grupos vinculados a la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –Jama'at Nusrat al Islam walMuslimin (JNIM o GSIM)–, en particular el Frente de Liberación de Macina (FLM) y Ansaroul Islam, mientras que el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) continuó teniendo un impacto menor, siguiendo la tendencia de 2021. Del total de muertes registradas, la coalición JNIM fue responsable del 81%, registrando un aumento del 67% de las muertes con relación al año anterior (9.195 frente a 5.499 en 2022). Por el contrario, las muertes asociadas al ISGS experimentaron una caída del 7% en 2023 (2.448 muertes). Por tercer año consecutivo, Burkina Faso experimentó la mayor parte de la violencia en la región, concentrando el 67% de todas las muertes relacionadas con actores yihadistas en el Sahel (7.762) –representado más del doble del número de muertes registradas en 2022. Por otro lado, Níger experimentó un aumento del 48% en las muertes relacionadas con este tipo de actores (793) –que incluye también la violencia perpetrada por Boko Haram en la región nigerina de Diffa, que forma parte del conflicto que

El golpe de Estado en Níger en julio de 2023 significó que todos los países que comparten la región de la triple frontera de Liptako-Gourma (Níger, Malí y Burkina Faso) se encuentren gobernados por juntas militares

afecta la región de Lago Chad⁴², la mayoría de las cuales ocurrieron después del golpe de Estado que padeció a mediados de 2023. Durante el año también se registró un aumento de la violencia de estos actores en Benín, duplicándose el número de acontecimientos violentos y muertes en el país, mientras que en Togo se estancó con 14 eventos y 69 muertes.

El aumento de la violencia mantuvo la tendencia del **desplazamiento forzado de personas en la región**. Las estimaciones de ACNUR a mediados de año registraban más de 330.000 personas refugiadas y 2,5 millones de desplazadas internas en Burkina Faso, Malí y Níger. Burkina Faso siguió concentrando la mayor parte del desplazamiento, con más de 2 millones de personas desplazadas internamente, mientras que Malí (375.000) y Níger (335.000) –incluyendo todo el país– mantenían cifras más bajas.⁴³

Por otro lado, la crisis de seguridad continuó yendo de la mano de las **tensiones diplomáticas y la renovación del sistema de alianzas de seguridad en la región**. En julio se produjo un golpe de Estado en Níger, que derrocó al presidente Mohamed Bazoum –el último aliado occidental en la región. El golpe significó la consolidación de juntas militares en toda la zona del Sahel, después de los golpes padecidos en Malí y Burkina Faso. La presencia de las juntas castrenses continuó tensionando las relaciones con sus vecinos de África occidental, así como con las potencias occidentales. Las desavenencias entre las juntas militares y sus exaliados occidentales –que llevan años impactando en el complejo de seguridad internacional en la región, principalmente en Malí– se saldaron con la finalización y retirada en 2023 de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Malí (MINUSMA). Níger también finalizó sus acuerdos de cooperación de defensa y seguridad con la UE y con Francia, quien retiró a sus últimos soldados el 22 de diciembre. De forma paralela, Malí, Burkina Faso y Níger fortalecieron sus alianzas con Rusia y avanzaron en el fortalecimiento de una alianza regional. El 16 de septiembre anunciaron la creación de la Alianza de Estados del Sahel; el 1 de diciembre la formación de una confederación de tres Estados y el establecimiento de un fondo de estabilización, un banco de inversión y, finalmente, una moneda común; y el 2 diciembre, Burkina Faso y Níger anunciaron su retirada de la alianza anti yihadista del G5 Sahel, siguiendo los pasos de Malí, que lo había hecho en 2022.

38. Véase el resumen sobre Malí en este capítulo.

39. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.

40. Incluye la región del Sahel Occidental, Lago Chad, Somalia, norte de África y Mozambique -Cabo Delgado.

41. Africa Center for Strategic Studies, *Fatalities from Militant Islamist Violence in Africa Surge by Nearly 50 Percent*, 6 de febrero de 2023.

42. Véase el resumen sobre Región Lago Chad (Boko Haram) en este capítulo.

43. UNHCR, *Mid-Year Trends 2023*, 25 de octubre de 2023.

Cuerno de África

Etiopía (Amhara)	
Inicio:	2023
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Amhara, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Durante las movilizaciones entre 2015 y 2018 que llevaron al poder a Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, se produjo un proceso de reactivación del nacionalismo amhara, grupo étnico que se ha sentido marginado dentro de esta fase de transformación del país y que vive mayoritariamente en la región Amhara, aunque está presente en otras regiones del país. La escalada de la violencia y la represión en 2023 se remonta al acuerdo de paz firmado en 2022 por el Gobierno Federal y el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) para poner fin a la guerra (2020-2022). El acuerdo suscitó preocupación en la comunidad amhara, excluida de las conversaciones a pesar de que las milicias nacionalistas Fano y las fuerzas especiales amhara –un grupo paramilitar vinculado al gobierno regional– lucharon del lado del Ejército Federal, al igual que Eritrea –que también fue excluida del acuerdo. Todos los actores implicados cometieron crímenes contra la humanidad contra la población de la comunidad tigré durante el conflicto en Tigré. La percepción de traición se extendió en la región de Amhara, especialmente después de que Abiy anunciara planes para dismantelar las fuerzas especiales presentes en cada una de las 11 regiones étnicas de Etiopía. El primer ministro propuso que las fuerzas especiales, que suman decenas de miles de combatientes, se integraran en el Ejército y la policía federales para fomentar la unidad interétnica y evitar que las fuerzas regionales fueran instrumentalizadas políticamente y se vieran arrastradas a conflictos, como fue el caso en Tigré. Pero muchos amharas vieron su plan como una señal de alerta, argumentando que los dejaría vulnerables a los ataques del vecino Tigré, sus rivales históricos en Etiopía, y también de la comunidad oromo, que forman el grupo étnico más grande de Etiopía, seguidos por los amhara. El grupo armado oromo OLA también ha sido acusado de atrocidades generalizadas contra los amharas en Oromiya, lo que genera temores de que quiera expulsarlos de la región. Aunque algunas de las fuerzas especiales amhara aceptaron integrarse en el Ejército y la Policía, muchos desertaron y se unieron a las milicias Fano. Además, este movimiento nacionalista amhara aprovechó la guerra en la región de Tigré para, a través de estas milicias paramilitares, recuperar y ocupar territorios en disputa histórica que forman parte de Tigré (Tigré Occidental y Meridional, llamados por el nacionalismo amhara Welkait-Tsegede y Raya, respectivamente) donde se estableció una administración provisional amhara que el Gobierno Federal declaró ilegal al finalizar el conflicto.

La inestabilidad en la región de Amhara se agravó a partir de abril, cuando el Gobierno Federal anunció el desarme y la disolución de las fuerzas especiales amhara y de las milicias Fano, y su integración en la Policía y en el Ejército. Desde entonces se produjo una escalada

de violencia, represión y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y estas milicias, a las que se les unieron parte de las fuerzas de seguridad regionales que desertaron de sus puestos. El anuncio del 6 de abril desató amplias movilizaciones en la región, ya que se vio la medida como una amenaza en medio de la preocupación de que la alianza del primer ministro Abiy con los nacionalistas oromo y el fortalecimiento de los vínculos con Tigré tras el acuerdo de paz de noviembre de 2022 estuviera aislando a la región de Amhara. Algunas fuerzas especiales se negaron a cumplir la orden y, en cambio, se aliaron con la milicia Fano, y se enfrentaron con soldados federales en varias zonas.⁴⁴ También estallaron manifestaciones que se extendieron por toda la región, y en las que los manifestantes bloquearon carreteras, quemaron neumáticos y corearon consignas contra el primer ministro Abiy Ahmed y el gobernante Partido de la Prosperidad y su rama regional. El 9 de abril, Abiy prometió seguir adelante con el plan mientras el Gobierno desplegaba tropas, imponía el toque de queda y cortaba los servicios de Internet en partes de Amhara. Decenas de personas murieron en los disturbios, que empezaron a remitir a mediados de abril.

Sin embargo, el 27 de abril, hombres armados no identificados asesinaron a Girma Yeshitila, jefe de la rama amhara del Partido de la Prosperidad, junto con su escolta en la zona norte de Shewa. El Gobierno Federal lanzó duras operaciones represivas durante las cuales las fuerzas de seguridad federales fueron acusadas de cometer graves abusos que provocaron un aumento paulatino de la violencia y el inicio de una rebelión al sumarse otros movimientos nacionalistas amhara contra el gobierno regional y el Gobierno Federal. Este conflicto de baja intensidad escaló en agosto, con la toma de control de varias localidades por parte de Fano y la represión por parte de las fuerzas federales y regionales. A principios de agosto el Gobierno Federal bloqueó el acceso a internet en la región y declaró el estado de emergencia por un período de seis meses.⁴⁵ En las siguientes semanas se desató una ofensiva gubernamental para recuperar el control de las localidades ocupadas, expulsando a las milicias Fano de las ciudades, y una ola de cientos de detenciones de sospechosos acusados de vínculos con los militantes, incluyendo políticos, entre ellos el opositor crítico con el Gobierno, Christian Tadele. Los enfrentamientos y el número de víctimas mortales se agravaron en septiembre, así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales por ambas partes. En la última parte del año los cuerpos de seguridad federales incrementaron el lanzamiento de operaciones aéreas con aviones de combate y drones contra las bases de Fano, causando numerosas víctimas civiles como consecuencia de los bombardeos. Grandes zonas de Amhara se encontraban esencialmente en la práctica con un vacío de poder institucional, dado el rechazo popular a los cuadros del partido gobernante alineados con Abiy Ahmed

44. Reuters, "Amhara Gunfire Over Military Merger", *VOA Africa*, 10 de abril de 2023.

45. The Guardian, "Ethiopia declares a state of emergency in Amhara amid increasing violence", *The Guardian*, 4 de agosto de 2023.

que dirigen la región, según destacó ACLED en agosto. Según datos de ACLED,⁴⁶ durante el 2023 se registraron 566 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Amhara que costaron la vida a 1.718 personas. Esta cifra combina violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil.

En paralelo, la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, con mandato de la ONU, publicó un informe en septiembre en el que se denunciaban las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas en los diferentes conflictos en Etiopía. El informe también cubrió cómo las violaciones y abusos de derechos en curso se habían vuelto cada vez más generalizados en el país, particularmente en las regiones de Oromiya y Amhara, y señaló que las hostilidades en Etiopía habían aumentado a una “escala nacional”. Desde su visita inicial en 2022, a la Comisión no se le ha concedido acceso a Etiopía. A raíz de este informe y de la negativa de acceso a la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió suspender su mandato en octubre, lo que significa que ya no existe ningún mecanismo independiente que investigue las atrocidades en Etiopía.

Etiopía (Oromiya)	
Inicio:	2022
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno de Etiopía, gobierno regional de Oromiya, grupo armado Oromo Liberation Army, milicia amhárica Fano
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos secesionistas desde los años setenta. El movimiento político-militar Oromo Liberation Front (OLF) surgió entre 1973 y 1974 en la región de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participaron junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, en 1992 el OLF se desmarcó del Gobierno de coalición del EPRDF e inició una rebelión contra este y contra otros movimientos nacionalistas oromos exigiendo la independencia de la región. En paralelo, Oromiya ha vivido un ciclo de protestas –iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo– que fueron fuertemente reprimidas y que causaron miles de víctimas mortales. La movilización contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn en 2018 y la

designación de Abiy Ahmed, de la comunidad oromo, quien emprendió una serie de reformas políticas encaminadas a la unidad y la reconciliación nacional, alcanzando un acuerdo de paz con el OLF y otros grupos político-militares lo que facilitó su retorno del exilio. Además, el nacionalismo oromo asumió que la llegada al poder de Abiy Ahmed, de su misma comunidad, significaría un impulso a la autonomía de la región; no obstante, Abiy se ha decantado por un Estado más centralizado en lugar de promover el federalismo étnico. Además, aunque el OLF se convirtió en partido político, su ala militar, el Oromo Liberation Army (OLA), rechazó el acuerdo e inició una nueva rebelión, lo que llevó al Gobierno a designarle en mayo de 2021 como grupo terrorista. Desde entonces la violencia ha ido en aumento. También cabe destacar los recurrentes enfrentamientos entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo en las zonas fronterizas entre Oromiya y Somalí por la competencia de recursos y la demarcación de los territorios de ambas comunidades, donde la emergencia climática y la intervención represiva del cuerpo policial gubernamental Liyu contribuye a exacerbar la situación.

La situación en la región etíope de Oromiya siguió siendo de extrema gravedad durante el año 2023, constatándose una persistencia de los enfrentamientos y ataques por parte el grupo armado Ejército de Liberación Oromo (OLA) y de acciones de contrainsurgencia de los cuerpos de seguridad federales. En 2023 ya no contaron con el apoyo de las milicias amhara Fano, enfrentadas al Gobierno Federal y replegadas en su mayoría a la región de Amhara, aunque algunas permanecieron en Oromiya o regresaron para perpetrar ataques. Todos los actores armados cometieron graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil. El grupo armado oromo OLA también ha sido acusado de atrocidades generalizadas contra los amharas en la región de Oromiya, en venganza por los actos de represión y violencia cometidos por parte de las milicias amhara Fano, aunque el OLA ha negado que esté persiguiendo a la comunidad amhara en la región. La escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y el OLA se intensificó en octubre de 2022, coincidiendo con las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz en noviembre de 2022 entre el Gobierno Federal y las autoridades político-militares de la región de Tigré. Tras la firma del acuerdo y el inicio de su implementación, las autoridades federales escalaron las acciones bélicas contra el OLA. Las presiones del Gobierno local de la región de Oromiya, así como el interés del OLA y de las autoridades federales en alcanzar algún tipo de tregua condujeron a varios contactos exploratorios indirectos en febrero de 2023 entre ambas partes, manifestando su interés en explorar un cese de hostilidades. En medio del clima de violencia, en marzo el primer ministro Abiy Ahmed manifestó su compromiso en explorar un proceso de diálogo con el OLA y el 25 de abril se iniciaron conversaciones de paz en Zanzíbar (Tanzania) con la facilitación de Kenya –el OLA había exigido la mediación de una tercera parte– en nombre de la autoridad regional IGAD y de Noruega. Aunque

46. ACLED, [Dashboard](#) [consultado el 31 de enero de 2024].

esta primera ronda culminó sin avances a principios de mayo, ambas partes manifestaron su compromiso en buscar una solución al conflicto. Desde entonces persistió la violencia con graves consecuencias para la población civil. No obstante, en noviembre se hizo pública una segunda ronda negociadora iniciada a finales de octubre en Tanzania, bajo la mediación de la IGAD.⁴⁷ Las hostilidades se reanudaron tras el colapso de las negociaciones en noviembre, incrementando las acciones armadas con ataques aéreos con drones, así como el aumento de las tensiones entre actores armados amharas –milicias que no se replegaron a la región de Amhara, milicias locales de la comunidad amhara en la región de Oromiya y milicias amhara que lanzan sus ataques a Oromiya desde la región de Amhara– y oromos y las poblaciones civiles respectivas, lo que provocó un incremento de ataques contra la población civil. Estos ataques podrían ser calificados como de limpieza étnica por parte de las milicias Fano y por parte del OLA en territorios como en la zona de North Shewa, en la región de Oromiya, habitada por un importante número de miembros de la comunidad amhara. En este sentido, grupos de milicias Fano penetraron en la región de Oromiya, en especial en las zonas de West Shewa y North Shewa, con el objetivo de atacar a la población civil oromo.

Según datos de ACLED,⁴⁸ durante el 2023 se registraron 572 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en la región de Oromiya, que costaron la vida a 1.642 personas, cifras inferiores a las del año 2022, en el que se cometieron 707 eventos en los que murieron 4.533 personas.⁴⁹

En paralelo, la Comisión Internacional de la UA de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, con mandato de la ONU, publicó un informe en septiembre en el que se denunciaban las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas en los diferentes conflictos en el país. El informe también cubrió cómo las violaciones y abusos de derechos en curso se habían vuelto cada vez más generalizados en el país, particularmente en las regiones de Oromiya y Amhara, y señaló que las hostilidades en Etiopía habían aumentado a una “escala nacional”. Desde su visita inicial en 2022, a la Comisión no se le había concedido acceso a Etiopía. A raíz de este informe y de la negativa de acceso a la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió suspender el mandato de la Comisión en octubre, lo que significa que ya no existe ningún mecanismo independiente que investigue las atrocidades en Etiopía.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, Türkiye, ATMIS, EUNAVFOR Somalia (Operación Atalanta), Combined Task Force 151, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado en Somalia continuó incrementando su intensidad respecto a años anteriores. El año se vio marcado por el aumento de las operaciones de la misión africana en el país (ATMIS)⁵⁰ y del Ejército Nacional Somalí y sus aliados locales e internacionales así como por los ataques por parte del grupo armado al-Shabaab. Somalia ha incrementado en los últimos años la ofensiva contra al-Shabaab con el apoyo de los clanes, las milicias locales y los aliados regionales

47. Africanews, “Second round of talks between Ethiopian government and Oromo rebels”, *Africanews*, 9 de noviembre de 2023.

48. ACLED, *Dashboard* [consultado el 31 de enero de 2024].

49. Estas cifras deben tomarse con cautela ya que combinan violencia directamente vinculada con el conflicto armado, además de actos de represión de movilizaciones sociales contra la actuación gubernamental y actos de limpieza étnica contra la población civil. En esta cifra también se incluyen actos de violencia contra la minoría de la comunidad amhara presente en la región de Oromiya perpetrados por elementos del gobierno regional de Oromiya y del OLA, así como enfrentamientos entre milicias de carácter comunitario de las comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo que cada año se cobran cientos de víctimas mortales, por lo que existen dificultades relevantes de cara a precisar el número real de víctimas mortales vinculadas a este conflicto armado.

50. La misión de la UA en el país, AMISOM, fue transformada en la Misión de Transición de la UA en Somalia, ATMIS, en abril de 2022.

e internacionales, como parte de las promesas del presidente Hassan Sheikh Mohamud de situar la guerra contra al-Shabaab en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país desde que alcanzó el poder en mayo de 2022.⁵¹ A pesar de estos intentos por frenar a al-Shabaab, el grupo mantuvo intacta su capacidad de perpetrar atentados complejos y asimétricos en Somalia, tal y como señaló el Grupo de Expertos de la ONU en octubre. No obstante, este panel internacional observó signos “alentadores” que indican que la ofensiva había mermado la capacidad de al-Shabaab para gobernar e influir en el territorio recién liberado. Con todo, el Gobierno tendrá la doble presión de coordinar la siguiente fase de la ofensiva al tiempo que gestiona varias operaciones de “contención” en las regiones centrales de Hirshabeelle y Galmudug, según destacó el Grupo.⁵² La facción del Estado Islámico (ISIS) en Somalia siguió funcionando y perpetrando atentados, pero las operaciones del grupo estaban limitadas en gran medida a la región de Bari, en el noreste de Puntlandia. Un revés para el grupo en enero de 2023 fue la muerte de Bilal al-Sudani, responsable de la recaudación de fondos de Al-Karrar (ISIS) en Somalia. En paralelo, persistió el conflicto armado entre ISIS y al-Shabaab. Por otra parte, dados los avances relativos en la ofensiva contra los grupos armados, la UA decidió aceptar la solicitud del Gobierno Federal en octubre y esta a su vez la trasladó al Consejo de Seguridad de la ONU, que aceptó en noviembre prorrogar por tres meses la fase 2 de la ATMIS. Con esta decisión se acordó retrasar la reducción de 3.000 efectivos hasta el 31 de diciembre de 2023, después de que se cumpliera la fase 1 con la retirada de 2.000 efectivos en junio de 2023 y que redujo el componente militar y policial de la ATMIS a 17.626 efectivos (incluidos 1.040 policías). El objetivo siguió siendo culminar la transición y retirada total de la ATMIS en diciembre de 2024.

El Africa Center for Strategic Studies (ACSS)⁵³ señaló que durante el año 2023 aumentaron las muertes relacionadas con el conflicto en Somalia con un incremento del 22% en las muertes en 2023, alcanzando un récord de 7.643 víctimas mortales. Prácticamente toda esta violencia se atribuye a incidentes que involucraron a al-Shabaab. Esta cifra triplica las muertes desde 2020, según los cálculos de ACSS. La mayoría de los acontecimientos violentos

La ofensiva del Gobierno federal de Somalia con apoyo local, regional e internacional no mermó las capacidades de al-Shabaab para contraatacar, aumentar el ritmo de sus acciones bélicas y efectuar atentados complejos

(65%) y las muertes (77%) estuvieron relacionados con batallas, lo que refleja la continua ofensiva dirigida por el Gobierno contra al-Shabaab. Cabe destacar que en Kenya se duplicaron el número de muertes respecto al año anterior y se llegó a las 279 muertes como resultado de la violencia con al-Shabaab en 2023, principalmente en territorio de Kenya a lo largo de la frontera con Somalia, aunque el 96% de las muertes vinculadas a la guerra tienen lugar en Somalia. **Según ACLED, la cifra de letalidad ascendió a 7.912 víctimas mortales en Somalia en 2023 y se contabilizaron 2.536 eventos violentos,**⁵⁴ siguiendo la tendencia ascendente de 2022 (con 6.418 muertos), 2021 (3.286) y 2020 (3.236). El conflicto, combinado con la peor sequía en décadas en 2023 y seguida de las inundaciones más graves en generaciones (en un intervalo de pocos meses de diferencia), ha provocado que 4,3 millones de personas (21% de la población) enfrenten niveles de crisis y superiores de inseguridad alimentaria (Fase 3+ de la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria o CIF, según la FAO).⁵⁵ OCHA alertó que 2 de cada 5 menores de 5 años sufren malnutrición aguda, 3,8 millones de personas permanecían desplazadas

(de las cuales el 80% eran mujeres y menores) y un brote de cólera estalló en diversos distritos del país. Además, cabe destacar que el país continuó sufriendo una situación devastadora en términos de violencia de género, tal y como destacó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en febrero. Las tasas de violencia sexual registraron un aumento alarmante desde 2020. Se duplicaron en 2022 en comparación con 2019, y siguieron aumentando. A esta situación se unieron las consecuencias del cambio climático con la peor sequía en muchas décadas, que tuvo un impacto devastador en todos los somalíes, y las mujeres y las niñas sufrieron las consecuencias de manera desproporcionada. La impunidad seguía siendo generalizada, y los grupos armados, en especial al-Shabaab, continuaron secuestrando a mujeres y niñas, obligando a las familias a darles a sus hijas para que se casen con los combatientes y ocupando hospitales y salas de maternidad, así como silenciando y amenazando a las voces locales que denuncian esta situación. Somalia continuó siendo uno de los peores países del mundo para el periodismo, según el Sindicato Somalí de Periodistas,⁵⁶ ya que este colectivo afrontó

51. ACLED, *Somalia: Conflict Expands to Galmudug State*, 24 de marzo de 2023.

52. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia*, S/2023/724, 2 de octubre de 2023.

53. Africa Center for Strategic Studies, *Deaths Linked to Militant Islamist Violence in Africa Continue to Spiral*, 29 de enero de 2024.

54. Esta cifra tiene en cuenta los eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en el conjunto de Somalia, excluyendo las cinco regiones que conforman Somalilandia (Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sool, Sanaag). Esta cifra se incrementaría a 2.662 eventos violentos y 8.341 víctimas mortales para 2023 para el conjunto de Somalia. ACLED, *Dashboard* [consultado el 31 de enero de 2024].

55. OCHA, Somalia, *Dashboard* [consultado el 31 de enero de 2024].

56. Somali Journalists Syndicate, *SJS Annual Report 2022: State of Press Freedom in Somalia*, 31 de enero de 2023.

amenazas tanto del Gobierno como de al-Shabaab y de algunas milicias de clanes, situación que no había mejorado con el cambio de Gobierno en 2022. El país siguió siendo considerado el más peligroso para el periodismo de África por noveno año consecutivo, según el Índice de Impunidad Global del CPJ y el segundo a nivel mundial tras Siria,⁵⁷ aunque la gravedad de la escalada de la violencia en Gaza a partir del 7 de octubre les relegó a la segunda y tercera posición.

El Grupo de Expertos de la ONU confirmó que la capacidad de al-Shabaab para aprovecharse de la discontinuidad geográfica en las posiciones del Ejército Nacional Somalí, asimilarse a las comunidades locales durante los repliegues tácticos y efectuar contraataques contra las milicias progubernamentales y las bases de operaciones de avanzada. Estas capacidades indicaban que al-Shabaab seguía siendo resiliente, adaptable y letal. A pesar de haber sido expulsado de amplias zonas del centro de Somalia, de que murieran diversos mandos intermedios y superiores durante el año, y de que al menos dos comandantes de al-Shabaab se entregaran, el grupo tuvo la capacidad de reemplazar a los dirigentes fallecidos por otros ya entrenados, logró aumentar su ritmo de operaciones y efectuar atentados complejos, como el atentado a gran escala perpetrado en mayo de 2023 –la acción más grave del último año– contra la base de operaciones de avanzada de ATMIS de Uganda en Buulo Mareer (región de Lower Shabelle, en el estado del Suroeste), en la que murieron 137 soldados según al-Shabaab, y alrededor de 100, según fuentes militares ugandesas. Según el panel de expertos, al-Shabaab siguió utilizando atentados suicidas (11) y coches bomba (29)⁵⁸ como principales armas contra las fuerzas de seguridad y la infraestructura del Estado, así como ataques con artefactos explosivos improvisados (IED), cada vez más sofisticados. Por otra parte, la ofensiva contra al-Shabaab dentro de Somalia y a lo largo de su frontera carecía de cooperación eficaz en los planos nacional e internacional. La ofensiva gubernamental debilitó inicialmente al grupo. No obstante, el Gobierno afrontó problemas debido a los retrasos en la movilización de tropas de los Estados situados en la primera línea de ATMIS (Djibouti,

El conflicto en Somalia se vio combinado con la peor sequía en décadas en 2023, seguida de las inundaciones más graves en generaciones, según OCHA

El acuerdo entre Etiopía y de Somalilandia desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas y Somalia que podría afectar a la presencia de Etiopía en la misión de la UA, ATMIS, y a su vez en la ofensiva contra al-Shabaab

Etiopía, Kenya, en el marco de la Operación León Negro, acordada a principios de año y reafirmada en agosto), y dada la reducción de la misión ATMIS, es probable que surjan nuevos problemas.

En términos políticos, diversos análisis señalaron los problemas de gobernabilidad y cooperación entre el Gobierno Federal y los estados miembros federados, donde las dificultades para garantizar la seguridad y los servicios públicos se unen a la voluntad de los estados miembros de prolongar su mandato. En ese contexto diversos actores instrumentalizaban las debilidades de la gobernanza en favor de sus propios intereses, proliferando los casos de corrupción, como por ejemplo con la malversación de los ingresos públicos de la pesca por intermediarios. **Cabe añadir que el anuncio el 1 de enero de 2024 de la firma de un memorando de entendimiento⁵⁹ entre Etiopía y Somalilandia desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas y Somalia**, que adquirió dimensiones regionales, por la política de alianzas regionales de Etiopía y Somalia. Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval y servicio marítimo comercial en el Golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente. Addis Abeba matizó que todavía debía evaluar esa petición.⁶⁰ Etiopía históricamente ha buscado diversificar su acceso al mar, ya que el 95% de su comercio se realiza a través de Djibouti, y en los últimos meses el primer ministro etíope Abiy Ahmed había señalado que esta cuestión tenía un carácter existencial para Etiopía, lo que había provocado reacciones por parte de Eritrea, país con el que se deterioraron las relaciones.

Somalia declaró nulo el acuerdo e incluso amenazó a Etiopía con iniciar una guerra si fuera necesario para preservar su soberanía nacional, ya que Somalia continúa considerando a Somalilandia como parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional. Según diversos análisis,⁶¹ aunque es improbable una confrontación entre ambos

57. Somalia ha ocupado la primera posición mundial en los últimos ocho años, y esta caída al segundo puesto no indica una mejora en el historial de impunidad del país, sino que surge del método utilizado para calcular las clasificaciones. Véase CPJ, *Global Impunity Index 2023*, 31 de octubre de 2023.

58. Cifras relativas al periodo que cubre el informe del Grupo de Expertos, entre 16 de diciembre de 2022 y 15 de agosto de 2023.

59. Faisal Ali, "Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports", *The Guardian*, 1 de enero de 2024.

60. El acuerdo gira en torno al puerto de Berbera, que recientemente fue ampliado por la compañía de logística portuaria DP World, con base en EAU. Para más información, véase el resumen sobre Somalia-Somalilandia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

61. Alemayehu Weldemariam, "Ethiopia's deal with Somaliland upends regional dynamics, risking strife across the Horn of Africa", *The Conversation*, 13 de enero de 2024.

países, este acuerdo puede dañar gravemente las relaciones entre ambos y tener consecuencias en la guerra contra al-Shabaab, ya que un clima de rechazo hacia Etiopía en Somalia podría derivar en presiones hacia la presencia etíope en Somalia que acabasen con la retirada de Etiopía de la misión de la UA, ATMIS, ya que es uno de sus principales contribuyentes de tropas.⁶² En este sentido, cabe destacar que en noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de ATMIS hasta el 30 de junio de 2024.

Somalia (Somalilandia – SSC-Khatumo)	
Inicio:	2023
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Interno
Actores:	República de Somalilandia, administración SSC-Khatumo (estado de Khatumo), estado de Puntlandia, al-Shabaab
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia (región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa) y las milicias de las regiones de Sool, Sannag y Cayn, que forman parte de Somalilandia y que se han autodenominado estado SSC-Khatumo. A su vez, Somalilandia y Puntlandia han mantenido una disputa histórica desde 1998 –año en el que Puntlandia se constituyó como república autónoma– por el control de estas regiones fronterizas entre ambos estados que ha derivado en la actualidad en un conflicto armado entre las milicias de estas regiones y Somalilandia. Estas tres regiones –Sool, Sannag, Cayn– se encuentran geográficamente dentro de las fronteras de Somalilandia, aunque la mayoría de clanes de esta zona formada por Sool, Sannag y Cayn, denominada SSC (por sus iniciales) se encuentran asociados a los de Puntlandia, por lo que SSC es un aliado de Puntlandia. Desde los años noventa se han producido choques esporádicos e intentos de mediación entre Puntlandia y Somalilandia y entre Somalilandia y las milicias de SSC. En 2012 se creó el estado de Khatumo incluyendo parte de las regiones de Sool, Sanaag y Cayn, autodenominado SSC-Khatumo, lo que añadió más complejidad a la situación. SSC-Khatumo se encuentra dentro de Somalilandia, que pretende ser independiente, a lo que se oponen estas regiones, que progresivamente han manifestado su voluntad de convertirse en un nuevo estado de Somalia. En 2016 la administración de SSC-Khatumo y Somalilandia iniciaron conversaciones de paz. Sin embargo, las tensiones y enfrentamientos esporádicos continuaron de forma intermitente entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia y las milicias de SSC-Khatumo, hasta que en 2023 se produjo una escalada de la situación, con centenares de víctimas mortales.

A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia y las milicias locales, principalmente del clan Dhulbahante, lo que llevó a considerarlo un nuevo conflicto armado en 2023. El epicentro de la violencia tuvo lugar en la localidad de Las Anod, capital de la disputada región de Sool, y siguió activo durante todo el año. El desencadenante se sitúa a finales de diciembre de 2022, cuando estallaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Las Anod, con al menos 20 civiles muertos. Los manifestantes se quejaron de la falta de seguridad en la ciudad, que se había visto acosada por asesinatos regulares en los últimos años, incluido el asesinato el 26 de diciembre del líder local y miembro del opositor Partido Waddani, Abdifatah Abdullahi Abdi (alias Hadrawi). El uso de artillería pesada y el reclutamiento de nuevos combatientes por las fuerzas de seguridad de Somalilandia y por las milicias de SSC-Khatumo aumentó el riesgo de aumentar las confrontaciones entre las familias de clanes y ampliar el conflicto más allá de la región de Sool. Algunos líderes políticos de Somalilandia dimitieron para evidenciar su rechazo a la aproximación militarista del presidente de Somalilandia al contencioso. **Según ACLED, en 2023 se produjeron 367 víctimas mortales en un total de 91 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados).**⁶³

Existen relatos contradictorios acerca de los orígenes y motivos del conflicto. Somalilandia señaló a diversos agentes y grupos armados en el conflicto de Las Anod, entre ellos Puntlandia, al-Shabaab y otras entidades contrarias a la paz. En las conversaciones del Grupo de Expertos de la ONU⁶⁴ con funcionarios de Somalilandia, estos señalaron que al-Shabaab estaba aprovechando el conflicto para ampliar su influencia hacia el norte de Somalia y estaba intentando construir un puente entre las montañas Galgala (Puntlandia) y Jijiga (Etiopía) que pasara por Las Anod y Buuhoodle, que daría al grupo nuevas vías desde donde perpetrar atentados externos en Djibouti y Etiopía y le ampliaría el acceso al Golfo de Adén. Somalilandia se considera un baluarte contra la expansión regional de al-Shabaab. Si bien el panel de expertos sí recibió información de Somalilandia sobre la posible implicación de al-Shabaab en el asesinato del activista y político perpetrado en diciembre de 2022, que fue el desencadenante del conflicto actual, aún no ha observado ninguna evidencia creíble de la supuesta expansión de al-Shabaab en el norte. En general, Somalilandia sostuvo que solo había actuado en defensa propia y se había abstenido de iniciar acciones ofensivas contra las milicias de los clanes dentro de

62. Véase el resumen sobre Somalia-Somalilandia en el capítulo 2, (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

63. ACLED, *Dashboard* [consultado el 31 de enero de 2024].

64. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia*, S/2023/724, 2 de octubre de 2023.

Las Anod, al tiempo que reiteraba su compromiso de buscar una solución pacífica y respaldaba las gestiones internacionales y regionales futuras para poner fin a los enfrentamientos. Por su parte, el 9 de febrero de 2023, al-Shabaab, a través de su fundación mediática Al-Kata'ib, difundió un comunicado en el que negaba toda implicación en el conflicto de Las Anod causada por el Gobierno de Somalilandia.

Del otro lado del conflicto se encuentra el clan Dhulbahante, cuyos ancianos regresaron a Las Anod en enero de 2023. Un mes después hicieron pública una declaración en la que rechazaban la reivindicación de independencia de Somalilandia⁶⁵ y anunciaban su intención de formar parte de Somalia. El 6 de julio, los ancianos de Dhulbahante nombraron un comité de 45 miembros creando el órgano ejecutivo del Estado de SSC-Khatumo (nueva administración autoproclamada por la comunidad del clan Dhulbahante), que eligió presidente a Abdiqadir Ahmed "Firdhiye", el 5 de agosto de 2023. El presidente de Somalilandia, Muse Bihi señaló en octubre que Somalilandia no aceptaría una administración separada en Sool, en referencia a SSC-Khatumo. Mientras tanto, el líder del estado SSC-Khatumo visitó del 6 al 22 de octubre la capital somalí, Mogadiscio, y reiteró su deseo de formar un nuevo estado miembro somalí durante las conversaciones con el primer ministro somalí Hamza Abdi Barre y el presidente Mohamud. Medios locales informaron el 19 de octubre que Mogadiscio había reconocido al SSC-Khatumo como administración interina. En línea con esta decisión, y para manifestar su autonomía respecto de Puntlandia, el 23 de diciembre el SSC-Khatumo rechazó la participación en las elecciones de Puntlandia en enero de 2024 e insistió en ser un estado autónomo de Somalia.

Los combates en julio afectaron al hospital de Las Anod, hiriendo a trabajadores humanitarios y personal médico, lo que provocó la retirada de la ONG MSF del hospital. Los combates, con uso de artillería pesada y fuego de mortero, se intensificaron el 25 de agosto, lo que provocó la retirada de las fuerzas de Somalilandia y la toma del control de más territorio por parte de la milicia del clan Dhulbahante. Tras los primeros enfrentamientos se iniciaron algunas iniciativas de mediación regional e internacional que fracasaron, incluso por parte de la vecina Etiopía, según destacó el Grupo de Expertos de la ONU.⁶⁶ A principios de abril, el presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud nombró a Abdikarim Hussein Guled enviado del Gobierno Federal para los asuntos de Somalilandia. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió que las fuerzas de seguridad de Somalilandia se retiraran de inmediato de Las Anod, y exhortó a las partes a que actuaran con moderación y se abstuvieran de llevar a cabo acciones provocadoras e incitar a la

violencia. Somalilandia respondió que lamentaba que el Consejo no reconociera la presencia de al-Shabaab en el conflicto y todas las implicaciones que tenía su presencia para la paz y la seguridad en la región. El presidente de Puntlandia, Said Abdullahi Deni, también respondió, con la promesa de que su Gobierno apoyaría abiertamente a la población del estado de Khatumo si el Gobierno de Somalilandia hacía caso omiso de los llamamientos del Consejo de retirarse y restablecer la paz. Una delegación de ancianos de los clanes que había viajado a Las Anod y Hargeysa en mayo, con el apoyo del Gobierno Federal, para debatir un alto el fuego, regresó a Mogadiscio el 15 de julio para celebrar nuevas consultas. El 27 de agosto, ONU, UA, IGAD, y UE, entre otros, condenaron la escalada del conflicto en Las Anod y sus alrededores, y pidieron un alto el fuego inmediato, el fin de la movilización y que todos los implicados respetaran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, la ONU prosiguió sus compromisos para fomentar el diálogo y el cese de las hostilidades. A finales de año se redujeron los combates entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia y las milicias del clan Dhulbahante.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-Tabara, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Pierre Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe

65. Véase el resumen sobre Somalia en este capítulo, y el resumen sobre Somalia-Somalilandia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África), en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

66. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 25 de agosto de 2023 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Al-Shabaab por el Grupo de Expertos sobre Somalia*, S/2023/724, 2 de octubre de 2023.

de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país. En 2020 el histórico líder Nkurunziza falleció, aunque la aproximación hacia la oposición política y armada del nuevo líder, Évariste Ndayishimiye, siguió siendo similar a la de su predecesor.

Durante el año persistieron las acciones de los cuerpos de seguridad burundeses en la provincia congoleña fronteriza de Kivu Sur en persecución de la insurgencia burundesa, así como en la provincia congoleña de Kivu Norte en el marco de la misión regional de la EAC que debía frenar las actividades del grupo armado M23.⁶⁷ Además, continuaron las acciones insurgentes esporádicas en la frontera entre Burundi y Rwanda y en la última parte del año se incrementaron las actividades rebeldes en el interior del país. En este sentido, persistieron las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas burundesas y de las milicias juveniles Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) en la provincia congoleña de Kivu Sur en persecución de la insurgencia burundesa, en especial de RED-Tabara, de origen tutsi, que dispone sus bases en el país vecino. En agosto de 2022 Burundi había revelado la existencia de un acuerdo bilateral entre RDC y Burundi que permitía la presencia militar burundesa en territorio congolés, aunque ya desde finales de 2021 se había denunciado la presencia de cuerpos de seguridad burundeses en RDC en persecución de la insurgencia burundesa.⁶⁸ En paralelo, el grupo RED-Tabara, con base en RDC, llevó a cabo nuevas acciones insurgentes en territorio burundés, las primeras desde 2021. Desde septiembre el grupo armado lanzó diversos ataques, entre ellos al aeropuerto de Bujumbura; en diciembre se enfrentó con el Ejército burundés en la provincia de Bubanza, matando a tres soldados, y el 22 de diciembre lanzó un ataque en la ciudad de Vugizo, cerca de la frontera con RDC, donde murieron 20 personas, y Gobierno e insurgencia se acusaron mutuamente de los hechos. El Gobierno señaló que la ofensiva dejó 19 civiles y un policía muertos (entre ellos 12 menores), además de nueve heridos. RED-Tabara reivindicó la muerte de nueve militares y un policía, diciendo que el ataque tuvo como objetivo el puesto fronterizo de Vugizo, y que los civiles murieron en medio del fuego cruzado con los cuerpos de seguridad congoleños. Estos actos de violencia también provocaron nuevas tensiones con Rwanda después de meses de mejora de las relaciones entre ambos países. En el territorio burundés fronterizo con Rwanda se produjeron acciones rebeldes del grupo armado burundés FNL –también activo contra Rwanda– que contribuyeron a este incremento de la tensión.

Además, los cuerpos de seguridad burundeses llevaron a cabo acciones contra la población civil de la comunidad tutsi en la provincia de Cibitoke, en persecución del grupo RED-Tabara en su feudo, en la zona del bosque de Kibira, en el noroeste del país (fronterizo con Rwanda). El presidente burundés, Évariste Ndayishimiye, acusó en diciembre a Rwanda de financiar y entrenar al grupo RED-Tabara –de origen tutsi y pro rwandés. Kigali negó, y decidió nuevamente cerrar sus fronteras con el país vecino. El centro de investigación ACLED dio un balance de 151 víctimas mortales durante el año 2023, cifra inferior a la de años precedentes (245 en 2022 y 285 en 2021).⁶⁹ Estos datos muestran una ligera mejora en comparación con los años anteriores, aunque no tienen en cuenta las acciones insurgentes y contrainsurgentes en territorio congolés. Al finalizar 2023 había 259.129 personas burundesas refugiadas, sobre todo en RDC, Rwanda, Tanzania y Uganda, según ACNUR, cifra similar a la del año anterior, con 259.279 refugiados.⁷⁰

En paralelo, durante todo el año continuó el clima de violencia política con actos de represión, detenciones, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas de miembros de la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure. En octubre fue arrestado el líder opositor Kefa Nibizi, y durante todo el año se produjeron actos de violencia y represión contra miembros del partido CNL, liderado por Agathon Rwaswa. En abril se produjo la detención del ex primer ministro Guillaume Bunyoni acusado de intento de golpe de Estado en 2022 y durante el año se llevó a cabo su juicio, que culminó en diciembre con una sentencia de cadena perpetua por parte del Tribunal Supremo. Organizaciones de derechos humanos habían solicitado, en vano, que la investigación incluyera las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad durante su Gobierno, entre 2015 y 2020. En octubre la Comisión de Derechos humanos de la ONU extendió el mandato del relator especial para Burundi por otro año, citando la persistencia de las graves vulneraciones de los derechos humanos en el país, y en su informe anual el relator remarcó la progresiva restricción del espacio público y la creciente presión hacia los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2025. Además, sectores del partido en el poder, el CNDD-FDD, manifestaron su voluntad de eliminar las cuotas étnicas en el sector público tal y como establece la Constitución de 2018 y el Acuerdo de Arusha de 2000, lo que legitimaría la completa exclusión de la minoría tutsi, ya que en la actualidad la comunidad hutu ocupa la mayoría de cargos en el sector público.

67. Véase la síntesis de RDC (este) en este capítulo.

68. Véase el resumen sobre Burundi en el capítulo 1 (Conflictos armados) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2023.

69. ACLED, *Dashboard* [consultado el 10 de enero de 2024].

70. ACNUR, *Operational Data Portal, Burundi* [consultado el 31 de enero de 2024].

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados integrantes de la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC, compuesta por facciones antibalaka lideradas por Mokom y Ngaïssona, 3R, FPRC, MPC y UPC), coalición armada opositora Siriri, milicia étnica AAKG, milicias sudanesas Rapid Support Forces (RSF), otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA, Rwanda, Grupo Wagner, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, tomó el poder en 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Dlotodia, para coordinar esta coalición rebelde, que utilizó la violencia para controlar el país, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“antibalaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del expresidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación. Nuevas iniciativas de la UA y de la CEEAC contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019. No obstante, diversos grupos abandonaron el acuerdo a finales de 2020 e iniciaron una nueva rebelión, la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). La incapacidad del Gobierno para hacer frente a la situación le llevó a solicitar el apoyo bilateral de Rwanda y de la empresa de seguridad rusa Wagner, que complejizó la situación, por la proliferación de actores armados en el país.

Durante el año continuaron los enfrentamientos en el país, en especial en el este, en un contexto de escasa

presencia de los cuerpos de seguridad gubernamentales y de persistencia de operaciones por parte de la empresa de seguridad privada rusa Wagner contra los principales grupos armados afiliados a la coalición rebelde conocida como Coalición de Patriotas para el Cambio (CPC). La violencia causó el desplazamiento forzado de miles de personas y denuncias de graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil por parte de todos los actores implicados en el conflicto armado. Los problemas de seguridad continuaron debido a los enfrentamientos entre grupos armados, a la escasa autoridad del Estado en las zonas alejadas de la capital y a la inseguridad transfronteriza, tal y como destacó la ONU. El organismo internacional hizo un llamamiento a promover un diálogo inclusivo de cara a las elecciones locales que se celebrarán en octubre de 2024, diálogo que fue rechazado por el Gobierno. Según el centro de investigación ACLED, en 2023 se produjeron 299 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 581 personas, cifra sensiblemente inferior a la de 2022 (837) y a la de 2021 (1.700) –coincidiendo con el intento de golpe de Estado y la ofensiva rebelde que cobró un fuerte impulso a finales de 2020 y principios de 2021.⁷¹ Según datos de ACNUR, a finales de 2023 más de 754.147 personas se encontraban refugiadas en los países vecinos, y 511.803 estaban desplazadas en el interior del país, cifras similares a las del año 2022.⁷²

Las condiciones de seguridad siguieron siendo inestables en todo el país, especialmente en el este, sobre todo en la prefectura de Haut Mbomou (sureste). El despliegue de los cuerpos de seguridad centroafricanos continuó siendo limitado y una milicia étnica de reciente creación, Azande Ani Kpi Gbe (AAKG), hostigaba a las comunidades fulanis y musulmanas con amenazas, secuestros de civiles y otros actos por su presunta connivencia con la insurgencia UPC. El 20 de junio, la milicia tuvo un enfrentamiento en Mboki con la UPC que se saldó con la muerte de 48 milicianos de AAKG, cuatro combatientes de la UPC y cinco civiles. La crisis en Sudán deterioró las condiciones de seguridad en la zona fronteriza, sobre todo en torno a Am Dafok, situación a la que se sumó la afluencia de refugiados en la zona. En el centro-este, en la prefectura de Haut-Kotto, la violencia se intensificó entre la coalición armada CPC y los cuerpos de seguridad nacionales apoyados por Wagner. En el oeste, milicias antibalaka y el grupo 3R siguieron atacando a civiles, limitando su libertad de circulación y provocando desplazamientos de población; y también se produjeron operaciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad privados. En paralelo, se incrementó durante el año el uso indiscriminado de municiones y artefactos explosivos improvisados (IED), que causaron decenas de víctimas mortales. Cabe destacar la mejora de las condiciones de seguridad en la capital, Bangui y el levantamiento del toque de queda

71. Aunque las cifras de víctimas mortales de 2023 son inferiores a las cifras que hacen referencia al año 2022, el análisis de la evolución del conflicto y sus impactos en relación con el año anterior no indican una mejora de la situación o un cambio de tendencia relevante.

72. UNHCR, [Operational Data Portal - CAR Situation](#) [consultado el 31 de enero de 2024].

nacional el 7 de julio, tras lo cual el Gobierno aumentó el número de puestos de control móviles en la ciudad para prevenir actividades delictivas. En el norte, la Coalición Siriri –un grupo político y armado compuesto por varias milicias rebeldes– siguió llevando a cabo acciones armadas desde sus bases en las prefecturas de Vakaga y Bamingui-Bangoran y a principios de año anunció su voluntad de derrocar al Gobierno de Touadéra.

RCA siguió siendo un espacio de confrontación indirecta en términos geopolíticos y de tensiones en torno a la presencia de la comunidad internacional a través de la misión de la ONU en el país (MINUSCA) y de cuerpos de seguridad de Estados y de empresas de seguridad privada. Cabe destacar que la rebelión de Wagner en Rusia⁷³ provocó en julio la retirada de centenares de mercenarios de las prefecturas de Vakaga, Mambere-Kadei, Ouham Pende y Bangui, que forzó a las Fuerzas Armadas Centrafricanas (FACA) a abandonar diversas bases militares.⁷⁴ Con el trasfondo de los intentos del presidente Touadéra de diversificar sus apoyos en términos de seguridad, en diciembre se hizo público que existía un acuerdo de cooperación militar entre el Gobierno y la empresa de seguridad privada norteamericana Bancroft Global Development. En este sentido, a principios de año el presidente Touadéra y el vicepresidente sudanés, Mohamed Hamdan Dagalo, alcanzaron un acuerdo para que el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) operara en la prefectura de Vakaga para combatir a los grupos armados y capturar a sus líderes, a cambio de la explotación de derechos mineros. Posteriormente, tras el estallido de los enfrentamientos armados en abril entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las RSF en Sudán, los servicios de inteligencia de Francia y EEUU revelaron que Wagner habría estado enviando material militar desde RCA a las RSF en Sudán.

La situación política estuvo dominada por el referéndum constitucional que se celebró el 30 de julio. La séptima república se instauró formalmente en RCA al promulgarse la nueva Constitución el 30 de agosto. La oposición política y diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas y varios grupos criticaron la nueva Constitución, algunas de cuyas disposiciones siguieron generando controversia, como las relativas a los requisitos para presentarse a las elecciones. Algunos grupos armados y formaciones opositoras, como la coalición armada CPC, pidieron a la población del país que boicoteara el referéndum. La coalición civil opositora Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución, algunas organizaciones de la sociedad civil y varios grupos armados no signatarios del Acuerdo Político de 2019 impugnaron los resultados. En su discurso a la nación del 31 de agosto, el presidente Touadéra reiteró su voluntad de llevar adelante el proceso de paz y la transformación política del país asentándolo en la nueva Constitución que se

había promulgado la víspera, e invitó expresamente a los grupos armados a que se reincorporaran al proceso de paz. Una misión de observación de la organización regional CEEAC señaló que las condiciones del proceso de consulta habían sido satisfactorias. La nueva Constitución, más presidencialista y que incorpora cambios que podrían interpretarse como retrocesos en términos de la independencia entre los poderes del Estado, amplió de cinco a siete años los mandatos de presidente y Parlamento, eliminó la limitación de mandatos sucesivos, retiró el control parlamentario de la firma de contratos mineros –esta prerrogativa estaría en manos del presidente–, eliminó el Senado –que había sido establecido por la Constitución de 2015, pero nunca había llegado a crearse– e instauró una cámara de líderes tradicionales, entre otras cuestiones. Por último, ante la oleada de golpes de Estado en África Central y Occidental y de rumores de un inminente golpe de Estado en RCA tras el sufrido en el vecino Gabón a finales de agosto –que derrocó al presidente Ali Bongo Ondimba –, a principios de septiembre la Guardia Presidencial llevó a cabo una serie de arrestos de oficiales del Ejército, lo que evidenció crecientes divisiones en su seno, según señaló el International Crisis Group (ICG).

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	RDC, Burundi, Angola, MONUSCO, Fuerza Regional de la EAC (Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur), SAMIDRC (Fuerza regional de la SADC, compuesta por Sudáfrica, Malawi y Tanzania), milicias progubernamentales Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP, conocidos como Wazalendo, compuestos por decenas de antiguas milicias Mai Mai y otros grupos armados de Kivu Norte y Kivu Sur, como APCLS, PARECO-FF, Nyatura, Raia Mutomboki), FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), empresas militares privadas (Agemira RDC y Congo Protection); Movimiento 23 de Marzo (M23), Twirwaneho, Rwanda; otros grupos armados no adscritos en Wazalendo, grupos armados burundeses; grupo armado de origen ugandés LRA; grupos y milicias comunitarias de Ituri (entre otros, CODECO/URDPC, FPIC, FRPI, MAPI, Zaïre)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El actual conflicto tiene sus orígenes en la rebelión que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu

73. Véase la síntesis sobre Rusia en el capítulo 2 (Tensiones).

74. ACLED, *Moving Out of the Shadows. Shifts in Wagner Group Operations Around the World*, 3 de agosto de 2023.

Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de este en 1997. Posteriormente, se desencadenó la llamada Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), en la que Burundi, Ruanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y, posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país (principalmente en las provincias de Kivu Norte y Sur) debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio ruandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP de origen tutsi integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, el Movimiento 23 de Marzo (M23). A finales de 2013 dicha rebelión fue derrotada y parte de sus combatientes se refugiaron en Uganda y Rwanda. No obstante, en 2022 el M23 se reorganizó provocando una escalada de la violencia con el apoyo de Rwanda, lo que agravó las relaciones entre RDC y Rwanda.

Aunque durante una parte del año el conflicto en el este del país se redujo en intensidad, a partir de octubre se intensificó la ofensiva por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Esta escalada en el último trimestre del año, además de las acciones de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF)⁷⁵ y otros grupos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur contribuyeron a la persistencia de un clima general de inseguridad. La ofensiva del M23 estuvo directamente vinculada al apoyo facilitado por Rwanda y fue señalado, nuevamente, por la ONU, haciéndose progresivamente eco en el resto de la comunidad internacional. Según datos de ACLED,⁷⁶ durante el 2023 se registraron 1.735 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en las cinco provincias del este del país (Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Maniema y Tanganika) que costaron la vida a 3.409 personas. En el conjunto del país la violencia vinculada a los diferentes conflictos se redujo en comparación a la cifra de 2022. ACLED contabilizó 3.907 víctimas mortales en el conjunto del país en 2023, en alrededor de 2.000 episodios de violencia, por lo que el parón estratégico del M23 tuvo su reflejo en la reducción parcial de las víctimas mortales en el conjunto del

Acusaciones de fraude en un clima de violencia política electoral con el trasfondo de la guerra en el este de RDC amenazaron con desestabilizar aún más el país

año.⁷⁷ En 2022 habían sido 6.145 las víctimas mortales consecuencia de la violencia en el conjunto del país, cifras superiores a las registradas en 2021—cuando se contabilizaron más de 2.300 episodios de violencia—, de las cuales 4.723 víctimas mortales se produjeron solo en estas cinco provincias. Según la ONU, la violencia de los grupos armados se cobró la vida de más de 1.100 civiles solo en la provincia de Ituri desde enero a octubre de 2023. Esta situación se produjo en medio de la campaña electoral, marcada por un creciente clima de violencia política que condujo a la celebración de las elecciones generales en la RDC el 20 de diciembre, en las que el presidente, Félix Tshisekedi, fue reelegido para un segundo mandato tras haber conseguido más del 73% de los votos con un 43% de la participación. Las elecciones se vieron plagadas de irregularidades y denuncias de fraude que podrían haber influido en el conjunto del proceso, según diversos análisis.⁷⁸

Durante el primer trimestre del año se produjeron diferentes iniciativas diplomáticas para promover el diálogo —los esfuerzos de Angola y Qatar⁷⁹ para alcanzar un alto el fuego fracasaron— y se inició en marzo el despliegue de la presencia militar regional, la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental (EAC) —sin mandato de uso de la fuerza, compuesta por militares de Burundi, Kenya, Uganda y Sudán del Sur. No obstante, el M23 llevó a cabo una retirada estratégica y una reducción de sus actividades conforme se fue completando el despliegue de la fuerza de la EAC, que culminó en abril. En marzo Angola también desplegó 500 militares en la provincia de Kivu Norte para asegurar las áreas controladas por el grupo rebelde M23. Entre abril y octubre se redujeron los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo M23, aunque este grupo continuó llevando a cabo ataques esporádicos contra grupos armados locales progubernamentales por el control del territorio en Kivu Norte. Como consecuencia de la violencia generalizada, aumentó la explotación ilegal de recursos naturales y colapsó el procedimiento de diligencia debida en diversos yacimientos mineros nuevamente controlados por los grupos armados, y el contrabando hacia Rwanda volvió a aumentar.

En su informe parcial de mediados de año, el Grupo de Expertos de la ONU ratificó la injerencia de Rwanda en apoyo del M23 en forma de participación directa y activamente en hostilidades contra fuerzas congoleñas.⁸⁰ En diciembre la ONU alertó del riesgo de confrontación militar entre RDC y Rwanda. La UE y EEUU impusieron

75. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en este capítulo.

76. ACLED, *Dashboard* [consultado el 8 de enero de 2024].

77. Aunque las cifras de víctimas mortales de 2023 son inferiores a las cifras que hacen referencia al año 2022, el análisis de la evolución del conflicto en relación con el año anterior refleja un empeoramiento general de la situación vinculado a la grave escalada de la violencia en la última parte del año y sus múltiples impactos.

78. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones).

79. Asmahan Jarjouly, “Violence in DRC intensifies as Qatar takes steps to mediate”, *Doha News*, 20 de marzo de 2023.

80. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe final del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 2641 (2022)*, S/2023/431, 13 de junio de 2023.

sanciones a altos cargos militares rwandeses y congolese, así como a miembros de grupos armados. Además, EEUU restringió la cooperación militar con Rwanda. En septiembre el M23 rompió con el bajo perfil que le había caracterizado durante buena parte del año y el 18 de septiembre anunció la toma de control de la localidad de Kiwanja, que nominalmente se encontraba bajo el control de la misión de la EAC. En septiembre se extendió el mandato de la misión de la EAC por tres meses, aunque su papel sobre el terreno siguió siendo testimonial. En octubre se reanudó la ofensiva por parte del M23 contra las FARDC y la coalición de grupos armados progubernamentales Wazalendo, con acciones armadas en diferentes localidades. La reapertura de las hostilidades incrementó la retórica hostil entre Kigali y Kinshasa, por lo que el enviado especial de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Huang Xia, destacó el riesgo real de un conflicto directo entre Rwanda y RDC, por la movilización de tropas que habían emprendido ambos países, por la ausencia de diálogo directo a un alto nivel entre ellos, y la persistencia del discurso de odio. El presidente Tshisekedi, así como otros candidatos durante la campaña electoral congoleña, utilizaron el conflicto para movilizar a la población del este del país, prometiendo una ofensiva contra Rwanda en caso de victoria electoral.

RDC enfrentaba una de las principales crisis humanitarias y de desplazamiento a nivel mundial, según la OIM

Los combates desde octubre provocaron una catastrófica situación humanitaria y más de un millón de personas desplazadas internas (alcanzando los casi 7 millones de desplazados internos en 2023), además del millón de personas refugiadas ya existentes. Esta cifra de desplazamiento interno (ACNUR había documentado 5,76 millones de personas desplazadas internas en 2022 y 5,6 millones de personas desplazadas internas de 2021) llevó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a afirmar que RDC estaba enfrentando una de las principales crisis humanitarias y de desplazamiento a nivel mundial.

La ofensiva también se sumó al clima general de violencia de la campaña electoral. Durante este periodo se celebraron diferentes iniciativas regionales para intentar relanzar las negociaciones de paz y se incrementó la presión internacional sobre Rwanda, aunque los procesos de diálogo de Luanda y de Nairobi iniciados durante 2022 permanecieron estancados.⁸¹ EEUU intentó promover un alto el fuego durante los comicios, y estuvo facilitando contactos entre RDC y Rwanda desde mediados de noviembre. El 11 de diciembre entró en vigor una tregua de 3 días⁸² que aplicaba a actores armados estatales y no estatales en determinadas zonas y rutas del este del país y que contaba con el apoyo de RDC y Rwanda, que posteriormente se prolongó por

2 semanas. Diversas fuentes señalaron que la tregua tuvo un seguimiento desigual y que fue utilizada por el M23 para reforzar sus posiciones alrededor de Sake, con apoyo de Rwanda. La misión de la EAC, criticada por su inoperancia durante todo el año, se retiró del país a petición del Gobierno, completando su salida el 21 de diciembre.

Las tropas burundesas negaron las acusaciones de que habían estado luchando contra el grupo armado M23, respaldado por Rwanda, en RDC, en apoyo del Ejército congolés y de las insurgencias congoleñas, en lugar de respetar el mandato de la misión de la EAC. El mandato de la misión, compuesta por tropas de Uganda, Kenya, Burundi y Sudán del Sur, era recuperar las posiciones que anteriormente ocupaban los rebeldes del M23 tras derrotar a los soldados de las FARDC, y establecer una zona de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre el M23 y las FARDC. El 11 de diciembre, el Ejército

congolés informó que todos los soldados del contingente burundés desplegados en el este de RDC como parte de la fuerza regional habían regresado a Burundi después de que terminara el mandato de la fuerza tras la decisión del Gobierno congolés de no renovar la presencia de la misión por no combatir al M23 y por las críticas de la población civil de inacción

ante las acciones del M23. El mismo día, el Ejército congolés se negó a comentar sobre las acusaciones de que se habían desplegado tropas burundesas en RDC como parte de un acuerdo bilateral entre Kinshasa y Gitega, incluidos varios relatos de soldados burundeses vistiendo uniforme del Ejército congolés y combatiendo a los rebeldes del M23 respaldados por Rwanda. Sin embargo, fuentes cercanas a las FARDC, corroboradas por múltiples fuentes, informaron de que 1.070 efectivos de las Fuerzas Armadas de Burundi, vestidos con uniformes de las FARDC, permanecían desplegados de forma encubierta desde principios de octubre de 2023 a lo largo de la carretera Sake-Kitchanga con el objetivo de asegurar el territorio de Masisi contra los ataques del M23 y Rwanda, junto con las FARDC y Wazalendo. Ese despliegue se realizó fuera del marco de la misión de la EAC. En paralelo, el Gobierno congolés y Sudáfrica estuvieron negociando desde marzo el despliegue de una fuerza de la SADC en la zona con el objetivo de colaborar en las operaciones de combate de las FARDC contra el M23. En mayo fue aprobado por la SADC el despliegue de la Misión de la SADC en RDC (SAMIDRC), que se hizo efectivo el 15 de diciembre de 2023.

Por otro lado, días antes de la celebración de los comicios se creó en Kenya una nueva coalición político-militar, Alliance Fleuve Congo,⁸³ liderada por el antiguo presidente de la CENI, Corneille Nangaa, en alianza

81. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

82. Reuters, "Exclusive: Eastern Congo ceasefire extended for two weeks, US official says", *Reuters*, 15 de diciembre de 2023.

83. Africanews, "DRC: Corneille Nangaa joins forces with M23 to create political platform", *Africanews*, 15 de diciembre de 2023.

con el grupo armado M23 y otros grupos del este del país. La intención del nuevo grupo –explicitada en un comunicado lanzado por el propio Nangaa desde el feudo del M23 en Rutshuru (Kivu Norte)– era derrocar el Gobierno de Tshisekedi. Kinshasa llamó a consultas al embajador de Kenya en RDC y retiró a su embajador en Nairobi en señal de protesta, ya que Kenya formaba parte de la misión de la EAC y de los esfuerzos mediadores regionales. Por otra parte, en el marco de la retirada de la MONUSCO solicitada por RDC, cabe remarcar que a principios de 2024 se hizo efectiva la primera fase de la retirada, con la partida de 2.000 cascos azules del país. Las movilizaciones de la población acusando a la MONUSCO de inacción y pasividad ante la escalada de la violencia provocaron la intervención de los cuerpos de seguridad congolese. En agosto una protesta anti-MONUSCO organizada por un grupo religioso en Goma fue reprimida por los cuerpos de seguridad congolese causando 43 víctimas mortales, 56 personas heridas y 150 arrestadas. La represión de hechos de este tipo envió un mensaje a todo el país de restricción del espacio para la libertad de expresión y la disidencia en el período previo a las elecciones generales de finales de 2023, según señaló el ICG.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de RDC, Gobierno de Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización de signo yihadista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también por Kabila) para presionar a Uganda, y gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local

a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas congolese en 2019 en la región, se ha producido una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil.

Cuando se cumple el segundo año del inicio de la Operación Shuja,⁸⁴ persistieron las operaciones militares de las UPDF en su ofensiva conjunta con las Fuerzas Armadas congolese contra las ADF, principalmente en el territorio de Beni, Kivu Norte, y en el sur de Ituri. Múltiples fuentes, entre ellas excombatientes de ADF y antiguos secuestrados por las ADF, informaron de un aumento del ritmo de las operaciones de las ADF desde finales de 2022, en particular en el territorio de Beni. Según el informe del Grupo de Expertos de la ONU de diciembre de 2023,⁸⁵ las ADF continuaron ofreciendo resistencia, a pesar de la intensificación y la expansión geográfica de la Operación Shuja, que le afectó. Las UPDF, según informaron, habían dado muerte a más de 550 combatientes de las ADF desde el comienzo de la operación y afirmaron que acabarían con el grupo en breve. Según las UPDF y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, importantes líderes de las ADF, como Mulalo y Meddie Nkalubo, habían sido asesinados. Sin embargo, el Grupo de Expertos no pudo confirmar esas muertes. Las ADF continuaron desplazándose hacia el oeste, a fin de evadir la presión militar, adaptando sus tácticas, operando en pequeños grupos móviles y realizando ataques esporádicos, sobre todo en zonas remotas y a lo largo de las carreteras (en particular la carretera nacional de Beni-Komanda-Mambasa) y en los campos agrícolas, aprovechando la ausencia de la autoridad del Estado. Los dirigentes de las ADF decidieron reducir los ataques en RDC, especialmente para granjearse las simpatías y el apoyo de la población y centrarse en los ataques en Uganda, según el panel de expertos. Ello dio lugar a intermitentes pausas en los ataques de las ADF en Ituri y, en particular, en el territorio de Beni desde julio de 2023.

Desde diciembre de 2022, combatientes de las ADF se infiltraron periódicamente en Uganda, donde llevaron a cabo al menos cinco ataques mortales, entre ellos uno contra una escuela en Mpondwe en junio de 2023, en el que murieron 37 estudiantes y otros siete civiles, el peor ataque en Uganda desde la masacre de Kasese en noviembre de 2016, que causó 100 víctimas mortales. Ello marcó un importante giro en la situación, pues durante más de una década los ataques de las ADF se habían concentrado principalmente en RDC. Esos recientes ataques en

84. La operación Shuja fue una ofensiva militar de las Fuerzas Armadas ugandesas (UPDF) en territorio congolés contra el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en represalia por las explosiones perpetradas en Kampala reivindicadas por las ADF el 16 de noviembre de 2021.
 85. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

Uganda también se diferenciaban desde el punto de vista operacional de los asesinatos selectivos, ataques con artefactos explosivos improvisados o intentos de atentado perpetrados en suelo ugandés en los últimos años y atribuidos a las ADF. Los cinco ataques fueron perpetrados por combatientes de las ADF que operaban en RDC y que habían cruzado la frontera con Uganda, a diferencia de otros ataques en los que la ADF movilizó a colaboradores en Uganda para llevar a cabo matanzas o colocar artefactos explosivos improvisados en RDC. Los recientes ataques de las ADF en Uganda reflejaban un doble objetivo, vengarse de las operaciones de las UDFP y las FARDC y hacer que el centro de la atención de esas operaciones se desviara de las zonas de las ADF en RDC. Además, esos ataques habrían albergado la intención de demostrar que las ADF conservaban su capacidad para llevar a cabo ataques de gran escala y de gran repercusión en los medios y avergonzar así al Gobierno de Uganda.⁸⁶

En paralelo, según múltiples fuentes recabadas por el Grupo de Expertos de la ONU, habrían aumentado las tensiones internas en el seno de las ADF, especialmente entre la dirección central y los comandantes de las ADF destacados en Mwalika (Kivu Norte). Las tensiones también eran reflejo de algunas líneas de división entre líderes de las ADF procedentes de Uganda, especialmente comandantes históricos, por un lado, y líderes no ugandeses, como Bonge la Chuma y algunos de los líderes más radicales de las ADF que se habían unido al grupo en época más reciente, por el otro. Por ejemplo, según fuentes internas de las ADF, el ataque de Mpondwe en Uganda había sido planeado por el comandante Abwakasi de las ADF sin que hubiese recibido ni instrucciones ni la aprobación de Musa Baluku, líder general de las ADF. En lo concerniente a las tareas de reclutamiento, en lugar de valerse de la ideología, las ADF reclutaron y motivaron a sus colaboradores principalmente en RDC por medio, sobre todo, de dinero y animándolos a cooptar a nuevos colaboradores, lo que les permitió renovar constantemente sus redes. Además, prosiguieron su campaña de reclutamiento, tanto en RDC como en el extranjero y se dedicaron a la explotación sistemática de niñas y mujeres secuestradas como esclavas sexuales, bajo la supervisión de comandantes. En su informe de junio,⁸⁷ el Grupo de Expertos señaló que recientes informaciones evidenciaron que **combatientes de las ADF habían lanzado misiones exploratorias hacia nuevas zonas con el objetivo de ampliar sus operaciones a las provincias de Kinshasa, Tshopo, Haut-Uélé y Kivu Sur.**

RDC (oeste)	
Inicio:	2023
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio Interno
Actores:	RDC, milicias de la comunidad teke, milicias de las comunidades yaka y suku (entre otros, el grupo armado Mobondo) y otras milicias de comunidades aliadas
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El origen del conflicto en la provincia de Mai-Ndombe (oeste) se remonta a mediados de 2022 a partir de un desacuerdo sobre un impuesto tradicional (en el marco de la ley consuetudinaria) sobre los productos agrícolas establecido por los llamados “nativos”⁸⁸ de la comunidad teke (comunidad considerada como los terratenientes tradicionales) que se asentaron en la zona antes que las comunidades “no nativas”, en su mayoría yaka, y también los suku, mbala y songe (originarios de las provincias de Kwango y Kwilu). Estas comunidades llegaron a trabajar como agricultores a la meseta de Bateke hace más de cinco décadas. Los agricultores sobrevenidos arrendaron la tierra a los jefes teke a cambio del pago de este impuesto consuetudinario. Hasta hace poco, las comunidades convivían con normalidad y se habían generado vínculos entre ellas. Según fuentes locales recabadas por la ONU, los primeros desacuerdos surgieron ya en 2021 y se intensificaron a principios de 2022 cuando las comunidades “no nativas” se negaron a pagar el aumento del impuesto. Los teke intentaron recuperar por la fuerza el impuesto, con el apoyo de algunos miembros locales de la Policía Nacional Congoleña (PNC) y elementos de las FARDC, y los jefes teke comenzaron a pedir a los agricultores que no querían pagar que abandonaran sus tierras. A mediados de 2022 se desencadenaron los primeros enfrentamientos intercomunitarios, que han ido en aumento durante 2023. La cuestión del pago de impuestos pronto se transformó en una cuestión de control de tierras, y los agricultores, principalmente de la comunidad yaka, comenzaron a reclamar las tierras propiedad de los teke. Otra queja de los agricultores yaka fue que los terratenientes de la comunidad teke habían estado vendiendo la tierra a inversores, aunque esa tierra ya pertenecía a los yaka.⁸⁹ Los ataques de los teke contra lo que consideraban comunidades “no nativas” provocaron violentas represalias por parte de los yaka, que empezaron a organizar el grupo de combatientes Mobondo, al que se incorporaron miembros de otras comunidades aliadas, que durante 2023 elevó su grado de organización, aumentó sus capacidades militares y ejecutó ataques armados.

El brote de violencia iniciado a mediados de 2022 en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país), que enfrentaba entre sí a miembros de las comunidades teke y yaka se intensificó en 2023, por lo que pasó a ser considerado conflicto armado, y se extendió a las provincias vecinas de Kwango, Kwilu,

86. Véase el resumen de Uganda en el capítulo 2 (Tensiones).

87. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe final del Grupo de Expertos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 2641 (2022)*, S/2023/431, 13 de junio de 2023.

88. La consideración de “nativos” y “no nativos” hace referencia a la denominación del Grupo de Expertos de la ONU en sus dos últimos informes sobre la cuestión, S/2023/431, 13 de junio de 2023, y en especial, al anexo 2 del informe S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

89. Véase el Anexo 2 del informe del Grupo de Expertos. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

Kinshasa y Kongo Central, causando centenares de víctimas mortales. La violencia amenazaba con rodear a Kinshasa, la capital, donde viven miembros de las comunidades teke y yaka, entre ellos miles de civiles desplazados por el conflicto. La aparición de Mobondo, grupo armado de combatientes predominantemente yaka, obstaculizó los esfuerzos de reconciliación. Ambas comunidades permanecían armadas y movilizadas. La violencia había comenzado el 9 de junio de 2022 en la aldea de Masia-Mbe, en el sector Bateke Sud de Mai-Ndombe, donde un agricultor yaka resultó herido durante la recaudación de impuestos en nombre del jefe tradicional teke. Los agricultores yaka comenzaron a incitar a otros a negarse a pagar impuestos. Varias fuentes informaron que miembros de la comunidad yaka y otros agricultores “no nativos” comenzaron a organizar reuniones e incitar a miembros de su comunidad a afirmar que en el pasado, Kwamouth –en la provincia de Mai-Ndombe– solía pertenecer a los yaka. Intereses económicos, como el acceso a la tierra y a los bienes, e intereses políticos, como el restablecimiento del poder consuetudinario, influían notablemente en la continuación del conflicto. El aumento de los ataques de Mobondo contra las FARDC en 2023 llevó a las autoridades militares a calificar el conflicto de “insurreccional”. Los mortíferos ataques de los teke y los yaka provocaron desplazamientos masivos de población, lo que agudizó la grave crisis humanitaria. Desde el inicio del conflicto, se quemaron aldeas enteras y tanto milicias formadas por miembros de la comunidad teke como de la comunidad yaka establecieron puestos de control en busca de miembros de otras comunidades consideradas hostiles. Cientos de escuelas y centros médicos habían quedado destruidos o se habían visto obligados a cerrar. Se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos, como violencia sexual, secuestros para obtener rescate y tortura.

Cientos de civiles perecieron como consecuencia del conflicto. Según ACLED, en 2023 se produjeron 346 víctimas mortales en un total de 94 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados), aunque es probable que las cifras sean mucho más elevadas, según el Grupo de Expertos de la ONU,⁹⁰ ya que seguían sin denunciarse la violencia y los actos delictivos y resultaba difícil atribuir responsabilidades debido a la falta de acceso a las zonas de conflicto. Los ataques de los teke contra lo que consideraban comunidades “no nativas” provocaron violentas represalias por parte de los yaka, que empezaron a organizar el grupo de combatientes Mobondo, al que se incorporaron miembros de otras comunidades aliadas, como los suku, mbala, ndinga,

songe y ngongo. A lo largo de 2023, Mobondo elevó su grado de organización, aumentó sus capacidades militares y ejecutó ataques de tipo militar, según el Grupo de Expertos. Sin embargo, aún no está claro si Mobondo es un grupo homogéneo estructurado jerárquicamente o una coalición de grupos afines sin una comandancia central. En 2023 las operaciones de las FARDC condujeron al desarme y la detención de cientos de combatientes de Mobondo. Aunque algunos fueron encarcelados y sometidos a juicio, muchos fueron trasladados a centros de capacitación de las FARDC. Además, Fabrice Zombi “Mini Kongo”, designado por el presidente de RDC como jefe negociador entre las comunidades yaka y teke, movilizó a cientos de integrantes de Mobondo para que se unieran a los campos de entrenamiento de las FARDC. “Mini Kongo” es un jefe tradicional suku, reconocido como una figura ceremonial por los yaka. Por ello, los teke lo acusaron de colaborar con Mobondo. Según pudo confirmar el Grupo de Expertos, más de 1.000 combatientes de Mai-Ndombe y otros lugares, incluidos combatientes de Mobondo que se habían entregado, fueron reclutados, entrenados y desplegados a Kivu Norte, en el este de RDC, para luchar contra el M23, sin que se hubiesen investigado sus antecedentes.

Sudán ⁹¹	
Inicio:	2023
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (Sudan Armed Forces), Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA, Eastern Sudan Liberation Forces, United Popular Front for Liberation and Justice, Beja National Congress, Beja Armed Congress, milicias comunitarias, Grupo Wagner
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	Tras treinta años en el poder, el régimen de Omar al-Bashir cayó en abril de 2019 después de masivas movilizaciones populares que fueron aprovechadas por las fuerzas de seguridad para dar un golpe de Estado. Tras meses de gobierno de la Junta Militar e importantes tensiones nacionales, a finales de 2019 se logró conformar un gobierno transicional cívico-militar. Sin embargo, el 25 de octubre de 2021 un nuevo golpe militar por parte del ala militar del

90. Consejo de Seguridad de la ONU, *Carta de fecha 15 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo*, S/2023/990, 30 de diciembre de 2023.

91. En años anteriores en Sudán se identificaban dos conflictos armados diferenciados: Sudán (Darfur), iniciado en 2003, y Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en 2012. Ambos conflictos, caracterizados como internos-internacionalizados y motivados por Autogobierno, Recursos e Identidad, se analizan en la presente edición conjuntamente dentro del conflicto armado Sudán. Este hecho se debe a que las dinámicas del conflicto armado iniciado en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) afectan a una gran parte del país y, de forma particular, a las regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul. Además, los actores armados irregulares de estas regiones también participan activamente en las hostilidades, tomando parte activa en la contienda.

gobierno transicional acabó con la transición política. Fue seguido de un periodo de amplias movilizaciones ciudadanas contra la Junta Militar (Consejo Soberano) presidida por el jefe de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y vicepresidida por el líder del grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), teniente general Mohammed Hamdan Dagalo "Hemedti". A finales de 2022, tras un año de negociaciones, se logró un acuerdo marco en el cual los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y devolverlo a actores civiles. Sin embargo, las desavenencias entre las partes militares (SAF y RSF) en las negociaciones sobre la reforma del sector de seguridad, especialmente en lo relativo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando, acabaron por detonar, el 15 de abril de 2023, un nuevo conflicto armado en el país. Este nuevo escenario de violencia se concentró en un principio en la capital, Jartum, pero con el paso de los meses se intensificó y amplió a gran parte del país, afectando a las dinámicas de conflictividad armada preexistentes en las regiones de Darfur y las Dos Áreas (Kordofán Sur y Nilo Azul), y a la región este del país. En la región de Darfur, el conflicto armado se remonta al año 2003 y gira en torno a demandas de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM de mayor descentralización y desarrollo de la región. El Gobierno respondió al levantamiento armado en Darfur utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes *janjaweed*. Por su parte, en relación a Kordofán Sur y Nilo Azul, la reconfiguración estatal de Sudán tras la secesión del sur en julio de 2011 agravó las tensiones del Gobierno sudanés con ambas regiones fronterizas, que durante el conflicto armado sudanés (1983-2005) apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. A partir de ese momento se conformó el SPLA-Norte en las Dos Áreas, iniciándose un conflicto armado en torno a la demanda de la insurgencia de reconocimiento de la pluralidad étnica y política.

En abril se produjo el estallido de un nuevo conflicto armado en el país que enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF). Durante el primer trimestre del año se incrementaron las tensiones entre los líderes militares del país, el presidente del Consejo Soberano y jefe de las SAF, teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el vicepresidente del Consejo y líder de las RSF, teniente general Mohammed Hamdan Dagalo "Hemedti", debido a diferencias entre los actores militares en las negociaciones sobre la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo referente a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando.⁹² Las tensiones aumentaron a principios de abril con el crecimiento de los rumores sobre la movilización de efectivos militares de ambas partes en Jartum y Darfur. Finalmente, y tras intentos fallidos de mediación por múltiples actores, el 15 de abril las tensiones desembocaron en enfrentamientos armados entre las SAF dirigidas por al-Burhan y las RSF comandadas por Dagalo. Si bien inicialmente los enfrentamientos se concentraron en la capital, Jartum, matando a cientos de personas en los primeros días, durante el año se fueron intensificando y extendiendo

a casi todo el país, en particular en todos los estados de Darfur (Septentrional, Central, Occidental, Norte y Meridional), Kordofán del Norte y del Sur, Kassala, Gedarif, Mar Rojo o Nilo Azul.⁹³ En un inicio el Ejército tomó el control de varias ciudades, incluidas Kassala y Port Sudan en el este, mientras que las RSF tenían ventaja en Darfur, y los combates se intensificaron por el control de Jartum. Durante el año, el conflicto armado se caracterizó por los ataques de las SAF a ciudades con artillería pesada y bombardeos aéreos, mientras que las RSF utilizaron técnicas de guerra de guerrillas y misiles tierra-aire, al no disponer de aviación.

El inicio de los combates dio lugar a diferentes esfuerzos de mediación que no lograron contener la violencia, a pesar de que se logró la firma de diferentes altos el fuego (el 24, 27-30 de abril; 4-11, 22-31 de mayo; 20, 26-27 de junio, entre otros) y treguas humanitarias, que fueron sistemáticamente incumplidas por las partes. A medida que las negociaciones fracasaban, el conflicto entre las SAF y las RSF se fue intensificando y los combates involucraron a otros grupos armados, afectando a regiones que ya presentaban dinámicas de conflictividad armada, como los casos de Kordofán Sur, Nilo Azul o Darfur. Si bien al inicio del estallido de la violencia entre las SAF y las RSF varios grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba – entre ellos Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N)-facción Malik Agar y el Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM)– declararon su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso del tiempo fueron tomando parte en las hostilidades.

En la región de Darfur el estallido de los enfrentamientos entre las SAF y RSF sumió a la región en la peor crisis desde el fin de la guerra civil. El año ya se había iniciado con nuevos ataques contra la población civil y la proliferación de milicias armadas en Darfur, que generó que el grupo armado Ejército de Liberación de Sudán (SLA) anunciara la formación de una fuerza conjunta con las RSF para poner fin a la inseguridad, excluyendo de la misma al Ejército nacional y a otros grupos armados, incluida la coalición de grupos armados de Darfur occidental, la Alianza Sudanesa. Estos hechos generaron también el cierre de la frontera terrestre con RCA, que estuvo clausurada hasta el 9 de marzo. En mayo, ya con los combates entre las SAF y las RSF intensificados en Darfur, se agravaron las tensiones entre comunidades, especialmente entre grupos árabes rizeigat (de donde proviene la mayor parte del personal de RSF) y no árabes masalit. Este incremento de la violencia motivó que el gobernador de Darfur y líder del SLA-MM, Minni Minnawi, pidiera

92. Véase el resumen sobre Sudán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.
93. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Situación en el Sudán y actividades de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán, S/2023/355, 16 de mayo de 2023.

el 28 de mayo a los habitantes de Darfur que se armaran, aumentando el riesgo de guerra civil. El 14 de junio fue asesinado el gobernador del estado de Darfur Occidental después de que éste acusara a las RSF de genocidio. Durante los siguientes meses, las RSF se hicieron con el control de amplias regiones de Darfur Central, Meridional, Oriental y Occidental, concentrando su ofensiva sobre Darfur del Sur, que fue capturada en octubre tras la conquista de su capital, Nyala, y sobre Darfur del Norte. En noviembre, tras el avance de las RSF hacia El Fasher, capital de Darfur del Norte, diferentes grupos armados darfuríes signatarios del Acuerdo de Paz de Juba (2020), cuyos miembros provienen en gran medida de la comunidad zaghawa, renunciaron a la neutralidad y se unieron a las SAF. Este hecho podría tener importantes repercusiones sobre Chad, país donde la comunidad zaghawa domina el Gobierno y el Ejército. Además, la facción no signataria del Acuerdo de Paz de Juba representada por el SLA-AW Abdul Wahid al-Nur llegó a El Fasher el 24 de noviembre con el objetivo principal de proteger los campos de desplazados en la ciudad.

El conflicto armado iniciado el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Rapid Support Forces generó el desplazamiento forzoso de más de 7,5 millones de personas y la muerte de más 13.000 tras ocho meses de enfrentamientos

En **Kordofán Sur y Nilo Azul** el deterioro de la situación de seguridad motivó que el 8 de junio el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) se movilizara. Algunos informes acusaron al SPLM-N y las RSF de atacar posiciones de las SAF en la región de al-Dalanj. A partir de ese momento y hasta finalizar el año, en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, el grupo rebelde SPLM-N siguió ampliando su presencia en la guerra, emergiendo como la tercera fuerza en el conflicto.

En el **este del país**, en las regiones de Mar Rojo, Kassala y Gedarif, también se registraron combates a lo largo del año, motivando el surgimiento o rearme de diferentes grupos armados de corte regional, como el Eastern Sudan Liberation Forces encabezado por Ibrahim Dunya, el United Popular Front for Liberation and Justice bajo el liderazgo de El Amin Daoud, the Beja National Congress liderado por Mousa Mohamed Ahmed, o el Beja Armed Congress encabezado por Omar Taher.⁹⁴

Por otro lado, entre otros eventos destacados durante el año, a finales de agosto, después de meses de asedio de las RSF en Jartum, el jefe del Ejército, general Abdel Fattah al-Burhan, escapó del cuartel general. Los combates se mantuvieron durante el resto del año en Jartum y la vecina ciudad de Omdurman,

y se fueron intensificando también en el este y otras zonas del sur del país. Debido a la crisis de seguridad en el país, a principios de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió finalizar el mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) y el inicio del cierre de sus operaciones, que finalizará el 29 de febrero de 2024.

Finalmente, **y en relación con el impacto de la guerra, los datos sobre la intensidad y letalidad del conflicto durante el año recogidos por ACLED dan muestra de más de 13.000 muertes producidas en el país** por episodios violentos desde que estallaron los primeros combates en abril, concentrándose estas en la capital y en los estados de Darfur.⁹⁵ Por otro lado, más de 7,5 millones de personas se desplazaron forzosamente de sus hogares, de las cuales 1,3 millones eran personas refugiadas y más de 6 millones eran civiles desplazados internamente, según datos de ACNUR.⁹⁶ Asimismo, la ONU alertó de que las necesidades humanitarias en el país –que ya alcanzaban niveles récord antes de los enfrentamientos, con una tercera parte de la población en situación de necesidad de asistencia humanitaria– aumentaron drásticamente durante el año hasta llegar a los 25 millones de personas, añadiendo que la magnitud de la crisis podría desestabilizar toda la región.

Durante el conflicto también se presentaron múltiples denuncias de **violación a los derechos humanos y crímenes de guerra**. A mediados de julio en Darfur Occidental –epicentro del conflicto entre comunidades árabes rizeigat y no árabes masalit– la ONU informó que se habían descubierto cadáveres de al menos 87 personas masalit en fosas comunes. La Corte Penal Internacional informó de la apertura formal de una investigación sobre presuntos **crímenes de guerra en Darfur**. Amnistía Internacional también documentó la comisión de crímenes de guerra generalizados por ambas partes en el conflicto.⁹⁷ Estos hechos generaron que el 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptase la Resolución A/HRC/RES/54/2 en la que estableció una Misión Internacional de Investigación Independiente para Sudán, con el mandato de investigar y establecer los hechos, circunstancias y causas fundamentales de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos, así como violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado.

94. Radio Dabanga, *Eritrea military training camps raise concerns about security in eastern Sudan*, *Radio Dabanga*, 26 de enero de 2024.

95. ACLED, *Sudan: The Rapid Support Forces (RSF) Gains Ground in Sudan, Situation Update. December 2023, 12 January 2024* [consultado el 15 de enero de 2024].

96. ACNUR, "Sudan Situation", *Operational Data Portal* [consultado el 15 de enero de 2024].

97. Amnistía Internacional, *Death Came To Our Home": War Crimes and Civilian Suffering In Sudan*, agosto de 2023.

Sudán del Sur

Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción Riek Machar), facciones Kitgwang disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet, Simon Gatwech Dual y Johnson Olony (“Agwalek”), SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG) -antes Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del exvicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificado en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año se mantuvieron las dinámicas de inestabilidad y violencia en el país debido, principalmente, a enfrentamientos intercomunitarios,

a escisiones en el seno del SPLA-IO y al efecto contagio de la guerra en la vecina Sudán. Según datos de ACLED, durante el 2023 se registraron 464 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 1.262 personas. Estos datos muestran una desescalada de la violencia con relación al año anterior, cuando se contabilizaron 597 episodios y 1.898 muertes asociadas.⁹⁸ Pese a esta reducción relativa de la letalidad, persistieron los problemas asociados a la crisis humanitaria y de desplazamiento forzado en el país. Según los datos de ACNUR 2,2 millones de personas se encontraban refugiadas a mediados de 2023 debido a la violencia y otras 1.490.100 eran desplazadas internas.⁹⁹ Estas cifras siguen colocando a Sudán del Sur como la cuarta crisis de desplazamiento más desatendida del mundo, según la OCHA. Además, OCHA resaltó que la crisis de desplazamiento forzado se agravó debido a que Sudán del Sur ha acogido a más de medio millón de personas refugiadas de Sudán y de refugiadas sursudanesas que han retornado al país debido a la inseguridad provocada por el inicio del conflicto armado en Sudán en abril de 2023. La persistencia de la crisis humanitaria en el país hizo que OCHA mantuviera la proyección de que 9 millones de personas (de una población de 12,4 millones) necesitarán asistencia humanitaria y protección en 2024, alertando de los altos niveles de violencia, explotación y abusos que padece la población, incluida violencia sexual y de género.¹⁰⁰

En lo relativo a la inseguridad, la violencia en el país volvió a estar caracterizada por enfrentamientos intercomunitarios, así como por las disputas entre el SPLA-IO y distintas facciones escindidas. La violencia de carácter intercomunitario se mantuvo durante todo el año afectando a diversos estados con enfrentamientos entre miembros de distintos grupos: lou nuer y bor dinka (Jonglei); nuer y dinka twic (Abyei); dinka twic (Warrap) y ngok dinka (Abyei); murle (Jonglei); kuku y bor dinka (Ecuadoria Central); luacjang y payam (Warrap); nuer y shilluk (Malakal). También se mantuvieron enfrentamientos armados entre las fuerzas étnicas shilluk “agwalek” bajo el mando del general Johnson Olony contra fuerzas nuer respaldadas por el general Simon Gatwech. Estos enfrentamientos se habían iniciado el 9 de agosto de 2022, debido a que el general Gatwech – líder de la facción Kitgwang escindida del SPLA-IO ese mismo año–, había destituido al general Olony como su adjunto, motivando la conformación de una nueva facción Kitgwang. En este sentido, el SPLA-IO siguió padeciendo importantes escisiones internas que continuaron debilitando a la formación. El 7 de junio, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y Johnson Olony acordaron integrar oficialmente a los combatientes “agwalek” en las Fuerzas Armadas.

98. ACLED, *Dashboard* [consultado el 26 de febrero de 2024].

99. ACNUR, *Mid-Year Trends 2023*, 25 de octubre de 2023.

100. OCHA, *South Sudan* [consultado el 26 de febrero de 2024].

Posteriormente, en el mes de octubre se registraron otras dos importantes deserciones del SPLA-IO, que pasaron a apoyar a la facción del Gobierno liderada por Kiir. Estas dos escisiones eran la de Simon Maguek Gai, comandante del estado de Unidad, y la de Michael Wal Nyak, comandante del estado de Jonglei, lo que redujo drásticamente la capacidad militar del SPLA-IO en ambos estados. Las tensiones entre las fuerzas de Machar y las de Gai provocaron durante el resto del año combates en el estado de Unidad, que generaron que el SPLA-IO perdiera todas sus posiciones militares salvo el condado de Panyijiar, su último bastión en Unidad.

Por otro lado, el estallido de la guerra en la vecina Sudán el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Rapid Support Forces (RSF), generó importantes efectos en Sudán del Sur.¹⁰¹ Amenazó las exportaciones de petróleo sursudanesas, que representan el 85% de los ingresos del Gobierno de Sudán del Sur. Las RSF amenazaron, a mediados de junio, con volar el oleoducto que conecta Sudán del Sur a Sudán, lo que impediría la exportación de petróleo de Sudán del Sur a través de Port Sudan, con consecuencias económicas catastróficas. El conflicto sudanés redujo el suministro de alimentos a lo largo de la frontera entre ambos Estados, provocando escasez de alimentos y precios elevados en el norte de Sudán del Sur. En respuesta a la crisis sudanesa, el presidente Kiir encabezó los esfuerzos de mediación entre las partes del bloque regional de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) en conflicto. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el 15 de marzo por un año el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), con mayor énfasis en la protección de civiles, y el 26 de mayo prorrogó las sanciones a Sudán del Sur, incluido el embargo de armas.

Finalmente, en lo que respecta a la **implementación del Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de 2018 (R-ARCSS)** durante el año se siguieron registrando algunos avances y se confirmó la celebración de elecciones presidenciales para diciembre de 2024. Por otro lado, en lo relativo a **las conversaciones de paz de Roma** que desde 2019 mantiene el Ejecutivo sursudanes con los grupos no signatarios del R-ARCSS, representados bajo la coalición Grupos de Oposición de Sudán del Sur No Signatarios (NSSSOG), si bien en febrero se levantó formalmente la suspensión de las mismas – que llevaban paralizadas desde finales de 2022– su reanudación no conllevó avances significativos durante el resto del año, aunque se informó de la intención de Kenya de acogerlas en 2024.¹⁰²

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Unidad con sede en Trípoli, Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) con sede en Tobruk, grupos armados de diverso signo – incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) (también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia o ALAF), ISIS, AQMI, mercenarios, Grupo Wagner–, Türkiye
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

A lo largo de 2023 se mantuvo la tendencia de reducción en las cifras de letalidad asociadas al conflicto armado observada desde el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2020, pero en un contexto de impasse político, pugnas de poder entre los gobiernos rivales que controlan el país y no resolución de problemas de fondo que afectaron a las perspectivas de estabilidad política, económica y de seguridad del país. Según los datos de ACLED, en 2023 murieron 89 personas en hechos de violencia vinculados al conflicto (batallas, explosiones o violencia remota, violencia contra civiles), una cifra similar a los

101. Véase el resumen sobre Sudán en este capítulo.

102. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

balances de los últimos años –157 en 2022 y 115 en 2021– y significativamente menor a la registrada en los años inmediatamente anteriores al alto el fuego –en torno a 1.500 en 2020 y 2.000 en 2019. A lo largo del año la situación general de seguridad en el país continuó siendo frágil y se produjeron enfrentamientos en Trípoli, Bengazi y Gharyan (oeste), que ilustraron la fragmentación de los actores de seguridad, los problemas derivados de la falta de un comando central y las pugnas por el control de territorios y recursos. Así, los choques armados más graves de 2023 se produjeron en agosto, cuando dos jornadas de enfrentamientos entre la Agencia Disuasoria para el Combate del Crimen Organizado y el Terrorismo y la Brigada 444 en una zona densamente poblada de Trípoli causaron la muerte de 55 personas. Otro episodio de gravedad se produjo en octubre, cuando el grupo armado LNA de Khalifa Haftar intentó arrestar al ex ministro de Defensa del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), provocando choques armados con milicias afines al ex miembro del gabinete. El incidente acabó con un número indeterminado de muertes y personas en paradero desconocido. Durante el año también se produjeron choques por el control de actividades ilícitas, hostilidades entre varias unidades del LNA en Bengasi, y entre este último y grupos criminales. Durante 2023 se alertó sobre potenciales efectos desestabilizadores en Libia del conflicto en Sudán y sobre los impactos de la crisis en Chad en el sur del territorio libio. El Ejército chadiano y grupos armados de la oposición del vecino país protagonizaron enfrentamientos en la zona fronteriza y, en agosto, el LNA realizó ataques aéreos en la frontera y contra posiciones de la oposición chadiana.

La fragilidad de la situación en el país norteafricano también quedó expuesta en 2023 por las desastrosas consecuencias de la tormenta Daniel que en septiembre derivó en la destrucción de dos presas y en la muerte y desaparición de miles de personas en Derna (este). Los recuentos no eran precisos, pero la OMS estimaba 4.000 muertes, unas 8.500 desapariciones y el desplazamiento forzado de 43.000 personas. Las lluvias torrenciales sin precedentes –50 veces más probables en la actualidad que en el pasado a causa del cambio climático, según voces expertas– tuvieron efectos devastadores que se explican también por las consecuencias de largo plazo de la violencia, la fractura institucional y problemas de gobernanza. Grupos libios exigieron una investigación independiente de las responsabilidades derivadas del mantenimiento de las estructuras y fallos a la hora de evacuar a las comunidades en riesgo. Posteriormente, la ONU también advirtió a las autoridades libias ante las iniciativas paralelas para responder al desastre y las disputas por controlar los fondos de reconstrucción. La población migrante y refugiada continuó siendo un colectivo especialmente vulnerable en Libia, también en lo que respecta a la tormenta Daniel –500

muertes y otras 500 desapariciones–, pero no solo. El país norteafricano siguió siendo una vía para quienes intentaban cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa, una ruta extremadamente peligrosa: 939 personas muertas y 1.248 desaparecidas entre enero y noviembre de 2023. Otras 15.000 personas, incluyendo menores, fueron interceptadas y retornadas a Libia en 2023. Grupos de derechos humanos también continuaron denunciando a milicias y a las autoridades libias por vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo persecución y acoso a entidades de la sociedad civil.

A nivel político, durante 2023 continuaron las negociaciones que involucran a distintos actores locales e internacionales, pero no se consiguió un acuerdo político definitivo para la celebración de elecciones, que estaban previstas para diciembre de 2021.¹⁰³ Persistió así el impasse que a principios de 2022 había derivado en la configuración de dos gobiernos rivales, uno con sede en Trípoli –el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido por la ONU– y otro establecido en la zona este del territorio –el Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN), alineado con la Cámara de Representantes (Tobruk) y con el grupo armado LNA (o ALAF) del general Khalifa Haftar. Durante 2023 los esfuerzos se centraron en la definición de una hoja de ruta para los comicios. No obstante, las controversias en torno a las normas que deben regular la votación continuaban, incluyendo sobre la configuración de un nuevo gobierno interino. En este contexto, al finalizar el año el enviado especial de la ONU para Libia intentaba promover un diálogo entre los principales actores institucionales del país. En materia de seguridad, cabe señalar que la Comisión Militar Conjunta 5+5 continuó dando seguimiento a la implementación del acuerdo de alto el fuego y de otras disposiciones de ese pacto, como la retirada de fuerzas extranjeras y mercenarios del país, aunque la puesta en práctica de este último aspecto se vio comprometida por el impasse político y por el deterioro de la situación en el Sahel y en Sudán, entre otras dinámicas.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, grupos narcoparamilitares
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis:	En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional)

103. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del *statu quo* mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

La violencia en Colombia se mantuvo en niveles elevados durante todo el año a pesar de los diferentes acuerdos de alto el fuego que el Gobierno alcanzó con varios grupos armados activos y de las negociaciones abiertas con el ELN y el EMC.¹⁰⁴ Según los datos del centro de investigación ACLED, durante 2023 murieron 1.934 personas como consecuencia del conjunto de eventos violentos que tuvieron lugar en el país. Gran parte de estas muertes fueron consecuencia de acciones armadas de individuos no identificados contra población civil, sin que pudieran ser atribuidas a alguno de los diferentes grupos armados de oposición activos en el país y otras acciones fueron llevadas a cabo por grupos armados vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico. El centro de investigación CELAC señaló que 84 personas murieron como consecuencia de acciones armadas atribuidas al grupo armado ELN. Por su parte, la organización Indepaz señaló que durante 2023 se registraron 93 masacres en las que resultaron muertas 300 personas, el mismo número de víctimas que el año anterior. OCHA señaló que durante el año se constató una reducción de los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y las Fuerzas Armadas colombianas, pero que los niveles de confrontación entre los diferentes grupos armados activos mantuvieron un nivel similar al del año anterior. Además, OCHA alertó de las graves consecuencias humanitarias del conflicto derivadas del uso de minas antipersonales, que provocaron 95 víctimas mortales; de las restricciones a la movilidad de la población como consecuencia de confinamientos por la acción de los actores armados –88.000 personas afectadas– y al mismo tiempo el impacto en términos de desplazamiento forzado de población –63.200 personas desplazadas–; o del aumento del reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de los grupos armados –251 menores afectados, un 93% más que en 2022–. Tanto los confinamientos como los desplazamientos forzados de población afectaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas

y afrodescendientes, que fueron las más impactadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que durante 2023 se registraron 320 víctimas de masacres, cuya autoría se atribuyó a grupos armados no estatales y organizaciones criminales y que afectaron fundamentalmente a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Además, cabe destacar que según el informe de la Defensoría del Pueblo, durante 2023 fueron asesinados 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos (160 hombres y 21 mujeres). La situación humanitaria provocada por el conflicto armado se vio agravada por los efectos del cambio climático en el país, con sequías e inundaciones en diferentes zonas.

El año comenzó con un aumento de los enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas de seguridad colombianas, a pesar del proceso de paz en marcha, así como de las hostilidades entre el ELN y el EMC, grupo surgido como disidencia de las FARC, especialmente en el departamento de Arauca. Estos últimos enfrentamientos causaron en enero la muerte a 10 personas, y se repitieron a lo largo de todo el año, provocando decenas de víctimas mortales y graves impactos sobre la población civil. De hecho, aunque ambos grupos mantenían negociaciones de paz con el Gobierno colombiano por separado, desde las delegaciones negociadoras gubernamentales se expresó la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambos grupos que pudiese llevar a la reducción de la violencia. En marzo tuvo lugar el ataque de mayor gravedad del ELN contra las Fuerzas Armadas del último año y medio. Un vehículo del Ejército fue atacado en el Norte de Santander y 10 soldados murieron como consecuencia de la acción armada, que también dejó nueve heridos en las filas militares. También se registraron enfrentamientos armados entre diferentes grupos disidentes de las FARC, el EMC y la Segunda Marquetalia. En los meses siguientes se siguieron registrando enfrentamientos entre el ELN y las fuerzas de seguridad, pero a partir de la firma del acuerdo de alto el fuego cuyo inicio se acordó para el 3 de agosto con este grupo en el marco de las negociaciones de paz se produjo una importante reducción de la violencia. No obstante, se mantuvieron los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados de oposición y organizaciones criminales. De hecho, tras la firma del acuerdo de alto el fuego entre el ELN y el Gobierno, se produjo una intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el EMC, que dejaron más de una decena de muertes en septiembre. En octubre, el Gobierno colombiano y el EMC firmaron un acuerdo de alto el fuego bilateral.

104. Véase los resúmenes sobre las negociaciones de paz con el ELN y el EMC en el capítulo 3 (Negociaciones de paz en América) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

1.3.3. Asia y el Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Frente Nacional de Resistencia (NRF), ISIS-KP, Afghanistan Freedom Front (AFF)
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidines al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral, hasta la conformación de un gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”. En 2021, tras una importante intensificación de la violencia, los talibanes ascendieron de nuevo al poder y se produjo la retirada de todas las tropas internacionales en el país. Desde 2014 está activa en el país la rama regional de ISIS, conocida como ISIS-KP, cuya actividad ha ido en ascenso a lo largo de la última década.

La violencia continuó activa en Afganistán, pero se produjo una notable reducción durante el año. Según el centro de investigación ACLED, se registraron 998 muertes como consecuencia de la violencia armada durante 2023, cifra considerablemente inferior a las 3.970 de 2022 y muy alejada de las casi 42.000 de 2021. Una parte importante de las muertes de civiles se produjeron como consecuencia de la represión

por parte de las fuerzas de seguridad talibanes contra personas que tuvieron participación activa en la anterior administración o contacto directo con organizaciones internacionales o fuerzas de seguridad internacionales desplegadas en el país después de la invasión estadounidense de 2001, así como defensores de derechos humanos y derechos de las mujeres. **La mayor parte de las acciones armadas que tuvieron lugar durante el año estuvieron protagonizadas por la filial regional de ISIS, el ISIS-KP,** que llevó a cabo numerosos atentados contra las fuerzas de seguridad afganas y contra miembros del Gobierno, aunque su actividad fue decreciente a lo largo del año. El centro de investigación International Crisis Group señaló que la mejora de la capacidad contrainsurgente del Gobierno talibán derivó en una reducción en el número de ataques por parte de ISIS-KP, así como una reducción en el número de muertes ocasionadas por las acciones armadas de este grupo.¹⁰⁵ Por su parte, si bien Naciones Unidas destacó durante la primera mitad del año que este grupo constituía la mayor amenaza terrorista en Afganistán y en la región de Asia meridional, y destacó que el grupo mantenía una capacidad operativa que ponía en cuestión la habilidad del régimen talibán para mantener la seguridad en el país,¹⁰⁶ a principios de 2024 constató una reducción de los ataques de ISIS-KP y un aumento en la respuesta contrainsurgente del Gobierno talibán durante la segunda mitad del año.¹⁰⁷ De hecho, las fuerzas de seguridad del Gobierno talibán llevaron a cabo múltiples operaciones de seguridad en las que detuvieron y mataron a decenas de integrantes de esta organización armada.

Entre las acciones armadas del ISIS-KP durante el año cabe destacar un atentado suicida que tuvo lugar en enero en Kabul contra un convoy del ministro de Defensa en el que murieron 20 personas –integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles–. Días después también murieron otras 20 personas en un atentado suicida en las inmediaciones del ministerio de Exteriores mientras se producía la visita al ministerio de una delegación china. En marzo ISIS-KP mató al gobernador de la provincia de Balk. Por su parte, el Gobierno talibán afirmó haber matado al número dos de ISIS-KP, así como al jefe de inteligencia y operaciones, responsable de los atentados de envergadura que tuvieron lugar en Kabul a principios de año. También persistieron algunos enfrentamientos esporádicos y acciones armadas por parte de diferentes grupos opositores al régimen talibán como el NRF y el AFF, aunque en menor medida que en años anteriores, especialmente en el caso del NRF. El secretario general de la ONU señaló en su informe del mes de diciembre sobre la situación del país que se registraron menos atentados por parte de estos actores que en otros periodos, que su acción no supuso ningún

105. International Crisis Group, *The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy with Afghanistan*, Report N°337, 30 de enero de 2024.

106. Secretario General de la ONU, *Seventeenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat (S/2023/568)*, 12 de agosto de 2023.

107. Secretario General de la ONU, *Eighteenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat (S/2024/117)*, 31 de enero de 2024.

desafío de seguridad para las autoridades talibanes y que se registraron menos enfrentamientos armados que en periodos anteriores.¹⁰⁸ En paralelo a la violencia armada, el país continuó afectado por una importante crisis humanitaria agravada por los efectos del cambio climático. Según diferentes estudios, Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo frente a las consecuencias de la crisis climática debido al impacto de las sequías y la falta de capacidad de respuesta de las autoridades locales. Por otra parte, las mujeres y las niñas continuaron sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos como consecuencia de la legislación y las prácticas extremadamente discriminatorias impuestas por el Gobierno talibán.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

Continuó activo el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indias y la insurgencia naxalita, afectando a varios estados de la India, aunque se mantuvo en niveles de intensidad reducidos. De acuerdo con las cifras de mortalidad recopiladas por el South Asia Terrorism Portal (SATP), durante 2023 murieron 150 personas como consecuencia de violencia por este conflicto, una cifra similar a la de 2022, cuando fallecieron 135 personas. La mayor parte de las víctimas mortales como consecuencia del conflicto, 61 personas, eran civiles según los datos de SATP, superando las víctimas entre las fuerzas de seguridad (31) y los insurgentes (58). Nuevamente, el estado más afectado por la violencia fue Chhattisgarh, en el que se produjeron 88 de las muertes como consecuencia del conflicto, más de la mitad del total. Otros estados afectados fueron Jharkand,

Odisha o Maharashtra, entre otros. Los datos oficiales también constataron la reducción de la violencia y la mortalidad asociada que se había producido en los años previos. Nityanand Rai, ministro de Estado para Asuntos Internos de la India, señaló que en 2022 el número de incidentes violentos se había reducido un 36% con respecto al año 2018 y que las víctimas mortales entre las fuerzas de seguridad y civiles se había reducido en un 59% durante ese periodo. Además, también disminuyó el número de estados afectados por la violencia armada. No obstante, persistieron los enfrentamientos esporádicos, atentados, operaciones de las fuerzas de seguridad y también se produjeron denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos relativas a violaciones a los derechos de la población civil en el marco del conflicto armado. El episodio de violencia más grave tuvo lugar en abril, en Dantewada, uno de los distritos del estado de Chhattisgarh más afectados por la violencia. La detonación de un explosivo en una carretera al paso de un vehículo de las fuerzas de seguridad causó la muerte de 10 policías y un civil que participaban en una operación contra la insurgencia naxalita. Se trató del atentado más grave en el estado de los últimos años. Por otra parte, también se produjeron algunos incidentes de violencia durante el transcurso de las elecciones a las asambleas estatales, especialmente en el estado de Chhattisgarh.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF), The Resistance Front (TRF)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

108. Secretario General de la ONU, *La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Informe del Secretario General* (A/78/628-S/2023/94), 11 de diciembre de 2023.

Se redujo notablemente la violencia en el conflicto armado en Jammu y Cachemira con un descenso de las cifras de mortalidad asociadas a la violencia.

Según los datos recopilados por el South Asia Terrorism Portal, durante 2023 murieron 134 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos insurgentes cachemires que operan en la región. 87 de ellas eran insurgentes, 12 civiles, 33 miembros de las fuerzas de seguridad y dos personas sin especificar. Se consolida así el descenso en el número de víctimas mortales desde el año 2020, cuando se registraron 321 muertes, cifra que se ha reducido anualmente desde entonces. El centro de investigación ACLED registraba cifras similares y señalaba que en el mismo periodo se produjeron 155 muertes como consecuencia de la violencia armada. No obstante, y a pesar de la retórica gubernamental india que da prácticamente por finalizado el conflicto – señalando que desde la suspensión de la condición de estado a Jammu y Cachemira la reducción de la violencia ha sido constante y el control de las fuerzas de seguridad sobre los grupos armados casi total–, persistieron enfrentamientos durante todo el año. Si bien en los primeros meses, durante la estación invernal, apenas se registraron enfrentamientos como consecuencia de las condiciones climáticas en el estado, especialmente en las zonas montañosas, durante la segunda mitad del año se repitieron las incursiones armadas por parte de los grupos insurgentes y las operaciones de las fuerzas de seguridad. De hecho, en febrero trascendió a los medios de comunicación que el Gobierno estaba estudiando la retirada de las Fuerzas Armadas desplegadas en Jammu y Cachemira (130.000 soldados aproximadamente), manteniendo únicamente las desplegadas a lo largo de la Línea de Control, frontera de facto con Pakistán (en torno a 80.000 soldados). Las fuerzas militares retiradas serían sustituidas por la Fuerza de Policía de Reserva Central, cuerpo policial especializado en contrainsurgencia. No obstante, en mayo, y ante el aumento de las acciones por parte de los grupos armados, se descartó esta posibilidad. En abril se había producido el ataque más mortífero en la región desde 2021. Cinco soldados murieron como consecuencia de un atentado contra un camión militar en el sector de Rajouri. En los meses posteriores se repitieron los atentados por parte de los grupos insurgentes contra objetivos militares y policiales. Además, las fuerzas de seguridad interceptaron intentos de infiltración de los grupos armados desde Pakistán, especialmente en el distrito de Kupwara. En mayo, enfrentamientos en las inmediaciones de la Línea de Control entre las fuerzas de seguridad e integrantes del People's Anti-Fascist Front causaron la muerte de seis soldados indios y, en junio, cinco insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mientras trataban de infiltrarse en el distrito de Kupwara. En diciembre, tras un ataque contra dos vehículos del Ejército en el que murieron cinco soldados y resultaron heridos otros dos, se inició una operación de las fuerzas de seguridad en la que fueron detenidos ocho civiles. Tres de ellos murieron al día siguiente de su

detención, lo que llevó a denuncias de torturas y malos tratos por parte de familiares. Los grupos armados más activos fueron Lashkar-e-Tayyba, su filial Resistance Front y Hizbul Mujahideen. Decenas de integrantes de estos grupos fueron detenidos en operaciones de las fuerzas de seguridad durante todo el año. Por otra parte, el Tribunal Supremo indio mantuvo la decisión del Gobierno indio de retirar la condición de estado a Jammu y Cachemira.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ISIS-KP
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur. Tras el ascenso de los talibanes al Gobierno en Afganistán en 2021, el conflicto armado en Pakistán se intensificó.

El conflicto armado entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y la insurgencia talibán pakistaní del TTP se intensificó durante el año después de que en noviembre de 2022 el TTP pusiera fin al acuerdo de alto el fuego que habían alcanzado unos meses antes.

La violencia persistió en un contexto de intensa crisis política desde la destitución del primer ministro Imran Khan en 2022. Durante todo el año se produjeron enfrentamientos, ataques y operaciones de las fuerzas de seguridad, que se concentraron fundamentalmente

en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, la más afectada por la violencia de todo el país. Se consolidó así la tendencia de incremento de la violencia, acentuada en Pakistán desde el retorno al poder de los talibanes en Afganistán. El centro de investigación pakistaní Center for Research and Security Studies señaló que 2023 fue el año en que se registraron más muertes de miembros de las fuerzas de seguridad en la última década y apuntó también a un aumento de los atentados suicidas. Este centro registró una cifra total de fallecimientos como consecuencia de la violencia de 1.524 muertes en el conjunto del país, frente a 980 en 2022. La cifra total en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa fue de 979, mientras que el año anterior murieron 633 personas en esta provincia como consecuencia del conflicto armado. Por su parte, ACLED registró 2.125 muertes en 2023, de las que 1.262 se produjeron en Khyber Pakhtunkhwa. La insurgencia talibán no limitó sus acciones a esta provincia y también se registraron episodios de violencia por parte del TTP en otras zonas del país, como en Karachi, capital de la provincia de Sindh. Las acusaciones del Gobierno de Pakistán a las autoridades talibanes de Afganistán de dar apoyo al grupo armado talibán pakistaní TTP, unidas a la intensificación de la repatriación de decenas de miles de personas refugiadas y migrantes afganos residentes en Pakistán, llevaron a un incremento de la tensión entre ambos países.

Se intensificó el conflicto armado entre las fuerzas de seguridad de Pakistán y el grupo armado talibán TTP

El año empezó con uno de los atentados de mayor gravedad de 2023. Un ataque contra una mezquita en Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de más de 84 personas. El atentado tuvo lugar en una mezquita dentro de unas instalaciones policiales, lo que ocasionó que la mayoría de las personas fallecidas fueran policías. El atentado fue atribuido a una facción local del grupo armado TTP. En las semanas previas y posteriores se produjeron múltiples episodios de violencia en los que murieron decenas de insurgentes, policías y soldados. De acuerdo con el análisis del centro de investigación pakistaní Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, el TTP fue el grupo armado más activo en el país durante el año, responsable de la mayoría de atentados y ataques contra las fuerzas de seguridad pakistaníes. En abril, el Gobierno anunció una operación nacional con el objetivo de poner fin a los ataques de los grupos armados, según anunció el Comité de Seguridad Nacional. Sin embargo, en las semanas siguientes continuaron las acciones armadas del TTP y otros grupos activos en el país. En agosto, un atentado suicida contra un convoy militar en el distrito de Bannu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de nueve soldados. En diciembre también se produjo otro atentado de enorme gravedad, un ataque suicida en el distrito de Dera Ismail Khan contra instalaciones militares. Como consecuencia de las explosiones 23 soldados murieron y más de 30 resultaron heridos.

Por otra parte, también se produjeron ataques por parte de ISIS-KP, la filial de ISIS que opera en la región. Uno de los atentados más graves se produjo el 31 de julio, cuando una explosión suicida en el distrito de Bajaur, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, durante un acto político del partido islamista Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl causó la muerte a más de 63 personas e hirió a más de 100. En septiembre, un atentado en la provincia de Baluchistán durante un evento religioso en el distrito de Mastung causó la muerte de 55 personas.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, BLA, BNA, BLF y BLT; LeJ, TTP, ISIS-KP
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:
 Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchis a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en Baluchistán se recrudeció a lo largo del año y aumentaron tanto los eventos violentos, como el número de personas fallecidas como consecuencia de la violencia en esta provincia pakistaní. Baluchistán fue la segunda provincia más afectada por la violencia en Pakistán durante 2023, de acuerdo con los datos recopilados por el centro de investigación pakistaní Center for Research and Security Studies. Según esta organización, durante 2023 murieron 399 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre los grupos insurgentes que operan en este territorio y las fuerzas de seguridad, de los atentados que se produjeron a lo largo de todo el año y de las operaciones de las fuerzas de seguridad. De esta forma se consolidó la tendencia de aumento de la violencia que ya se había constatado el año anterior, influida por el contexto regional tras el ascenso talibán

al poder en Afganistán y la creciente oposición a las inversiones extranjeras, especialmente chinas, en la provincia. El centro de investigación ACLED cifró en 659 las muertes como consecuencia de la violencia armada en la provincia, una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2022. En paralelo a la acción de los grupos insurgentes nacionalistas baluchis, también se registraron acciones armadas de grupos talibanes y de ISIS-KP, responsable de un atentado durante un evento religioso en el distrito de Mastung en el que murieron 55 personas en septiembre. El grupo armado baluchi más activo en el conflicto fue el BLA, como sucediera en años anteriores, que protagonizó diferentes acciones armadas en contra de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Entre los atentados más graves, cabe destacar la explosión de una bomba que causó la muerte de cuatro policías en la ciudad de Quetta en marzo e hirió a otras nueve personas. Horas antes un coche de policía también había sido atacado y pocas horas después se produjo otro atentado contra una patrulla de policía también en Quetta, sin que se produjeran víctimas en estos otros dos atentados. El ataque de mayor gravedad del año se produjo en noviembre en el distrito de Gwadar. 14 soldados murieron como consecuencia de una emboscada contra dos vehículos de las fuerzas de seguridad en un ataque atribuido al grupo armado BLA. Este distrito se vio afectado por diferentes episodios de violencia a lo largo del año. En paralelo a los atentados y enfrentamientos armados, cabe señalar que persistieron las denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil relativas a graves violaciones de derechos humanos vinculadas al conflicto armado, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafa, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones que luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbrano Kato.

Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

El Gobierno declaró que **buena parte de las organizaciones armadas que operan en varias regiones de Mindanao se habían debilitado claramente en 2023, pero en todo el año siguieron registrándose numerosos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y dichas organizaciones, así como episodios de violencia entre los diferentes grupos y también ataques contra población civil.** Aunque no existen cifras oficiales sobre la mortalidad asociada al conflicto armado, el centro de investigación ACLED señaló que se registró la muerte de 230 personas en la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM), 63 en Mindanao Central (que incluye las provincias de Cotabato, Cotabato Sur, Sultan Kudarat, Sarangani y General Santos) y 29 en la región de Zamboanga, que incluye el archipiélago de Sulu (una de las zonas históricamente más afectadas por la violencia). A finales de julio, **el jefe de las Fuerzas Armadas declaró que el número de combatientes de signo islamista se había reducido drásticamente desde el año 2017 y que se mostraba optimista respecto de la posibilidad de haber derrotado militarmente a los grupos armados vinculados con Estado Islámico.** A modo de ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas señaló que hacía dos años que no se registraba ningún episodio de secuestro, que se había reducido el número de combatientes extranjeros (que algunas fuentes de inteligencia militar llegaron a cifrar en entre 100 y 200 en 2023) y que se había incrementado exponencialmente el número de combatientes que se han entregado, rendido o acogido a programas de desarme y desmovilización. En este sentido, solamente en Mindanao Central, en 2023 se rindieron o entregaron 914 miembros de Dawlah Islamiya, BIFF y NPA. En la misma línea, a finales de julio, el presidente Ferdinand Marcos ordenó el levantamiento del estado de emergencia que había sido proclamado en septiembre de 2016 por parte del anterior presidente, Rodrigo Duterte, para hacer frente a los altos niveles de violencia en la región. Posteriormente, en mayo de 2017, el Gobierno había proclamado la ley marcial en Mindanao para hacer frente al asedio durante meses por parte de varios grupos armados de signo islamista de la ciudad de Marawi, algunos de cuyos barrios quedaron totalmente destruidos. La ley marcial se retiró en diciembre de 2019, después de que

el Gobierno hubiera dado por neutralizados a varios de dichos grupos. La administración de Marcos levantó el estado de emergencia alegando que las operaciones de las fuerzas de seguridad del estado habían contribuido a restaurar la paz y el orden en las regiones de Mindanao más afectadas por el conflicto.

De entre los grupos activos en las últimas décadas en Mindanao, **uno de los más afectados por las operaciones de contrainsurgencia durante 2023 fue Abu Sayyaf, hasta el punto de que, en septiembre, el gobernador de la provincia de Sulu (uno de los bastiones principales del grupo) declaró a la provincia libre de la presencia e influencia de Abu Sayyaf.** Tal declaración del gobernador fue secundada por el Grupo de Trabajo Provincial de Sulu para poner fin a los conflictos armados locales (PTF-ELAC, por sus siglas en inglés) y por las Fuerzas Armadas en la región, que señalaron que 966 combatientes de Abu Sayyaf se habían rendido voluntariamente (entregando 559 armas de fuego) y que se habían “liberado” 52 municipios afectados por la actividad del grupo. Además, los principales líderes del grupo murieron durante el año. A principios de diciembre, Mudzrimar Sawadjaan, alias Mundi, falleció en un enfrentamiento en la región de Tipo-Tipo, provincia de Basilan. Sawadjaan era el líder de una de las facciones de Abu Sayyaf que operaba en la provincia de Sulu, y el Gobierno consideraba que era la persona que había introducido el uso de atentados suicidas y que había orquestado algunos de los ataques más mortíferos del grupo en los últimos años, como el atentado con bomba en la catedral de Jolo en 2019 –en el que 23 personas murieron y varios centenares resultaron heridas- o los dos atentados con bomba de 2020 en el centro de Jolo –en los que 14 personas murieron y más de 70 resultaron heridas. Según fuentes militares, en los últimos meses Sawadjaan había estado protegido por combatientes del BIFF en la provincia de Maguindanao. Anteriormente, a finales de mayo, las Fuerzas Armadas declararon que había muerto Radullan Sahiron, uno de los fundadores del grupo y el líder más antiguo de Abu Sayyaf en activo. De hecho, Sahiron asumió el liderazgo del grupo en 2006, tras la muerte de Khadafi Janjalani, que a su vez había sucedido a su hermano y fundador del grupo, Abdurajak Abubakar Janjalani. Sahiron, que era una de las personas más buscadas por el Gobierno de EEUU desde principios de los años noventa, lideraba una de las facciones de Abu Sayyaf que no había jurado lealtad a Estado Islámico, como sí habían hecho otros grupos armados en la región. Las Fuerzas Armadas reconocieron no disponer del cadáver de Sahiron, aunque señalaron con un 90% de confianza que había muerto en la ciudad sureña de Patikul. Finalmente, cabe destacar que a mediados de junio Nurudin Muddalan murió en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Ungkaya Pukan, provincia de Basilan. Muddalan se convirtió en el líder de una de las facciones de Abu Sayyaf en Basilan tras la muerte en 2020 del líder histórico del grupo, Furuji Indama, y había participado en algunos episodios de violencia importantes, como una emboscada en la ciudad de

Tipo-Tipo en la que 15 soldados murieron y otros 13 resultaron heridos.

En cuanto al BIFF, fuentes militares señalaron durante el año que el número de combatientes del grupo podría haberse reducido en los últimos años de los entre 300 y 400 a menos de 100, y que actualmente el grupo se organiza en tres facciones principales, lideradas respectivamente por Ismael Abubakar (Imam Bongos), Ustadz Karialan (Imam Minimbang) y Esmael Abdulmalik, alias Abu Toraiife. Según algunos medios de comunicación, en agosto Abu Toraiife fue proclamado líder de Estado Islámico en Filipinas y emir del Sudeste asiático, aunque no estaba claro si había obtenido el apoyo de todos los grupos y facciones que en los últimos años han jurado lealtad a Estado Islámico. La proclamación de Abu Toraiife se produjo tras la muerte a mediados de junio de Fahaudin Hadji Satar (alias Abu Zacharia) en un enfrentamiento armado en Marawi (provincia de Lanao del Sur). A su vez, en 2019 Zacharia había sucedido como líder y emir de Estado Islámico a Owaida Marohombsar (alias Abu Dar), líder del Grupo Maute (o Daulah Islamiyah). Respecto de este último grupo, uno de los más activos en Mindanao en los últimos años (especialmente en Lanao del Sur), participó en un menor número de episodios de violencia que en años anteriores, pero siguió suponiendo, según el Gobierno, una amenaza a la seguridad en determinadas partes de Mindanao. A principios de diciembre, por ejemplo, Manila le acusó de haber perpetrado un atentado durante una misa católica celebrada en la Mindanao State University, en la que cuatro personas murieron y otras 45 resultaron heridas. El presidente Marcos señaló que el atentado había sido perpetrado por terroristas extranjeros, mientras que las Fuerzas Armadas señalaron que podría ser un acto de venganza por el operativo militar que pocos días antes había provocado la muerte de 11 combatientes en la ciudad de Datu Hoffer Ampatuan. Tras el atentado en la universidad, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una ofensiva aérea y terrestre en las provincias de Maguindanao y Cotabato (especialmente en la zona de Ligawasan) en las que como mínimo nueve combatientes murieron y otros muchos resultaron heridos. En paralelo, en las mismas fechas, el grupo Maute llevó a cabo varios ataques contra miembros del MILF en la mencionada región de Ligawasan en los que murieron 11 miembros del MILF. Previamente, en el mes de septiembre, ya se habían registrado enfrentamientos entre el MILF y el Grupo Maute en la ciudad de Datu Hoffer Ampatuan. Por otra parte, durante todo el año se registraron enfrentamientos entre dos comandos base del MILF (el 105 y el 118), provocando el desplazamiento de miles de personas y la muerte de varios combatientes (en diciembre, por ejemplo, nueve militantes de ambos grupos murieron tras varios días de enfrentamientos en la localidad de Mamasapano). También se produjeron enfrentamientos esporádicos entre combatientes del comando 118 del MILF y del BIFF, como los que se produjeron en noviembre en la provincia de Maguindanao del Sur, que provocaron el desplazamiento de cientos de personas

en la región. Finalmente, cabe destacar que también se produjeron algunos enfrentamientos entre miembros de distintas facciones del MNLF, como el que en el mes de noviembre provocó la muerte de dos ex combatientes en la provincia de Cotobato Norte.

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inició la lucha armada en 1969 y alcanzó su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas (CCP) y al Frente Democrático Nacional (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

A pesar de que en noviembre el Gobierno y el NDF se comprometieron a reanudar las negociaciones de paz, interrumpidas desde 2017, a lo largo de todo el año se produjeron numerosos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado y combatientes del NPA. Según estimaciones de centros de investigación, se registró la muerte de como mínimo 170 personas, aunque la cifra real podría ser muy superior. Se produjeron enfrentamientos en las tres principales regiones del país (Luzón, en el norte; Visayas, en el centro; y Mindanao, en el sur), especialmente en las provincias de Negros Occidental, Samar y las Islas Panay (Visayas), Abra, Mindoro, Quezón, Batangas y Bicol (Luzón) y Caraga, Sultan Kudarat, Surigao y Bukidnon (Mindanao). Los meses en los que se registró una mayor actividad armada, con más de una veintena de víctimas mortales, fueron abril, mayo, septiembre y diciembre. **El 31 de diciembre, las Fuerzas Armadas declararon que en 2023 se habían logrado desmantelar ocho frentes del NPA y debilitar otros 14, de modo que a principios de 2024 quedaban solamente 11 frentes debilitados del NPA (especialmente en Visayas y Mindanao), con una membresía estimada inferior a los 1.500 combatientes –la más baja desde la creación del grupo armado en 1969.** Según las Fuerzas Armadas, en 2023 se incautaron o entregaron 1.751 armas de fuego y se

neutralizó a 1.399 miembros del NPA, entre ellos a 67 cuadros significativos de la organización. En este sentido, cabe destacar que en abril el NPA reconoció finalmente la muerte de Benito Tiamzon y Wilma Austria, dos de los líderes históricos más destacados del movimiento armado en las últimas décadas. Sin embargo, el Partido Comunista de Filipinas (CPP) señaló que estos no habían muerto en un intercambio de fuego con las Fuerzas Armadas en agosto de 2022 en Visayas, sino que habían sido capturados, torturados y posteriormente puestos en un bote que fue detonado a distancia. La muerte de ambos dirigentes se produjo cuatro meses antes que la del fundador del Partido Comunista y el NPA, Jose María Sison. Tras ambos sucesos, las Fuerzas Armadas señalaron que el debilitamiento del grupo en los últimos años estaba siendo muy acelerado, y que el NPA se hallaba en una fase de agonía y descomposición. Durante el año varios cargos gubernamentales y militares hicieron declaraciones sobre la capacidad del Estado de imponerse militarmente al NPA. En julio, por ejemplo, **el presidente Ferdinand Marcos declaró que a finales de año se habrían desmantelado todos los frentes operativos del NPA, y trasladó su convicción de que antes de finalizar el 2023 la única provincia en la que el NPA estaba activo (Samar Norte) estaría libre de la presencia e influencia del movimiento comunista.** A finales de año, un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que más de 3.400 miembros del NPA se habían entregado a las autoridades gubernamentales solamente entre enero y septiembre de 2023, y destacó el buen funcionamiento de los programas gubernamentales de desmovilización y reintegración de combatientes. En este sentido, el Gobierno declaró que tras la instauración de una nueva política de contrainsurgencia y gestión del conflicto en 2018 se habían desmantelado la práctica totalidad de los 89 frentes que entonces tenía el movimiento en todo el país y se había neutralizado a 8.654 miembros del NPA –incluyendo a 314 líderes del grupo–, consiguiendo así eliminar la presencia e influencia del grupo en más de 4.500 municipios en todo el país.

Por su parte, en diciembre, el CCP decretó un alto de fuego de dos días (25 y 26 de diciembre) con motivo de las fiestas navideñas y del 55º aniversario de la fundación del partido. El Gobierno calificó de vacío e innecesario tal anuncio de alto el fuego y criticó con contundencia un comunicado emitido por el Partido Comunista en el que declaraba la primacía de la lucha armada para lograr transformaciones, ordenaba al NPA fortalecerse e incrementar su lucha contra el Estado filipino y señalaba que las conversaciones de paz eran un campo de batalla adicional para el avance de sus objetivos. Sin embargo, el aspecto del comunicado que generó mayor controversia fue el anuncio por parte del Partido Comunista del llamado Tercer Movimiento de Rectificación –después del de los años sesenta, que culminó con la refundación del Partido Comunista en 1968, y del de principios de los años noventa. Según el Partido Comunista, el Tercer Movimiento de Rectificación tiene el objetivo de superar los errores,

debilidades y deficiencias en el campo ideológico, político y organizativo que el partido había identificado en los últimos años (especialmente desde 2016), y que habrían dificultado el crecimiento del partido y el avance de la revolución.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP); PDF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados. En febrero de 2021 la cúpula militar del país llevó a cabo un golpe de Estado que puso fin a la transición a la democracia en el país y dio lugar a una intensificación del conflicto armado y a la aparición de las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), organización que agrupa a decenas de grupos armados opuestos al régimen militar, mientras persistían los enfrentamientos con las insurgencias étnicas.

El conflicto armado en Myanmar se mantuvo en niveles elevados de violencia durante todo el año y en el mes de octubre tuvo lugar una grave escalada de la violencia. Durante todo el año persistieron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad birmanas y los diferentes grupos armados étnicos activos, así como las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), surgidas tras el golpe de Estado militar de 2021. De acuerdo con las cifras recopiladas por el centro de investigación ACLED, durante 2023 murieron 15.625 personas

como consecuencia del conflicto armado en el país, una cifra inferior a la registrada en 2022, cuando el número de personas fallecidas por la violencia fue de 19.324. Según los datos de ACLED durante la segunda mitad del año se registró un aumento considerable del número de enfrentamientos armados. Por su parte la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) señaló que un tercio de la población de Myanmar (18,6 millones de personas, de las que 6 millones eran menores y el 52% mujeres y niñas) requería de asistencia humanitaria, lo que representaba un millón de personas más que en 2022 y 19 veces más el número de personas que requería esta asistencia antes del golpe de Estado militar de 2021. Además, casi dos millones de personas estaban en situación de desplazamiento interno, según cifras de ACNUR, medio millón más que el año anterior. La crisis humanitaria como consecuencia del conflicto armado se vio agravada también por los efectos del cambio climático, en uno de los países del mundo con más riesgo de sufrir eventos climáticos extremos, según datos de años anteriores.¹⁰⁹

Desde principios de año se produjeron ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas en diversos estados que provocaron centenares de muertes y miles de desplazados forzados. No obstante, **el conflicto armado sufrió un punto de inflexión cuando, en octubre, los grupos integrantes de la Alianza de los Tres Hermanos –conformada por el MNDAA (grupo armado kokang), el TNLA (grupo armado ta'ang) y el AA (grupo armado rakáin)–, dieron comienzo a la Operación 1027 (en referencia a su inicio el día 27 de octubre) en el norte del estado Shan.** Esta operación representó la ofensiva de mayor envergadura contra las fuerzas de seguridad de Myanmar tras el golpe de Estado de 2021 y supuso para los grupos insurgentes la captura de varias ciudades y la interrupción de la circulación por diferentes rutas que comunican el país con China, con un importante impacto comercial. El objetivo inicial de esta ofensiva armada, que lideró el MNDAA, era recuperar el control de la Zona Autónoma de Kokang y Lakkain, que el grupo armado había ostentado hasta 2009. Se trata de una zona crucial para el negocio del juego ilegal y numerosas actividades ilícitas vinculadas a estafas por internet controladas por grupos criminales. Miles de miembros de grupos armados participaron en la operación, con el apoyo de varios grupos vinculados a las PDF. Los ataques se llevaron a cabo simultáneamente en varios puntos del estado, sin que las fuerzas de seguridad tuvieran la capacidad de respuesta suficiente para hacer frente a la ofensiva. Aunque se produjeron posteriormente ataques aéreos en respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, los grupos insurgentes lograron capturar numerosos emplazamientos estratégicos. La situación se vio agravada por el hecho de que, grupos armados de otras partes del país aprovecharon la debilidad militar del régimen para iniciar operaciones en otros estados,

109. Myanmar fue el segundo país del mundo con mayor riesgo climático global durante el periodo 2000-2019 según el Índice de Riesgo Climático Global 2021.

como ataques del KIO en la región Sagaing, ataques del AA en el estado Kayah e incluso ataques del AA en el estado Rakhine, lo que provocó la ruptura del alto el fuego informal que se había establecido desde 2022. La creciente violencia provocó el desplazamiento forzado de más de 300.000 personas, lo que empeoró la situación humanitaria en el país. Tras el inicio de la violencia, China fomentó una negociación entre las partes con el objetivo de lograr un alto el fuego que se acordó inicialmente el 11 de diciembre.¹¹⁰ Sin embargo, este acuerdo no logró poner fin a los enfrentamientos. En los meses previos se habían registrado enfrentamientos en los estados del norte del país, especialmente en Kachin, Chin, Shan así como en la región Sagaing, y en el este del país, en el estado Kayin. Las Fuerzas Armadas bombardearon posiciones de los grupos armados y estos respondieron con emboscadas, ataques y atentados contra infraestructuras. Especialmente grave fue el ataque aéreo que tuvo lugar en abril contra la población de Kanbalu, en la región Sagaing, a consecuencia del cual murieron al menos 170 civiles. El ataque se produjo durante la inauguración de unas oficinas establecidas por el Gobierno de Unidad Nacional, conformado tras el golpe de Estado en oposición al régimen militar. En julio, el KIO lanzó una ofensiva en el estado Shan, en las primeras acciones armadas contra las fuerzas de seguridad en varios meses y dando lugar a una escalada en los enfrentamientos que se alargó en los meses posteriores cuando también el TNLA llevó a cabo acciones armadas después de varios meses inactivo militarmente. En agosto, el KNU señaló que el Acuerdo de Alto el Fuego de Alcance Nacional (NCA) había dejado de tener efecto, aunque siete de los 10 grupos que se adhirieron seguían manteniendo contacto con el Gobierno en el marco del NCA. Por otra parte, persistía la situación de persecución a la oposición política por parte del régimen militar. Según los datos de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), desde el golpe de Estado de 2021, 25.690 personas habían resultado detenidas, de las cuales 19.891 seguían bajo detención al finalizar 2023. Otros 4.275 activistas políticos y defensores de los derechos humanos habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad.

El conflicto armado en Myanmar sufrió una grave escalada de la violencia en octubre, con la operación conjunta de varios grupos armados en la mayor ofensiva contra las FFAA desde el golpe de Estado de 2021

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

En línea con la reducción clara y sostenida de la violencia en el sur del país, en 2023 el número de episodios de violencia, víctimas mortales y personas heridas a causa del conflicto armado se redujeron sustancialmente respecto del año anterior. Según el centro de investigación ACLED, más de 40 personas murieron en

todo el año. Algunos análisis sostienen que tal reducción está más relacionada con los compromisos asumidos por la insurgencia en el marco del proceso negociador con el Gobierno que con un debilitamiento militar del BRN, el principal grupo armado en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana. No existe constancia de que otras organizaciones armadas protagonizaran episodios de violencia, al contrario de lo que sucedió en 2022, cuando el grupo armado PULO llevó a cabo algunas acciones. A pesar de la marcada reducción en las cifras de mortalidad, en varios momentos del año el BRN demostró

una notable capacidad operativa, llevando a cabo ataques simultáneos y coordinados, operativos con decenas de insurgentes y armamento pesado contra puestos policiales y militares o acciones contra infraestructuras importantes como servicios ferroviarios o torres de electricidad y telefonía móvil. A mediados de abril, por ejemplo, el BRN llevó a cabo ataques coordinados en seis localidades de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. Más tarde, el 11 de mayo, perpetró ataques simultáneos en 30 municipios de dichas provincias, y en octubre orquestó tres ataques coordinados con explosivos y un asalto contra un puesto de control militar. Otras de las acciones de mayor repercusión durante el año fueron el ataque en septiembre contra un convoy policial en el que seis personas murieron, o el estallido de un artefacto explosivo dos días antes de que se celebraran las elecciones nacionales, en mayo. Los meses de mayor intensidad armada fueron abril y mayo,

110. Véase el resumen sobre Myanmar en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

poco después de que el BRN comunicara al Gobierno que suspendía temporalmente su participación en las negociaciones hasta que entrara en funciones un nuevo Gobierno surgido de las elecciones en el mes de mayo. El líder del partido vencedor en dichos comicios (Move Forward) había declarado que, si conseguía formar gobierno, el proceso de negociación estaría liderado por civiles (los últimos tres jefes del panel gubernamental han sido militares), que tendría más en consideración los derechos humanos en la región, que impulsaría un proceso de paz más inclusivo y participativo y que priorizaría el principio de coexistencia en una sociedad multicultural. Sin embargo, dicho partido no logró una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, de modo que, tras un impasse de más de tres meses, el líder del partido opositor Pheu Thai (segundo en los comicios de mayo), fue investido primer ministro después de lograr forjar una coalición de 11 partidos. Cabe señalar que el mismo día que Srettha Thavisin fue investido primer ministro, regresó a Tailandia el ex primer ministro y fundador y líder de facto de Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, tras permanecer 15 años en el exilio para evadir varios cargos pendientes con la justicia. Thaksin fue depuesto en un golpe de estado en 2006, y fue precisamente bajo su administración cuando el conflicto en las provincias sureñas de mayoría musulmana escaló hasta niveles sin precedentes en las décadas anteriores.

Aunque la violencia se redujo sustancialmente en 2023, a finales de agosto el Gobierno prorrogó (por 73ª vez) el decreto de emergencia que rige en el sur del país desde julio de 2005. No obstante, en octubre comunicó que dicha medida dejaba de ser vigente en tres distritos (uno de cada una de las tres provincias). En los últimos años, el estado de emergencia ha dejado de aplicarse en diez distritos. En esta línea, organizaciones locales e internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional llevan años criticando el estado de emergencia –que, entre otras cuestiones, concede poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad del estado, les otorga inmunidad en sus acciones o permite la detención sin cargos de personas durante hasta 30 días– por considerar que alienta la impunidad y los abusos de las Fuerzas Armadas y erosiona la confianza de la población en las mismas y en el Estado en su conjunto. Tales organizaciones también piden la derogación de otras dos leyes que rigen en el sur del país (la Ley de Seguridad Interna y la Ley Marcial) y que conceden poderes y competencias adicionales a las fuerzas de seguridad del estado. En este sentido, a mediados de año el Gobierno declaró su intención de reducir progresivamente el número de tropas y la cobertura territorial del estado de emergencia hasta el año 2027. A finales de año, el nuevo Gobierno designó a un nuevo panel negociador y declaró que sus prioridades serían la reducción de la violencia (y en especial el fin de las hostilidades durante el mes de Ramadán, una iniciativa que ya se llevó a cabo en 2022) y la mayor inclusividad y participación en el proceso. Cabe recordar que el facilitador malasio

del proceso de negociación reveló que el BRN habría aceptado la participación en las conversaciones de paz de otros grupos armados que operan en el sur del país, aunque sin ofrecer nombres ni fechas al respecto. Finalmente, cabe destacar que, en junio, un grupo de estudiantes de la universidad Prince of Songkla organizó un referéndum sobre la independencia de la región de Patani. El Gobierno declaró que era ilegal, mientras que las Fuerzas Armadas lo consideraron una amenaza a la integridad territorial del país.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Rusia - Ucrania	
Inicio:	2022
Tipología:	Gobierno, Territorio Internacional
Actores:	Rusia, Grupo Wagner, milicias del Donbás, Ucrania
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Rusia bajo liderazgo de Vladimir Putin inició en febrero de 2022 una invasión militar contra Ucrania, que resultó en la ocupación militar de áreas del sur y este del país, y afectó a otras zonas también con bombardeos y ataques, y generó graves impactos en seguridad humana, como desplazamiento forzado masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violencia sexual, inseguridad alimentaria y energética, entre otros. La invasión rusa de Ucrania estuvo precedida de ciclos anteriores de conflicto y de diálogo fallidos: protestas antigubernamentales entre finales de 2013 y principios de 2014 que llevaron a la caída del gobierno del presidente Víctor Yanukóvich; anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014 y guerra en el este de Ucrania desde abril de 2014 entre milicias locales apoyadas por Rusia y el Ejército ucraniano. La invasión de 2022 y guerra interestatal transcurrió en torno a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, puesta en cuestión por Rusia con una invasión, contraria a derecho internacional. El antagonismo entre EEUU, la UE y la OTAN, por un lado, y Rusia, por otro, y la fallida arquitectura de seguridad continental influían también sobre el contexto del conflicto y las perspectivas de resolución. Entre finales de febrero y abril de 2022 Rusia y Ucrania mantuvieron negociaciones político-militares, que resultaron fallidas. La invasión tuvo repercusiones globales multidimensionales, incluyendo entre otros en inseguridad alimentaria de países de la región MENA y de África, así como en un orden internacional tensionado y mayor militarización del continente europeo.

La guerra entre Rusia y Ucrania, causada por la invasión rusa de 2022 contra el país vecino, generó en 2023 niveles elevados de víctimas mortales y graves impactos en seguridad humana y medioambiental, mientras las líneas del frente militar no registraron cambios de gran escala. Ucrania y Rusia no proporcionaron balances oficiales de víctimas militares. Según datos de ACNUDH, en 2023 murieron al menos 1.931 civiles y otros 6.508 resultaron heridos (10.191 fallecidos y

19.139 heridos desde el inicio de la invasión en 2022, un 6% de ellos menores). La propia ACNUDH señaló que las cifras reales víctimas serían considerablemente más elevadas. **Las armas explosivas de amplia área de impacto fueron causantes del 84% de las víctimas mortales civiles** y del 95% de los civiles heridos. Informaciones de prensa ofrecieron en agosto un balance –citando como fuente a funcionarios de EEUU– de medio millón de militares víctimas mortales o heridos entre ambos bandos desde 2022.¹¹¹ Por su parte, según la base de datos de ACLED, en 2023 hubo al menos 30.908 víctimas mortales (33.608 en 2022) y se produjeron 47.784 eventos de batallas, violencia contra civiles, explosiones y violencia remota (37.909 en 2022). El balance humanitario sobre 2023 de OCHA incluía 3,7 millones de personas desplazadas internas (según datos hasta septiembre de 2023), 14,6 millones de personas en situación de necesidad de asistencia humanitaria para 2024, 719.000 personas sin acceso a alojamiento seguro o en condiciones adecuadas, un 13% de instalaciones educativas destruida o dañada en 2023 y 256 ataques a instalaciones sanitarias ese año, entre otros impactos.¹¹² Además, 6 millones de personas ucranianas eran refugiadas en Europa y otras 475.600 fuera de Europa, según datos de ACNUR de principios de 2024.

Se mantuvieron las hostilidades armadas en torno a las líneas del frente militar. Una de las áreas más afectadas por la violencia en los primeros meses del año fue en torno a Bajmut (región de Donetsk). En enero Rusia tomó Soledar (norte de Bajmut). **En mayo, tras diez meses de enfrentamientos, Rusia anunció la toma de control de Bajmut.** Ucrania había ordenado a sus fuerzas confrontar a las fuerzas rusas en ese frente hasta el final. Bajmut quedó en gran parte destruida y –según el CICR– con apenas unos 10.000 habitantes de los 70.000 previos a la guerra. Aun sin balances oficiales de víctimas mortales, análisis estimaron en varias decenas de miles de víctimas mortales militares entre ambos bandos en Bajmut. El propio líder del Grupo Wagner admitió 20.000 bajas propias.

Ucrania lanzó en junio una contraofensiva militar en el sur y este que no resultó en cambios significativos en cuanto a control de territorio, ante amplias fortificaciones de defensa y áreas minadas por parte de Rusia. En torno al inicio de la contraofensiva ucraniana, el 6 de junio, se produjo una explosión en la presa de Kajovka (en una zona de la región de Jersón –sur de Ucrania– ocupada por Rusia), que la destruyó y causó una catástrofe ecológica y humanitaria. La voladura causó la inundación de

La invasión y guerra en Ucrania causó graves impactos en su segundo año y se preveía que 14,6 millones de personas en Ucrania requieran asistencia humanitaria en 2024

La contraofensiva militar de Ucrania de 2023 no resultó en cambios significativos en cuanto a control de territorio, mientras la guerra continuó causando graves impactos

amplias áreas, provocó la contaminación del agua con productos químicos, dañó tierras agrícolas, fauna y flora, obligó a evacuaciones de población, destruyó infraestructuras y viviendas y desplazó minas terrestres.

Además, disminuyó el embalse de Kajovka –uno de los mayores de Europa y fuente de agua potable para 700.000 personas–, dejando sin acceso a agua a numerosas personas. También generó riesgos añadidos en la central nuclear de Zaporíyia. Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de la voladura. Análisis periodísticos señalaron evidencias que apuntaban a la autoría rusa.¹¹³ El Gobierno de Ucrania, la ONU y diversas ONG se involucraron en la respuesta humanitaria en las áreas bajo control de Ucrania. Rusia denegó el acceso a los actores humanitarios a las áreas bajo ocupación afectadas por las inundaciones.

En paralelo a la contraofensiva militar ucraniana, Rusia continuó con sus ofensivas. **En los últimos meses del año Rusia intensificó sus ataques en el este,** en torno a la ciudad de Avdiivka (región de Donetsk), así como al este de Kupiansk (región de Járkov) y en áreas en torno a Bajmut, entre otras. Rusia tomó la localidad de Marinka (Donetsk) en diciembre. Ucrania anunció en noviembre haber establecido varios puntos de desembarco en la margen izquierda del río Dniéper –áreas bajo ocupación de Rusia. Por otra parte, **a lo largo del año Rusia llevó a cabo bombardeos contra diversas áreas de Ucrania, que causaron numerosas víctimas mortales y heridos civiles y militares y daños en infraestructura, incluyendo civil.**

Entre otros bombardeos rusos, un ataque en enero contra un edificio residencial en Dnipró causó 45 víctimas mortales civiles –seis de ellas menores– y 79 heridos. Un ataque con misil el 27 de junio en un restaurante concurrido de Kramatorsk (Donetsk) mató a 11 civiles –incluyendo tres menores– e hirió a otros 61 –incluyendo la escritora ucraniana Victoria Amelina. Otras siete personas murieron –incluyendo un menor– y 110 fueron heridos –12 menores– en otro ataque con misil en Chernihiv (norte), que impactó en una plaza central, universidad y teatro de la localidad en una festividad religiosa

el 19 de agosto. Un ataque con misil el 5 de octubre en una cafetería Groza (Járkov) mató a 59 personas, en una de las matanzas más graves. En noviembre y diciembre Rusia llevó a cabo varias oleadas de ataques con drones y misiles contra la capital ucraniana y diversas ciudades, con víctimas mortales y heridos civiles y daños en infraestructura. 40 civiles murieron y más de 130 resultaron heridos en ataques aéreos de gran escala el 29 de diciembre en diversas ciudades. Otra decena murió y en torno a 40 fueron heridos en

111. VVAA, “Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say”, *The New York Times*, 18 de agosto de 2023.

112. OCHA, *Ukraine: Humanitarian Situation Snapshot (December 2023)*, OCHA, 5 de febrero de 2024.

113. VVAA, “Why the Evidence Suggests Russia Blew Up the Kakhovka Dam”, *The New York Times*, 16 de junio de 2023.

nuevos ataques entre el 30 y 31 de diciembre, que impactaron mayormente en la ciudad de Járkov (este) y en localidades en las líneas del frente.

Por otra parte, **Moscú suspendió en julio su participación en el acuerdo conocido como la Iniciativa sobre la exportación de cereales por el Mar Negro**, alcanzado en 2022 y renovado en diversas ocasiones, incluyendo marzo y mayo de 2023.¹¹⁴ Tras la suspensión, Rusia llevó a cabo ataques aéreos contra infraestructura portuaria y de almacenamiento de grano de la costa del Mar Negro –incluyendo en Odesa–, y del río Danubio. Por su parte, **Ucrania llevó a cabo ataques contra la flota militar rusa del Mar Negro e infraestructura vinculada en Crimea, intensificados en la segunda mitad del año, y que forzaron la retirada de la mayor parte de la flota rusa.** Entre las principales ofensivas, Ucrania atacó el cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol el 22 de septiembre. Con la retirada de la mayoría de la flota, Ucrania retomó parcialmente la exportación de grano por vía marítima. No obstante, en noviembre Rusia atacó con misil un barco civil en el puerto de Odesa.

Por su parte, **Ucrania incrementó en 2023 los ataques contra territorio de Rusia.** Ucrania adoptó la práctica de no reivindicar de manera explícita la autoría de esos ataques. Según datos de ACLED, entre enero y diciembre se produjeron 1.172 ataques con drones en territorio de Rusia. También se incrementó el número de drones interceptados. Se registraron también ataques contra oficinas de reclutamiento y contra infraestructura ferroviaria. Entre otros ataques, 21 personas murieron –incluyendo tres menores– y 110 resultaron heridas en ataques aéreos contra Bélgorod el 30 de diciembre (localidad rusa cercana a la frontera con Ucrania), que incluyeron –según Reuters– supuestos ataques con bombas de racimo. Estas ofensivas estuvieron precedidas de una treintena de ataques con drones contra localidades en las regiones de Moscú, Briansk, Oriol y Kursk, que fueron interceptados, según las autoridades rusas.

En otros desarrollos durante el año, **el Grupo Wagner, liderado por Yevgueni Prigozhin, protagonizó un levantamiento armado fallido en Rusia el 23-24 de junio**, precedido de meses de tensión entre el líder del grupo y las autoridades militares rusas. Combatientes de la organización armada tomaron la ciudad de Rostov del Don y avanzaron por varias regiones hacia la capital rusa. El motín, calificado de traición por Putin, fue desmantelado y Prigozhin marchó a Belarús. El líder del Grupo Wagner murió en agosto al estrellarse el avión en que viajaba, en el que fallecieron diez personas. La muerte de Prigozhin fue atribuida al régimen ruso en numerosos análisis.

Rusia suspendió su participación en el acuerdo de exportaciones de cereales y atacó infraestructura portuaria y de almacenamiento de grano

Durante el año, **las partes en conflicto recibieron apoyo militar exterior e intensificaron su producción interna de armamento.** Según los datos de finales de octubre de 2023 del Kiel Institute, de octubre, EEUU era el principal proveedor de armamento, equipamiento militar y apoyo financiero vinculado a objetivos militares (46.300 millones de dólares comprometidos), seguido de Alemania (18.100 millones), Reino Unido (6.900 millones). En 2023 numerosos países occidentales aceptaron proporcionar tanques de combate, incluyendo tanques Leopard 2 y, por parte de EEUU, M1 Abrams. Washington aprobó en julio y envió ese mismo mes a Ucrania bombas de racimo, prohibidas por la Convención de Municiones de Racimo –ratificada por 111 países, en vigor desde 2010 y de la que no son parte EEUU, Ucrania ni Rusia. ONG como Amnistía Internacional criticaron la decisión, por los impactos indiscriminados y de larga duración de las bombas de racimo sobre la población civil. Por otra parte, Washington autorizó el envío por parte de Países Bajos y Dinamarca a Ucrania de aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, sujeto al entrenamiento previo de los pilotos, lo que situaba la entrega para 2024. Por otra parte, Rusia intensificó sus vínculos en el ámbito militar con Irán y Corea del Norte. EEUU acusó a ambos países de proveer armamento a Rusia. La escalada en provisión armamentística contrastó con las limitadas iniciativas de actores internacionales de búsqueda de salidas negociadas al conflicto, mayormente procedentes de actores no occidentales, mientras Rusia y Ucrania siguieron rechazando la apertura de negociaciones, con condiciones y demandas aún muy alejadas.

Sudeste de Europa

Türkiye (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Türkiye, atrapada en fuego cruzado y víctima

114. Véase el resumen sobre Rusia-Ucrania en el capítulo 5 (Negociaciones de paz en Europa) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Türkiye. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Türkiye y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto armado entre Türkiye y el PKK continuó activo en el sudeste de Türkiye y, principalmente, en el norte de Iraq,¹¹⁵ si bien se redujo la letalidad de forma significativa. International Crisis Group cifró en 200 las víctimas mortales relacionadas con el conflicto armado en 2023 en Türkiye y norte de Iraq (frente a 434 en 2022, 420 en 2021), de las cuales el 75% eran miembros del PKK. Por su parte, ACLED contabilizó 137 víctimas mortales dentro de Türkiye. El PKK admitió 179 bajas propias –75 en Türkiye y 104 en el norte de Iraq–, y cifró en 912 las bajas y en 128 los heridos miembros de las fuerzas de seguridad. Türkiye cifró en 2.000 los combatientes “neutralizados” (muertos o detenidos) en Türkiye, Iraq y Siria. Türkiye continuó considerando al PKK y las fuerzas kurdas de Siria como un mismo actor. Cabe destacar que, históricamente, las alegaciones de las partes en conflicto sobre las bajas ocasionadas a la otra parte han tendido a estar sobredimensionadas.

El PKK anunció en febrero un cese de hostilidades unilateral en Türkiye, con motivo de la grave situación humanitaria causada por el terremoto de ese mes de magnitud 7,8 –seguido de miles de réplicas y de otro terremoto de 7,5– que afectó al sur de Türkiye y norte de Siria.¹¹⁶ El balance del seísmo fue devastador, con 44.000 víctimas mortales en Türkiye, en torno a 110.000 heridos en el país, 2,7 millones de personas que perdieron sus viviendas en situación sin hogar, más de 160.000 edificios colapsados o gravemente dañados y un gran trauma colectivo. Análisis también señalaron las limitaciones de la respuesta institucional y pusieron el foco en la amnistía gubernamental de 2018, que legalizó 7,4 millones de edificios con subestándares constructivos, y en deficiencias de implementación de las normativas.¹¹⁷ Pese al alto el fuego del PKK, y tras una breve pausa en los primeros días tras el terremoto, el Gobierno turco mantuvo sus operaciones contra el grupo a lo largo del año, en provincias del sudeste del país y, principalmente, en el norte de Iraq, inicialmente en niveles bajos y posteriormente intensificado. Así,

febrero, según los registros de ACLED, fue el mes con el nivel más bajo de ataques aéreos de Türkiye desde abril de 2021. Türkiye incrementó sus ataques a partir de marzo. En abril el registro de ACLED indicó un incremento del 20% de ataques aéreos de Türkiye contra el PKK en el norte de Iraq. **El PKK extendió su alto el fuego hasta después de las elecciones parlamentarias y presidenciales de mayo, pero puso fin a su tregua unilateral el 13 de junio,** alegando las continuas operaciones militares de Türkiye contra el grupo.

Tras el fin de la tregua se incrementaron las hostilidades armadas. Durante el año Türkiye aseguró haber dado muerte o captura a diversos altos cargos del PKK. Se agravaron las hostilidades en agosto, cuando los choques en la región de Zap (norte de Iraq) causaron la muerte de seis soldados turcos, según Ankara, y de 32 soldados, según el PKK, en apenas dos días. Fueron seguidos de ataques aéreos del Ejército turco. Poco después, entre el 22 y 24 de agosto, el ministro de Exteriores de Türkiye, Hakan Fida, viajó a la capital de Iraq, Bagdad, y a la región kurda de Iraq, Erbil, y mantuvo reuniones con diversas autoridades. Entre otros, se reunió con el primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistan de Iraq (KRG), Masrour Barzani. Según Hakan, tanto Bagdad como Erbil estaban comprometidos con eliminar al PKK del territorio de Iraq. En septiembre, las fuerzas kurdas (peshmergas) vinculadas al KDP –partido kurdo gobernante en la Región del Kurdistan de Iraq y socio comercial de Türkiye– atacaron posiciones del PKK en las provincias de Erbil y Dohuk. Sobresalió como confrontación directa poco habitual, señaló ACLED. En octubre se produjo en la capital turca, Ankara, un atentado suicida con bomba ante la entrada de la sede de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de Interior, que hirió a dos policías. Un segundo atacante fue abatido por la Policía. El PKK se atribuyó el ataque y afirmó que era una señal de advertencia al Gobierno turco sobre sus operaciones militares contra el grupo en Iraq y Siria. Türkiye intensificó los ataques aéreos en el norte de Iraq y Siria en represalia por el ataque en Ankara. En los últimos meses del año se produjeron nuevas hostilidades y ataques en el norte de Iraq entre el Ejército turco y el PKK. Según el Gobierno turco, 26 combatientes kurdos murieron en diciembre ataques en el norte de Iraq y Siria en diciembre en respuesta a la muerte de 12 soldados turcos en el norte de Iraq ese mes.

La reelección de Recep Tayyip Erdoğan en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de mayo y de su partido Justicia y Desarrollo en las parlamentarias de ese mismo mes supusieron continuidad en la aproximación del Gobierno al conflicto armado con el PKK a través del prisma securitario de “lucha contra el terrorismo” en Türkiye y en la región (Iraq, Siria), mientras en 2023 Türkiye estrechó relaciones con Damasco y con el

115. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

116. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

117. Gürsoy, Yaprak, “The earthquake might upend more than Turkey’s elections”, *Chatham House*, 31 de marzo de 2023; Horton, Jake y William Armstrong, “Turkey earthquake: Why did so many buildings collapse?”, *BBC*, 9 de febrero de 2023.

KRG.¹¹⁸ Se produjeron nuevas detenciones en 2023 en Türkiye de actores civiles kurdos, incluyendo opositores políticos, periodistas y activistas. Solo el 25 de abril, 110 personas fueron detenidas en 21 provincias. Organizaciones de derechos humanos denunciaron un año más graves vulneraciones de derechos por parte de las autoridades. Por otra parte, continuaron dinámicas de racismo y violencia contra población refugiada siria, agravada en el contexto del terremoto. Asimismo, en 2023 se produjeron también incidentes de violencia política en el marco del año electoral. Por otro lado, decenas de supuestos miembros de ISIS fueron detenidos durante el año.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas (incluyendo Happy Yemen Brigades), sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), Joint Forces (incluyendo las Giant Brigades), Security Belt Forces, AQPA, ISIS, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), EEUU y coalición militar internacional Guardián de la Prosperidad
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los

al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país en 2014 agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno de transición, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Adicionalmente, Yemen es escenario desde los años 1990 de actividades de al-Qaeda, en especial desde la fusión de las ramas saudí y yemení que en 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). A partir de 2014 el grupo ha aprovechado el clima de inestabilidad en el país para avanzar en sus objetivos y sus milicianos se han visto involucrados en choques con los al-houthistas, con las fuerzas gubernamentales, con tropas de EAU y milicias tribales. Desde el ataque de al-Qaeda al USS Cole en 2000, EEUU se ha visto implicado en periódicos ataques contra el grupo. El escenario de conflicto en Yemen también ha favorecido la actividad de ISIS en el territorio. En 2023 la crisis en Gaza y sus repercusiones en toda la región impactaron también en Yemen, en especial tras la decisión de los al-houthistas de lanzar ataques contra Israel y naves israelíes o con destino a Israel en el Mar Rojo, ruta que concentra el 15% del transporte marítimo mundial. Las acciones al-houthistas motivaron el establecimiento de una operación militar internacional en la zona (Guardián de la Prosperidad), integrada por una veintena de países y liderada por EEUU.

En línea con la tendencia observada el año anterior, **en 2023 se registró un significativo descenso en los niveles de letalidad asociados al conflicto armado en comparación con períodos previos. No obstante, el balance de víctimas mortales continuó siendo elevado y, por tanto, el caso yemení continuó siendo considerado como un conflicto armado de alta intensidad.** Según los datos de ACLED, durante el año murieron al menos 3.174 personas en distintos hechos de violencia (batallas, explosiones y violencia remota, violencia contra civiles),¹¹⁹ cifra que representa menos de la mitad que en 2022 (6.721 muertes) y muy por debajo de los balances de años anteriores (entre 20.000 y 23.000 víctimas mortales anuales entre 2019 y 2021). Los datos de la iniciativa Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), que documenta las muertes de civiles en hechos de violencia armada en Yemen, contabilizó 501 muertes y 1.174 personas heridas en 2023, frente a 716 y 1.602, respectivamente, el año anterior. Desde 2018, el total de muertes de civiles ronda las 17.000, según CIMP.¹²⁰ **El descenso relativo en los niveles de letalidad se explica fundamentalmente por la extensión de facto del acuerdo de tregua promovido en 2022 por la ONU.** Aunque en septiembre de ese año no se renovó formalmente, en términos generales el cese de hostilidades y otros aspectos del acuerdo se mantuvieron vigentes 2023. Ello, en un año en que

118. Véase los resúmenes sobre Siria e Iraq en este capítulo.

119. ACLED Dashboard [consultado el 1 de febrero de 2024].

120. Civilian Impact Monitoring Project [consultado el 1 de febrero de 2024].

las negociaciones para abordar el contencioso tuvieron mayor protagonismo, en particular los contactos directos entre Arabia Saudita y los al-houthistas bajo la mediación de Omán, en un escenario regional marcado también por la aproximación diplomática entre Irán y Arabia Saudita –actores regionales con importantes intereses en la contienda.¹²¹ Paralelamente, la ONU continuó promoviendo el diálogo intra-yemení y la implementación del Acuerdo de Estocolmo (2018). En el marco de este último acuerdo, en abril se produjo la liberación e intercambio de más de un millar de prisioneros –869 excarcelados por los al-houthistas y por el Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen apoyado por Arabia Saudita y otros 104 por parte de Riad.

Respecto a la situación del conflicto armado en 2023, **las hostilidades continuaron en un contexto de fragilidad y complejidad derivada de la presencia de numerosos actores armados.** Así, se produjeron choques e intercambios de fuego entre los al-houthistas y fuerzas pro-gubernamentales a lo largo de las líneas de frente, pero también hechos de violencia entre grupos armados no asociados con los al-houthistas y enfrentamientos tribales, tanto en las áreas controladas por el Gobierno como en las que están en manos de los al-houthistas. Paralelamente, se produjeron incidentes atribuidos a la filial de al-Qaeda en el país, AQPA, que continúa presente en las provincias de Abyan, Bayda, Hadramawt y Shabwah. AQPA habría cesado sus ataques contra los al-houthistas y en 2023 focalizó sus acciones contra la principal plataforma secesionista en el sur de Yemen, Southern Transitional Council y las Security Belt Forces. Las fuerzas anti al-houthistas –incluyendo el Consejo de Liderazgo Presidencial, la institución que ha reemplazado a la figura del presidente– también continuaron exhibiendo pugnas y conflictos internos. Asimismo, persistió el uso de una retórica provocativa y belicosa por parte de diversos actores armados y los al-houthistas exhibieron su poderío militar en varios desfiles y ejercicios militares. El tipo de armamento expuesto en estas exhibiciones, junto a las denuncias sobre vulneraciones al embargo de armas a los al-houthistas, confirmaron las declaraciones del propio grupo armado sobre el refuerzo de sus capacidades militares terrestres y navales.

Diversos actores del conflicto armado continuaron siendo denunciados por vulneraciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, tal y como documentó el Panel de Expertos internacional establecido por la ONU.¹²² Este panel documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, reclutamiento de menores, violencia sexual y de género, restricciones a la libertad

de expresión y obstrucción de entrega de ayuda humanitaria. Los al-houthistas fueron señalados especialmente por el alarmante incremento en el reclutamiento de menores, en especial en campos de verano; por la imposición más estricta del *mahram*, sistema de control y vigilancia a través de “guardianes” masculinos impuesto a las mujeres que, entre otras cosas, continuó afectando su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; y por las campañas de acoso y difamación de mujeres activistas, incluyendo de la diáspora. Durante 2023, la organización de mujeres Abductees Mothers Association informó al Consejo de Seguridad de la ONU de los resultados de sus investigaciones, que **desde 2016 y hasta mediados de 2023 constataron el secuestro de 9.568 personas por distintos actores del conflicto, la inmensa mayoría por parte de los al-houthistas** (9.130, incluyendo 130 mujeres). Miles de personas que han sido liberadas dan cuenta de torturas y al menos 140 habrían muerto fruto de malos tratos o malas prácticas médicas mientras permanecían retenidas. Al finalizar el año había en torno a 18 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria y enfrentaban inseguridad alimentaria. Los índices de malnutrición eran especialmente alarmantes entre la población infantil. 4,5 millones de personas permanecían desplazadas, algunas de las cuales como resultado de múltiples desplazamientos forzados en los últimos años.

Durante el segundo semestre de 2023 se intensificaron las negociaciones entre Riad y los al-houthistas y, según trascendió, las partes habían avanzado en la definición de una hoja de ruta para un proceso de paz en Yemen. Al finalizar el año, el enviado especial de la ONU para Yemen continuaba sus gestiones para coordinar los diferentes esfuerzos diplomáticos y conectar los resultados de la vía omaní con un diálogo que involucrara a los diversos actores yemeníes. Ello, en un contexto de inquietud entre algunos sectores por las consecuencias de un eventual acuerdo entre Riad y los al-houthistas que excluyera los intereses y preocupaciones de otros sectores yemeníes. En diciembre, las informaciones apuntaban a avances en torno a un compromiso para fijar las condiciones para un alto el fuego global y retomar el proceso promovido por la ONU. No obstante, para entonces la situación en Yemen también se había visto afectada por la crisis en Gaza y la creciente inestabilidad regional.¹²³ Desde mediados de octubre, **los al-houthistas decidieron lanzar una serie de ataques contra Israel y luego contra naves de propiedad israelí y/o con destino a Israel en el Mar Rojo,** condicionando el fin de sus acciones a que Israel detuviera su operación militar contra Gaza y el asedio a la Franja. Una de sus ofensivas más mediáticas tuvo lugar en noviembre, cuando los al-houthistas difundieron un vídeo de un

121. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

122. UNSC, *Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council resolution 2140 (2014)*, S/2023/833, 2 de noviembre de 2023.

123. Véase el resumen sobre Israel- Palestina en este capítulo.

grupo de hombres enmascarados que desembarcaban desde un helicóptero y tomaban el control de un barco mercante que, según trascendió, era propiedad de uno de los principales magnates de Israel. En este contexto, la flota de EEUU desplegada en la zona intervino en varias ocasiones ante las acciones al-houthistas. En diciembre, Washington anunció el establecimiento de una operación militar internacional en la zona (Guardián de la Prosperidad) integrada por una veintena de países y con el objetivo declarado de proteger la ruta comercial del Mar Rojo, que concentra el 15% del tráfico marítimo mundial. Según informaciones de prensa, al finalizar el año Washington presionaba a Arabia Saudita para postergar el acuerdo con los al-houhtistas sobre el futuro de Yemen y para que Riad se sumara a la coalición militar internacional contra el grupo armado yemení.¹²⁴

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), milicia progubernamental Unión Tribal del Sinaí (UTS)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona. La crisis en Gaza en 2023 añadió incertidumbre y desafíos a la situación en el Sinaí.

Durante 2023 el conflicto armado que se focaliza en el área del Sinaí en Egipto registró un significativo descenso en los niveles de violencia letal. Pese a las habituales dificultades para obtener información sobre las dinámicas en la región, **los datos disponibles apuntan a una reducción de los incidentes violentos** que en los últimos años han involucrado a miembros de la filial del grupo armado Estado Islámico (ISIS), autodenominada Provincia del Sinaí (Wilayat Sinai), y al Ejército egipcio con el apoyo de milicias tribales. Apenas trascendieron informaciones sobre enfrentamientos o acciones armadas, entre ellas un incidente en instalaciones policiales en la zona de Arish que resultó en la muerte de cuatro personas, y otro en septiembre, que acabó con siete personas fallecidas en la provincia de Sinaí Norte, aunque no existía claridad de si se trataba de un ataque o un accidente. Según ACLED, una decena de personas murió en Egipto en hechos vinculados a enfrentamientos o ataques explosivos durante 2023. Esta cifra representa un importante descenso en los niveles de letalidad respecto a años anteriores, donde las estimaciones apuntaban a un total de 272 (2022) o entre 150 y 220 (2021) personas fallecidas en hechos de violencia armada y en los que trascendió información sobre diversos episodios violentos con varias decenas de víctimas mortales en el Sinaí. Ya a principios de año, altos cargos egipcios –el primer ministro y el jefe del Estado Mayor– visitaron la zona de Sinaí Norte y recalcaron que la situación de seguridad era estable y que las instituciones estatales funcionaban plenamente. **El presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, aseguró en enero que Egipto “había logrado en gran medida eliminar al terrorismo en el Sinaí”**. En los meses siguientes, trascendió que milicianos de ISIS se habrían replegado a una zona montañosa en el centro del Sinaí.

En paralelo a estos desarrollos, **continuaron las denuncias de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos sobre los abusos cometidos por las autoridades egipcias en el marco de su campaña militar en el Sinaí**. Así, por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) denunció a las fuerzas de seguridad egipcias por **detenciones arbitrarias de mujeres y niñas relacionadas con presuntos miembros de ISIS**.¹²⁵ Tras documentar más de una veintena de casos ocurridos entre 2017 y 2022, HRW alertó que más de la mitad de las mujeres y niñas habían estado incomunicadas durante períodos de entre dos semanas y seis meses y que algunas de ellas habían sido golpeadas y sometidas a electroshocks por miembros de la Agencia Nacional de Seguridad. Las detenciones pretendían obtener información sobre sus familiares y/o presionar a los presuntos sospechosos para que se entregaran. La organización destaca que algunas de estas mujeres habían sido víctimas de la filial de ISIS, en forma de violaciones o matrimonios forzados, y que habían sido arrestadas después de escapar y buscar la ayuda de las autoridades. Sinai

124. Véase “Yemen: escalada de tensión en el Mar Rojo” en Escola de Cultura de Pau, *Escenarios de riesgos y oportunidades de paz*, enero de 2024.

125. Human Rights Watch, *Egypt: Women Abused Over Alleged ISIS Ties*, 17 de mayo de 2023.

Foundation for Human Rights también denunció que **las milicias tribales que colaboran con el Ejército egipcio en la campaña contra ISIS habían reclutado a menores**, incluso de 16 años, para actividades logísticas y de combate, algunos de los cuales habían muerto o resultado heridos.¹²⁶ Adicionalmente, varias organizaciones de derechos humanos egipcias condenaron **el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las protestas pacíficas organizadas por cientos de personas desplazadas forzosamente por la campaña contra ISIS** en la zona noreste del Sinaí desde 2013, en particular en las áreas de Rafah y Sheikh Zuwaid.¹²⁷ Las manifestaciones reivindicaron el derecho a retornar a sus hogares y denunciaron el incumplimiento de las autoridades, que se habían comprometido a que estas personas pudieran regresar antes del 20 de octubre de 2023. Las entidades recordaron que, bajo el pretexto de la campaña antiterrorista, el Gobierno egipcio había cometido múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las poblaciones de la zona, provocando el desplazamiento forzado de cerca de 150.000 residentes de Sinaí Norte, destruyendo miles de hogares y degradando miles de hectáreas de tierras agrícolas. También reiteraron que la colaboración por parte de milicias tribales para erradicar a ISIS de la zona respondía en parte a promesas de las autoridades sobre el retorno de población desplazada.

Las protestas en el Sinaí se intensificaron en el último trimestre en medio de temores sobre los planes de Israel de forzar el desplazamiento de población palestina de Gaza a este territorio egipcio. **La crisis en Gaza también alentaba incertidumbre sobre el futuro del Sinaí.** Según trascendió, El Cairo rechazó en diciembre una petición del Gobierno de Benjamin Netanyahu para acceder militarmente al corredor Philadelphi/Salaheddin –se le conoce por ambos nombres–, una franja de territorio de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto, desmilitarizada según el acuerdo de paz entre Israel y Egipto de 1979. El Gobierno israelí asegura que Hamas utiliza esta zona para ingresar armas a la Franja, acusación que niegan las autoridades egipcias. **Las tensiones en torno a este corredor amenazaban con deteriorar las relaciones entre Israel y Egipto, mientras análisis advertían sobre una posible remilitarización del Sinaí.** Una remilitarización que ya se había producido gradualmente en los últimos años por parte de Egipto en el marco de su campaña contra ISIS, con la anuencia –no pública– de Israel. Cabe destacar que, ante la escalada de violencia desde octubre, El Cairo se implicó en iniciativas para intentar mediar entre Hamás e Israel, motivado por evitar las repercusiones de la crisis de Gaza en su territorio, en particular el posible ingreso de población refugiada palestina al Sinaí y la reactivación de grupos armados.¹²⁸

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes Unidades de Movilización Popular (UMP) y Saraya Salam, milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Türkiye
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Saddam Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio del Gobierno de victoria contra ISIS el año anterior, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes y, desde finales de 2023, por las repercusiones en toda la región de la crisis en Gaza.

En 2023 Iraq siguió siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad, con participación de numerosos actores armados y persistentes impactos en civiles, aunque los niveles de letalidad asociados a la violencia en el país fueron relativamente inferiores respecto al año anterior y a los períodos de mayor intensidad en las hostilidades (2003-2008 y 2014-2017). Según los datos de ACLED, durante el último año se registraron 1.334 muertes en Iraq en diversos hechos de violencia e incidentes asociados al conflicto

126. Sinai Foundation for Human Rights, *I Was Afraid...I Was Only 17*, 8 de agosto de 2023.

127. Sinai Foundation for human Rights, *Egypt: Authorities must stop security violence against civilians in northeastern Sinai, and allow the displaced to return to their lands*, 26 de octubre de 2023.

128. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

armado, una cifra inferior a las 4.427 contabilizadas el año anterior.¹²⁹ Los datos de Iraq Body Count (IBC) sobre víctimas civiles apuntan a una tendencia similar: 537 en 2023 frente a 740 en 2022.¹³⁰ La misión de la ONU en el país, UNAMI, también informó de la muerte de decenas de civiles en 2023 como resultado de remanentes de la guerra, artefactos explosivos, incidentes armados, intercambios de fuego y ataques aéreos, entre otros incidentes. Hasta finales de año la cifra de personas desplazadas por la violencia que había regresado a sus hogares era de 4,9 millones, pero otras 1,12 millones permanecían desplazadas dentro del país en asentamientos formales e informales y se estimaba que desde 2016 más de 100.000 personas se enfrentaban también a situaciones de desplazamiento por cuestiones relacionadas con el clima.

Las dinámicas de violencia en el país continuaron implicando a numerosos actores locales, regionales e internacionales.

El grupo armado ISIS siguió activo y protagonizó acciones principalmente en las provincias de Anbar, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninawa y Sala al-Din. Las fuerzas de seguridad iraquíes continuaron también sus operaciones contra la organización. Según UNAMI, en el primer semestre del año se contabilizaron 178 ataques de ISIS, frente a 526 en 2022. La cifra sería la más baja desde que las autoridades iraquíes declararon su victoria contra ISIS en 2017 y se interpreta como una señal del declive de las acciones del grupo en el país. El propio ISIS a través de sus medios de propaganda reivindicó 141 ataques en Iraq (hasta noviembre) frente a 401 en 2022 (en el mismo período), frente a una mayor proporción de acciones en África. No obstante, según estimaciones de personas expertas de la ONU dadas a conocer a mediados de año, **ISIS aún contaría con entre 5.000 y 7.000 combatientes entre Siria e Iraq.** Paralelamente, Türkiye continuó con sus incursiones armadas terrestres y aéreas en el norte de Iraq en el marco de su conflicto armado con el PKK y grupos afines, principalmente en las zonas de Erbil, Dohuk y Suleimaniya. Ankara insistió en enmarcar sus acciones en el ejercicio del “derecho a la autodefensa”, frente a la posición de Bagdad que formalmente las considera como vulneraciones a la soberanía iraquí. Entre otros hechos, Türkiye decretó el cierre del espacio aéreo con destino o procedencia de Suleimaniya tras denunciar una intensificación de las actividades del PKK en la zona y lanzar un ataque contra el responsable de las fuerzas kurdas de Siria (YPG).¹³¹ A lo largo del año también se registraron tensiones intra-kurdas –entre los grupos KPD y PUK–, disputas y enfrentamientos entre facciones shiíes –entre los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr y miembros

A partir del último trimestre, como consecuencia de la crisis en Gaza, se intensificaron los ataques contra intereses de EEUU en Iraq y las ofensivas estadounidenses contra milicias pro-iraníes en el país

de Asaib Ahl al-Haq (AAH), de órbita iraní, entre otros episodios–, y choques tribales, principalmente en el sur del país. En 2023, Irán también presionó a Iraq para forzar el repliegue de varios grupos de la oposición kurda iraní de la zona fronteriza.

Durante el último trimestre, la situación en el país también se vio afectada por la crisis de Gaza. Desde octubre se **intensificaron tanto las amenazas como los**

ataques por parte de numerosos actores armados iraquíes contra personal, intereses e instalaciones de EEUU en Iraq, en represalia por su apoyo político y militar a Israel.

Las ofensivas también alcanzaron posiciones de la coalición militar internacional contra ISIS liderada por Washington. La mayor parte de las acciones fueron reivindicadas por la autodenominada “Resistencia Islámica de Iraq”, que reúne a varios grupos pro-iraníes. Washington también intensificó sus acciones en el país, principalmente contra grupos como Kataib Hezbollah, Harakat Hezbollah y la

Resistencia Islámica de Iraq, causando la muerte de varios miembros de estos grupos. En este contexto, al finalizar el año se incrementaban las críticas de diversos actores iraquíes a las ofensivas militares de EEUU en el país y los cuestionamientos a que Washington mantenga una presencia militar en Iraq (de unos 2.500 efectivos). Cabe recordar que en 2023 se cumplieron 20 años de la invasión al país liderada por EEUU, ocasión que alentó diversos análisis y balances sobre la situación en el país y alertaron sobre la persistencia de las dinámicas de violencia y la frágil e inestable situación económica que afronta. Respecto a los hechos de 2023, cabe destacar también que a mediados de año se produjeron una serie de protestas en Bagdad y otras ciudades del país en reacción a la quema de ejemplares del Corán en Europa. Los incidentes motivaron una crisis diplomática de Iraq con Suecia. En algunas de las manifestaciones en Iraq se quemaron banderas LGTBQ+.¹³²

Israel – Hezbollah ¹³³	
Inicio:	2023
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Hezbollah
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto tiene como telón de fondo la cuestión palestino-israelí y sus consecuencias en la región. Por una parte, la

129. ACLED Dashboard [consultado el 3 de febrero de 2024].

130. Iraq Body Count [consultado el 3 de febrero de 2024].

131. Véase el resumen sobre Türkiye (sudeste) y sobre Siria en este capítulo.

132. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

133. Este conflicto armado involucra e impacta de maneras diversas a otros actores regionales. En anteriores ediciones del informe las dinámicas de esta disputa eran analizadas en el capítulo de Tensiones bajo la denominación “Israel – Siria – Líbano” y los análisis de los últimos años destacaban la creciente implicación también de Irán en esta contienda.

presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país. Las fuerzas israelíes invadieron el sur del Líbano en 1978 y de nuevo en 1982 bajo el argumento de expulsar a las milicias palestinas que usaban la región para lanzar ataques a Israel. El nacimiento del grupo político y armado shií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano –en el marco de la guerra civil en el país–, con una agenda de oposición a Israel, rechazo a la presencia occidental en Oriente Medio y liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala contra Líbano de julio de 2006. Considerado como uno de los actores armados no estatales más poderosos de la región, Hezbollah cuenta con Irán como su principal respaldo exterior y en los últimos años se ha implicado en operaciones bélicas en Siria e Iraq y en la asistencia militar a otros grupos armados con agendas afines en la región. En 2023, la crisis en Gaza y la consiguiente intensificación de las tensiones en todo Oriente Próximo derivaron en una nueva fase del conflicto armado entre Israel y Hezbollah. Desde 1978, en la zona fronteriza de facto entre Líbano e Israel se encuentra desplegada una misión de la ONU, la UNSMIL, con un mandato que ha ido evolucionando y que incluye la supervisión del repliegue de las fuerzas israelíes del sur de Líbano (2000) y del cese de hostilidades (tras la guerra de 2006).

La intensificación de las tensiones en todo Oriente Próximo como resultado de la crisis en Gaza abrió un frente de especial relevancia en la zona fronteriza de facto entre Israel y Líbano. **El incremento en la magnitud, frecuencia y alcance de las hostilidades entre las fuerzas israelíes y Hezbollah y las repercusiones de la violencia motivaron que la situación pasara a ser considerada como un conflicto armado a finales de 2023.** La tensión entre Israel y el partido-milicia shií se había escenificado ya desde principios de año en una retórica hostil, belicista y en intercambios de amenazas. Uno de los principales elementos de fricción fue Jerusalén y, en particular, las acciones de autoridades israelíes en la Explanada de las Mezquitas, que fueron rechazadas por Hezbollah (y también por otros actores árabes y musulmanes). En enero, ante la polémica visita a la zona del nuevo ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el líder del grupo shií libanés, Hassan Nasrallah, advirtió que las infracciones al status quo en la explanada podrían alentar un caos regional. En abril, la represión de la Policía israelí a palestinos y palestinas en la mezquita de Al-Aqsa¹³⁴ motivó el lanzamiento de más de una treintena de cohetes desde el sur de Líbano al norte de Israel, en un episodio que fue considerado como el mayor bombardeo transfronterizo desde la guerra de 2006. Israel atribuyó el ataque a Hamas y lanzó ataques aéreos contra presuntas instalaciones del grupo palestino en Líbano. En los meses siguientes se informó de diversos intercambios armados en las áreas fronterizas en disputa, incluyendo las Granjas de Shebaa y Ghajar. Este tipo de incidentes se habían incrementado desde mediados de 2022. En junio, Hezbollah aseguró haber derribado un dron israelí que había ingresado al espacio aéreo libanés

en la zona de Zibqin (sur).

La situación se deterioró a partir de octubre. **Desde los ataques de Hamas y el inicio de la campaña militar israelí en Gaza, se advirtió sobre las repercusiones en la zona fronteriza de facto entre Israel y Líbano y de una intensificación de la frecuencia y el alcance de los intercambios de fuego a lo largo de la Línea Azul.**¹³⁵ En los hechos participaron las fuerzas israelíes, Hezbollah y esporádicamente también miembros de grupos palestinos como las Brigadas al-Qassam de Hamas y la Jihad Islámica, que reivindicó intentos de infiltración desde Líbano. Diversos análisis subrayaron entonces que, pese al incremento de las hostilidades, tanto las acciones de Israel como las Irán y sus actores próximos, incluyendo Hezbollah, parecían indicar que ninguna de las partes deseaba escalar la situación hasta una confrontación directa de mayor alcance regional. La milicia libanesa intentó demostrar su solidaridad con el pueblo palestino, pero al mismo tiempo, no traspasar un umbral que pudiera arrastrar a Líbano a una nueva guerra con Israel en un momento especialmente crítico para el país, afectado por una severa crisis política y económica. A pesar de esta aproximación, a finales de octubre los intercambios armados prácticamente diarios entre Hezbollah y las fuerzas israelíes ya habían causado la muerte a más de cincuenta personas además de importantes desplazamientos de población. **En noviembre, en su primer mensaje público tras los hechos de octubre, Nasrallah señaló su apoyo a Hamas, denunció las acciones de Israel en Gaza y la complicidad de EEUU,** pero evitó comprometer a Hezbollah en una mayor implicación en el conflicto. Cabe mencionar que tras el 7 de octubre Washington desplegó dos portaaviones en el Mediterráneo Oriental e incrementó su presencia militar en la región, en un movimiento que justificó como una medida “para disuadir a cualquier país o grupo que quisiera aprovechar la inestabilidad y confusión” en la zona, en aparente alusión a Irán y Hezbollah. En este contexto, el acuerdo temporal de tregua entre el Gobierno de Israel y Hamas mediado por Qatar a finales de noviembre fue respetado también de facto en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. No obstante, el colapso de la tregua y la reanudación de las hostilidades derivó en una significativa intensificación de la violencia desde principios de diciembre.

A finales de año, los balances de letalidad a causa del conflicto apuntaban a un total de al menos 165 personas: 134 milicianos de Hezbollah, un soldado libanés y una veintena de civiles libaneses, además de al menos nueve soldados y un civil israelí. La violencia y frágil situación de seguridad en el área fronteriza también había motivado el **desplazamiento forzado de unos 100.000 israelíes –evacuados por las autoridades desde octubre y por un tiempo indefinido– y de otros 50.000 libaneses residentes en el sur del país.** Paralelamente, cabe destacar que durante el último trimestre también **se incrementaron**

134. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en este capítulo.

135. La Línea Azul (Blue Line) es la línea que marca la zona de repliegue de las fuerzas israelíes del sur de Líbano en 2000. Aunque no es una frontera internacional, en la práctica opera como límite entre Líbano e Israel.

los hechos de violencia en Siria en los que se vieron involucrados Israel, milicias pro-iraníes y Hezbollah.¹³⁶

Fuerzas de la milicia libanesa lanzaron ataques desde territorio sirio hacia Israel, mientras que ofensivas aéreas israelíes habrían causado la muerte de más de una quincena de miembros de Hezbollah en Damasco, Homs y Quneitra. Al finalizar el año el contexto general en la región era de mayor volatilidad y menor contención por parte de diferentes actores armados, más proclives a hacer demostraciones de fuerza. El asesinato en Beirut del número dos de Hamas y de otros dos dirigentes de Hezbollah en el sur de Líbano en sendos ataques israelíes la primera semana de enero de 2024 anticipaban una posible escalada de la violencia en el año entrante. Cabe mencionar que durante 2023 la misión de la ONU en Líbano (UNIFIL) continuó desarrollando sus tareas y se vio afectada también por la escalada de violencia y los intercambios de fuego a partir de octubre, incluyendo la caída de un proyectil en su centro de mando en Naqoura y heridas de dos miembros de la misión en acciones armadas que afectaron las posiciones de UNIFIL. La Coordinadora especial de la ONU para Líbano mantuvo reuniones con altos cargos libaneses y representantes diplomáticos en las que subrayó la necesidad de reducir la tensión y evitar que el país se viera arrastrado a un conflicto de mayor magnitud teniendo en cuenta la fragilidad de la situación política y económica en el país –el mandato del presidente expiró en octubre de 2022 y el Gobierno sigue siendo de carácter provisional. Un elemento adicional que considerar en esta dinámica son las tensiones entre grupos palestinos radicados en Líbano. Durante 2023, varios enfrentamientos entre facciones armadas de Fatah y grupos islamistas palestinos en el campo de refugiados de Sidón entre julio y septiembre provocaron al menos 30 muertes y cientos de personas heridas. Tras la intervención del portavoz del Parlamento libanés se alcanzó un acuerdo de cese el fuego a mediados de septiembre que derivó en el despliegue de una fuerza conjunta dentro del campo y de las Fuerzas Armadas Libanesas en su perímetro.

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, brigadas de Jenín, Nablus y Tubas, Lion's Den
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada

136. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo (1993) que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se vio impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

La violencia se intensificó de manera exponencial a partir del último trimestre 2023, alcanzando niveles inéditos en décadas, y con efectos de amplio alcance no solo para la cuestión palestino-israelí, sino en todo Oriente Medio. La situación ya había dado señales de deterioro en los primeros meses del año, con una multiplicación de incidentes y hechos de violencia, un aumento de las incursiones israelíes en Cisjordania, retórica y acciones provocativas de miembros del gabinete israelí en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, entre otros hechos. En mayo, se produjeron intercambios de fuego entre las fuerzas israelíes y la Jihad Islámica en Gaza que se saldaron con la muerte de 33 palestinos y un israelí. **A mediados de año, la ONU advertía que las muertes palestinas en distintos hechos de violencia en Cisjordania ya superaban todas las registradas en 2022 y suponían el peor balance desde 2005.** También alertaba que los ataques de colonos israelíes habían aumentado un 40% en el primer semestre, situándose en el peor nivel desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2006. En este contexto, **el 7 de octubre un ataque sin precedentes de Hamas y la Jihad Islámica contra varias localidades israelíes y un festival de música en áreas adyacentes a Gaza acabó con la muerte de unas 1.200 personas, entre israelíes y extranjeras, mientras que cerca de 200 fueron tomadas como rehenes.** El Gobierno de Benjamin Netanyahu se declaró en “estado de guerra” y emprendió una operación militar con el objetivo declarado de eliminar a Hamas. Las autoridades israelíes impusieron un asedio total contra Gaza, bloqueando el acceso de todo tipo de suministros y endureciendo aún más el bloqueo al que ya sometía a la Franja desde 2007. Paralelamente, Israel inició una incesante ofensiva militar aérea y, desde finales de octubre, también terrestre desde el norte hacia el sur de Gaza, con una intensidad de fuego y potencia destructiva de extraordinaria magnitud. **Al finalizar el año, más de 25.000 palestinos y palestinas habían muerto en Gaza a causa de la operación israelí –y se estimaba que otras 8.000 personas estaban sepultadas bajo los escombros,** mientras análisis advertían que la tasa de mortalidad media en la Franja era más alta que la de cualquier otro conflicto armado en el mundo en el siglo XXI.

Según balances basados en fuentes israelíes, unos 175 soldados habían muerto en enfrentamientos con Hamas y otras milicias desde el inicio de la operación terrestre. Las fuerzas israelíes aseguraban haber dado muerte a unos 8.000 miembros del grupo palestino y detenido a otros millares más.

La ofensiva israelí contra Gaza fue crecientemente denunciada como un castigo colectivo por su devastador impacto para toda la población de la Franja: el 70% de las víctimas mortales de la ofensiva israelí eran mujeres y menores palestinos –revirtiendo así la tendencia observada en los últimos 15 años en los que la mayoría (67%) de las víctimas civiles eran hombres.¹³⁷ Cerca de 10.000 niñas y niños palestinos habían muerto en los ataques, una cifra que supera a todos los menores fallecidos en contextos de conflicto armado en el mundo desde 2019. La cifra de personas heridas superaba las 60.000, algunas de ellas producto del uso de armas prohibidas en zonas pobladas, como el fósforo blanco, como denunció HRW. Los ataques israelíes sistemáticos contra los hospitales de la Franja –menos de la mitad estaban operativos a fines de 2023– y la falta de medicinas a causa del bloqueo –incluyendo anestésicos y antibióticos– repercutieron directamente en las posibilidades de atención a víctimas, personas enfermas y embarazadas.¹³⁸ Hasta finales de año los bombardeos israelíes habían destruido total o parcialmente el 60% de las viviendas de Gaza y habían forzado el desplazamiento de un 75% de la población –1,7 de 2,3 millones. **La población palestina se vio obligada a desplazarse en varias ocasiones –primero de norte a sur y luego hacia el oeste–, atacada en rutas identificadas como “seguras” por Israel, y obligada a concentrarse en áreas cada vez más reducidas.** A fines de 2023 cerca de la mitad de la población gazatí se concentraba en Rafah (fronteriza con Egipto) en condiciones de extrema precariedad, con graves carencias de higiene, alimentos, combustible y medicinas, y en un contexto invernal que alentaba aún más la proliferación de enfermedades. Agencias y ONG advertían al finalizar el año que prácticamente toda la población gazatí afrontaba un riesgo de hambruna. Los ataques israelíes también causaron la muerte de más de un centenar de periodistas y numerosos trabajadores humanitarios en Gaza, entre ellos más de un centenar de trabajadores de la UNRWA. En paralelo, la situación en Cisjordania empeoró significativamente, con una intensificación de los ataques israelíes –incluyendo ofensivas aéreas–; imposición de restricciones de movimiento; numerosas detenciones –se duplicó el número de palestinos

La ofensiva israelí contra Gaza fue denunciada como un castigo colectivo contra la población de la Franja y alentó la presentación de una demanda contra Israel por vulneración de la Convención contra el Genocidio por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia

detenidos por Israel–; una escalada en los ataques perpetrados por colonos; desplazamientos forzados de más de 2.000 personas –la mitad de ellas menores–; y la muerte de otras 200 personas, elevando a 551 el balance de muertes violentas en Cisjordania en 2023. Ante estos hechos, **diversas voces alertaron sobre la comisión de crímenes de guerra y actos de genocidio. A finales de diciembre, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándole de vulnerar la Convención contra el Genocidio.** En enero de 2024, la CIJ dio curso a la demanda tras identificar indicios plausibles de genocidio y dispuso una serie de medidas cautelares.¹³⁹ Desde el inicio de la escalada en octubre se activaron canales diplomáticos para intentar abordar la crisis, tanto para intentar garantizar el acceso de ayuda humanitaria como para conseguir un alto el fuego. **No fue hasta noviembre que, con la mediación de Qatar –apoyado por EEUU y Francia– que Israel y Hamas acordaron un cese temporal de hostilidades que estuvo vigente durante una semana.** En este período fueron liberados más de un centenar de rehenes –israelíes y extranjeros– y fueron excarceladas 240 mujeres y menores que permanecían detenidos en cárceles israelíes, buena parte de ellos bajo la figura de “detención administrativa”. Hasta finales de 2023 proseguían los intentos por establecer una nueva tregua o un alto el fuego. Paralelamente, la crisis en Gaza motivó intensos debates y tensiones a nivel internacional, en especial en el seno de la ONU, en los que se evidenció el peso del apoyo político –además de militar– de EEUU a Israel, así como el de otros países europeos que se negaron a exigir un cese el fuego bajo el argumento de no comprometer el presunto derecho de Israel a la autodefensa. Washington vetó o amenazó con vetar varios proyectos de resolución y durante 2023 el Consejo de Seguridad solo aprobó dos que se limitaron a pedir pausas y el acceso sin trabas a la ayuda

humanitaria, además de la liberación sin condiciones de los rehenes –unos 136 permanecían en Gaza–, pero no exigieron un alto el fuego sostenido e inmediato en los términos que venían reclamando numerosas voces, incluyendo el secretario general de la ONU. **La crisis en Gaza también motivó un significativo incremento de las tensiones y hostilidades en Oriente Medio.** Entre otras dinámicas, favoreció una creciente confrontación entre Hezbollah y fuerzas israelíes¹⁴⁰ y una intensificación de los ataques a objetivos estadounidenses en Iraq y Siria por parte de milicias pro-iraníes y de los ataques de Washington contra estos grupos.¹⁴¹ Desde Yemen, los ataques de los al-houhtistas contra Israel en respuesta a su ofensiva sobre Gaza y luego contra las naves

137. UN Women, *Statement on Gaza by UN Women Executive Director Sima Bahous*, 19 de enero de 2024.

138. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

139. International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) - The Court indicates provisional measures*, 26 de enero de 2024.

140. Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en este capítulo.

141. Véase el resumen sobre Iraq y Siria en este capítulo.

que tuvieran relación con o destino a Israel en el Mar Rojo motivaron el despliegue de una operación militar internacional liderada por EEUU y abrieron otro frente de inestabilidad.¹⁴²

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición liderada por las milicias kurdas YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Türkiye, Hezbollah, Irán, Rusia, Grupo Wagner, Israel
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio y con un papel destacado en el conflicto árabe-israelí, en el plano interno se ha caracterizado por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Siria continuó siendo escenario de uno de los conflictos armados de mayor intensidad a nivel mundial. **En 2023 los niveles de violencia registraron un ligero repunte respecto a los últimos años, aunque las cifras de mortalidad continuaron lejos del peor período de confrontación**, hace ya un lustro, cuando se contabilizaban decenas de miles de personas fallecidas anualmente. Según las cifras de ACLED, **durante el último año se registraron 6.254 muertes a causa de hechos de violencia** vinculados al conflicto, un número superior si se compara con las 5.649 de 2022 y 5.735 de 2021.¹⁴⁴ El balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) indica un total de 4.361 víctimas mortales, pero apunta la misma tendencia: la cifra sería la más alta en tres años y revierte la evolución descendiente

observada. De hecho, los recuentos de SOHR señalaron que 2022 había sido considerado como el año con menor número de víctimas desde el inicio del conflicto armado en 2011. Los datos de SOHR también indican que, del total de personas fallecidas en 2023, 1.889 eran civiles, incluyendo 307 menores, que elevan a casi 24.000 el número de niñas y niños muertos desde el comienzo de las hostilidades. Durante el año **continuaron registrándose vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en todo el país**, tanto en las áreas controladas por el régimen de Bashar al-Assad como en las que están bajo control de actores no estatales. **La situación económica y humanitaria continuó deteriorándose, con más de 15 millones de personas necesitadas de asistencia**. Los retos en este ámbito se agravaron también por las consecuencias de devastadores terremotos que afectaron a Türkiye y Siria a principios de año.

Los sismos ocurridos en febrero causaron entre 6.000 y 8.500 muertes y una ingente destrucción en el noroeste sirio, un área controlada por fuerzas opositoras al régimen y que alberga a una numerosa población desplazada internamente a causa del conflicto armado. La respuesta internacional, incluyendo de la ONU, fue denunciada como insuficiente, mientras que Damasco impuso obstáculos para la entrega de ayuda. El régimen intentó aprovechar el impacto del terremoto para rehabilitarse internacionalmente y controlar los flujos de asistencia humanitaria y se vio beneficiado por un levantamiento parcial de las sanciones. De hecho, la catástrofe permitió a Damasco intensificar los contactos diplomáticos con varios países árabes y facilitó la readmisión de Siria en la Liga Árabe en mayo. El cambio de postura de la organización hacia Damasco se explicaría, entre otros factores, por el deseo de frenar el flujo de drogas –en particular captagon– que sale del país con la complicidad del régimen y de abordar la cuestión de la población refugiada siria en varios Estados de la región. Ante esto último, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria subrayó que la reducción (relativa) en los niveles de violencia no es por sí solo un criterio para garantizar un regreso seguro, teniendo en cuenta las frecuentes denuncias de persecución, agresiones y represalias contra las personas retornadas.

Pese a la devastación causada por los terremotos, tras una breve tregua los combates entre las partes en conflicto se reanudaron y las hostilidades se intensificaron, en especial en el último trimestre del año. El país continuó dividido en distintas áreas de influencia que registraron diversas dinámicas de violencia con implicación de numerosos actores armados. Entre las dinámicas y hechos de violencia más destacados del año, cabe mencionar que en el noroeste continuaron los enfrentamientos, principalmente entre Hay'at Tahrir al-

142. Véase el resumen sobre Yemen en este capítulo.

143. ACLED Dashboard [consultado el 5 de febrero de 2024].

Sham (HTS) y fuerzas progubernamentales en zonas de Idlib, Aleppo, Hama y Latakia. Tras la muerte de un coronel ruso en un ataque de HTS en mayo, fuerzas de Moscú y del régimen lanzaron una intensa ofensiva aérea en el sur de Latakia. También prosiguió la competencia en la zona entre distintas facciones por intereses materiales y territoriales. **Las hostilidades se intensificaron en la región noroeste a principios de octubre, después de que un ataque contra una academia militar en Homs causó la muerte de más de un centenar de personas.** Este hecho derivó en nuevos enfrentamientos y en el desplazamiento forzado de más de 120.000 personas, en la escalada más grave en la zona desde 2019. En el noreste persistieron los intercambios armados entre las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), lideradas por las fuerzas kurdas YPG/YPJ, y las fuerzas militares turcas en zonas de Aleppo, Al-Hasaqa y Raqqa.¹⁴⁴ Al finalizar el año también se produjeron enfrentamientos entre las SDF y grupos tribales árabes, que causaron el desplazamiento forzado de unas 27.000 personas. Durante 2023 las SDF y las fuerzas de EEUU también anunciaron diversas operaciones contra milicianos de ISIS. Paralelamente, **ISIS continuó perpetrando ataques en el este y sur del país.** Uno de los ataques más cruentos del grupo se produjo en febrero en la provincia de Homs y causó la muerte a más de 60 personas. En mayo, la organización reivindicó su primer ataque en Damasco desde 2021. ISIS también protagonizó enfrentamientos con fuerzas del régimen y mercenarios del grupo Wagner. Mientras tanto, en el sur del país continuaron los ataques contra miembros y personas afines al régimen, ex combatientes de la oposición que han suscrito acuerdos de “reconciliación” con el Gobierno y civiles. En la provincia de Deraa, en junio, las fuerzas sirias lanzaron una serie de ataques aéreos e incursiones militares contra grupos opositores armados que se niegan a “reconciliarse” con el Gobierno, en los primeros ataques de este tipo en la zona en cinco años. Adicionalmente, se multiplicaron los incidentes de inseguridad asociados al tráfico de drogas, motivando una incursión directa de Jordania que causó la muerte de siete civiles en mayo. Ammán, que había advertido que emprendería acciones militares en Siria para hacer frente al tráfico de drogas, se sumó así a los otros cuatro ejércitos extranjeros que intervinieron y/o estuvieron presentes en Siria: Irán, Rusia, EEUU e Israel. **Las fuerzas israelíes llevaron a cabo numerosas incursiones aéreas durante el año, incluyendo ataques contra los aeropuertos de Aleppo y Damasco.** Ya en el primer

Pese a la devastación causada por los terremotos, tras una breve tregua los combates entre las partes en conflicto se reanudaron en Siria y las hostilidades se intensificaron en el último trimestre del año

semestre el Gobierno israelí reconocía haber duplicado sus ataques contra objetivos iraníes en Siria desde diciembre de 2022. **La inestabilidad derivada de la crisis en Gaza también tuvo repercusiones en el contexto sirio.** Así, se intensificaron las acciones israelíes en territorio sirio contra objetivos de Irán y Hezbollah,¹⁴⁵ los ataques de presuntas fuerzas respaldadas por Irán desde territorio sirio y también las ofensivas –más de cincuenta solo desde octubre y hasta finales de año– de milicias proiraníes contra fuerzas de EEUU estacionadas tanto en Siria como en Iraq, que derivaron a su vez en acciones armadas de Washington.¹⁴⁶ A finales de diciembre, Teherán advirtió a Israel de represalias tras la muerte de un alto cargo militar iraní, el general Razi Mousavi, en un ataque israelí en Siria. Durante todo el año las minas y otros artefactos explosivos provocaron la muerte a numerosos civiles en diferentes regiones del país.

En otros hechos destacados, en junio, y como resultado de iniciativas de la sociedad civil siria –en especial de organizaciones de familiares–, **la Asamblea General de**

la ONU resolvió establecer una institución independiente para esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas en Siria. En 2023, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria también publicó un extenso informe sobre los continuos malos tratos y torturas en el país en el período 2020-23 y denunció más casos de muerte de personas detenidas. El informe analiza casos ocurridos en centros de detenciones del Gobierno y de tres grupos armados que controlan territorio y mantienen personas detenidas (HTS, SNA, FDS) y concluye que, si bien las formas de tortura y patrones de detención arbitraria

y desapariciones forzadas son similares, la escala es significativamente mayor en las áreas controladas por el régimen.¹⁴⁷ Cabe destacar también que en el noreste de Siria más de 51.000 personas, en su mayoría mujeres y menores de 12 años –incluyendo unas 35.000 personas extranjeras– permanecían retenidas en los campamentos de al-Howl y Roj. Respecto a los impactos de género del conflicto y las repercusiones específicas en las mujeres y las niñas, durante 2023 se alertó sobre las ingentes dificultades de las mujeres cabeza de familia para satisfacer sus necesidades básicas, las dificultades de acceso a salud reproductiva, el incremento de matrimonios forzados y precoces en todo el país y el agravamiento de situaciones de discriminación y violencia tanto en los espacios públicos como privados.¹⁴⁸

144. Véase el resumen sobre Türkiye (sudeste) en este capítulo.

145. Véase el resumen sobre Israel – Hezbollah en este capítulo.

146. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

147. ACNUDH, *No End in Sight: Torture and ill-treatment in the Syrian Arab Republic 2020-2023*, 10 de julio de 2023.

148. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).